

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO

Instituto del Conurbano - Maestría de Economía Social

Tesis de Maestría

**ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA Y HORIZONTES COMUNITARIOS EN LAS
ECONOMÍAS POPULARES: UN ESTUDIO A PARTIR DE LAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS URBANAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
(2015-2023)**

Maestranda: Mariana Moricz

Directora de Tesis: Dra. Nela Lena Gallardo Araya

Los Polvorines, 2023

RESUMEN

La presente investigación se propone interpretar el rol que cumplen las prácticas agrícolas urbanas en las estrategias de resistencia desplegadas por las organizaciones de las economías populares del territorio urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires en el período 2015-2023. Se utilizó la metodología de estudio de casos múltiples de tipo instrumental, desde el enfoque cualitativo. La información recolectada se obtuvo a partir de entrevistas en profundidad realizadas a dirigentes, militantes y trabajadores de las organizaciones seleccionadas, observaciones a campo entre los meses de julio de 2022 y mayo de 2023 y más de 15 años de trabajo territorial en el ámbito de referencia. Como parte de los resultados, se identificaron dinámicas que buscan restituir formas de “lo común”, no sólo como modo de organizar los procesos económicos, sino también, como definición de los horizontes políticos de las organizaciones. Al mismo tiempo se detectó la configuración de territorialidades de la defensa, frente a los dispositivos de despojo y confrontación que los modelos de acumulación vigentes ejercen sobre las mayorías populares. En ese contexto, concluimos que el despliegue de las economías populares adquiere un sentido de “economías de la resistencia”, en donde al mismo tiempo que se construye la alternativa, se defiende lo conquistado.

***Palabras clave:** prácticas agrícolas urbanas, economía popular, producción de lo común, territorialidad de la defensa, economía de la resistencia, horizontes comunitarios*

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer al Movimiento Popular Los Pibes por haberme permitido ser parte de sus luchas y sueños, y mostrarme el incansable valor de nuestro pueblo por transformar el mundo. Si bien asumo la responsabilidad de lo escrito en estas páginas, que es apenas un pequeño fragmento, espero hacer honor a lo compartido. A Luciano, por la amistad y lo tramado en conjunto; a Marta y Claudia, por la alegría, la garra y la historia; por supuesto a Lito, por ser maestro entre los maestros, y a todas las compañeras y compañeros que no bajan los brazos.

Al Movimiento Evita de San Isidro y a la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste, por compartirme sus historias de lucha, sus ideas, sus logros y dificultades, y permitirme reflejarlas en este trabajo. A Sabrina Jaime, a Andrea, Mery y Héctor, y a Daniel Díaz, Eduardo Catalano, Ignacio y Rodo, gracias por la predisposición, las entrevistas y charlas compartidas.

A mi directora, Nela Gallardo, infinito agradecimiento, por el compromiso en acompañar el proceso, por la lectura rigurosa, atenta y precisa, por animarse a la vertiginosidad que exigían los tiempos, por los consejos en todos los niveles y ayudarme a encontrar aquello que quería reflejar. Sin su apoyo, no hubiese podido llegar hasta acá.

Al INTA por haberme permitido durante cuatro meses dedicarme a la escritura de este trabajo y que gracias al apoyo y gestiones de Santiago Masondo y Analía Herlein fue posible. A Roberto Cittadini, quien allá lejos y hace tiempo, me animó y colaboró para que pueda realizar este posgrado.

A Luciana Alonso, con quien compartimos el entusiasmo por el complejo mundo de acompañar la agricultura en la urbanidad del Área Metropolitana de Buenos Aires. Le agradezco su apoyo para realizar este trabajo, facilitarme contactos, compartir horas de charlas y leer detenidamente mis borradores. También a Gonzalo Pares, por compartirme su experiencia de tantos años, sin dudas llenas de amor y compromiso en la tarea, y su mirada atenta para enriquecer mis reflexiones.

A a los equipos del Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y Comunitarias (PEHUEC) y el Centro de Innovación para el Desarrollo y Acción Comunitaria (CIDAC), de las Facultades de Agronomía y de Filosofía y Letras de la UBA, en particular, Juani Cervera Novo, Marcela Harris, Ximena Arqueros y Nela, por el trabajo compartido en el mundo de las huertas urbanas.

A la Maestría de Economía Social, especialmente a José Luis Coraggio, por su compromiso en la formación de quienes atravesamos este trayecto, por su dedicación en la docencia y por su agudeza teórica y política; sin dudas un gran referente para mí. Y a Adela Plasencia, quien me acompañó de manera amorosa en varios intentos previos de realizar la tesis.

A mis amigas Noe Sierra y Anita Real, por estar del otro lado atentas a mis dudas y darme empujoncitos, y a toda la red de mujeres hermosas que somos y que me alentaron en este proceso.

A mis padres, Moni y Peter, por haberme dado todo lo que soy, por estar siempre y hacerme sentir que hay un remanso para mí en ellos.

A mi compañero Manu, por su amor y la vida que compartimos, por su complicidad en esta y muchas más locuras, por su manera de hacerme feliz.

A mis hijas, Sol y Eva, que llegaron para cambiar mi vida por completo, porque son lo más valioso para mí, y por lo que han soportado a una mamá ocupada en su computadora. Ojalá que en el mundo que les dejamos no falten nunca horizontes comunitarios y emancipadores. Las amo.

Curriculum Vitae de la autora:

Mariana Moricz es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2006 se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, promoviendo proyectos para el desarrollo de la agricultura familiar, tanto campesina como urbana.

Correo electrónico de contacto: moricz.mariana@inta.gob.ar

ÍNDICE

RESUMEN	2
AGRADECIMIENTOS	3
1. INTRODUCCIÓN	7
1.1. Problema de investigación	7
1.2. Estado del arte y marco teórico	12
1.3. Objetivos	16
1.4. Hipótesis de trabajo	17
1.5. Sobre la relevancia de la presente investigación	21
1.6. Metodología	22
1.7. Estructura del trabajo	27
2. LA(S) ECONOMÍA(S) POPULAR(ES) EN DEBATE	30
2.1. Lecturas de “las otras economías” desde Argentina	31
2.1.1. La perspectiva clásica: la economía social y solidaria	31
2.1.2. La perspectiva de los movimientos populares: la economía popular	36
2.1.3. La perspectiva desde la investigación militante: las economías populares	41
2.1.4. A modo de síntesis	46
2.2. Otros aportes conceptuales para los debates recientes	47
2.2.1. Lo popular-comunitario y las formas de producción de “lo común”	47
2.2.2. Guerra, capital y territorialidades de la defensa	52
2.2.3. Economías populares y resistencia	58
3. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LAS ECONOMÍAS POPULARES EN LA URBANIDAD (1996-2023)	62
3.1. Ciclo de resistencia al “neoliberalismo desde arriba” (1996-2003)	64
3.1.1. Economías y prácticas agrícolas urbanas en contexto I	67
3.2. Ciclo de reconfiguración nacional-popular del Estado: de desocupados a trabajadores de la economía popular (2003-2015)	71
3.2.1. Economías y prácticas agrícolas urbanas en contexto II	76
3.3. Ciclo del modelo de ajuste fiscal con endeudamiento externo (2015-2023).....	82
3.3.1. Economías y prácticas agrícolas urbanas en contexto III	86
3.4. A modo de síntesis	90
4. ECONOMÍA, TERRITORIO Y RESISTENCIAS EN ECONOMÍAS POPULARES URBANAS A TRAVÉS DE SUS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LOS AÑOS	

RECIENTES (2015-2023)	92
4.1. Presentación de los casos	93
4.1.1. El Movimiento Popular Los Pibes	93
4.1.1.1. La Huerta Popular Martín “Oso” Cisneros (La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)	96
4.1.2. El Movimiento Evita de San Isidro	100
4.1.2.1. La huerta, la chacra y el gallinero del Polo Productivo Arenaza (Boulogne, Municipio de San Isidro, Provincia de Buenos Aires)	102
4.1.3. La Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste	106
4.1.3.1. El Eco-parque de Caballito (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)	110
4.2. Estrategias de resistencia y horizontes comunitarios en las economías populares	112
4.2.1. Prácticas agrícolas urbanas como dinámicas de restitución de lo común	114
4.2.1.1. Restitución del saber cultivar la tierra	114
4.2.1.2. Espacios comunes, usufructo colectivo y posibilidad de autonomía	117
4.2.1.3. Entre la producción y la reproducción: el trabajo comunitario	120
4.2.1.4. ¿Otros mercados posibles o es posible la desmercantilización?	126
4.2.1.5. De inventar trabajo a “producir trabajo”	130
4.2.2. Espacios comunes como territorialidades de la defensa	131
4.2.2.1. Fortaleciendo trincheras	133
4.2.3. Las economías populares como economías de la resistencia	138
5. CONCLUSIONES	142
5.1. Los debates teóricos en torno a “las otras economías”	142
5.2. Los antecedentes históricos de las economías populares en la urbanidad (1996-2023)....	144
5.3. Las estrategias de organización y resistencia de las economías populares identificadas a partir de las prácticas agrícolas urbanas	146
5.3.1. Dinámicas de restitución de lo común	147
5.3.2. Territorialidades de la defensa	150
5.3.3. Economías de la resistencia	151
5.4. Interrogantes para seguir profundizando	152
6. BIBLIOGRAFÍA	155
7. FUENTES	164

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Problema de investigación

La presente investigación se enmarca en los debates en torno a la crisis del mundo del trabajo en las décadas recientes y el desmantelamiento del trabajo asalariado como mecanismo de integración social, que había regido en las sociedades capitalistas durante los años de entreguerras (Castel, 2002; Gorz 1997). Este proceso se desencadenó en Argentina a partir de la instauración del orden neoliberal, cuyas reformas tuvieron lugar en la década del '70 con la última dictadura militar, y luego en los años '90, consolidando un modelo social excluyente (Svampa, 2005).

Los procesos de resistencia y organización impulsados por los sectores trabajadores excluidos del trabajo a partir de esas transformaciones, conformaron un derrotero de luchas que se iniciaron con la emergencia de los movimientos piqueteros y de trabajadores desocupados en los años '90 (Svampa y Pereyra, 2003). Dichas luchas derivaron en el estallido social que tuvo lugar en el mes de diciembre de 2001. En ese contexto, la intensa movilización social desatada en rechazo al modelo neoliberal, generó las condiciones para que se produzca un nuevo cambio social y habilitó la emergencia del ciclo de gobiernos llamados “progresistas” o “nacional-populares” a partir de 2003. Más allá de las transformaciones significativas que se produjeron durante esa etapa en la sociedad argentina, los niveles de empleo no volvieron a absorber al conjunto de la clase trabajadora.

Los trabajadores expulsados del mercado de trabajo se vieron en la necesidad de reinventar sus formas de subsistencia, dando lugar a la conformación de un sector de actividades económicas y de trabajo que empezaron a existir por fuera de los mecanismos tradicionales del mundo formal. Estos fenómenos se describieron inicialmente desde las miradas hegemónicas de la academia como “economías informales” (Portes, 1989; Tokman, 1992), es decir, economías que ocurren fuera de la formalidad, con baja productividad y no reguladas por las normas institucionales.

Tal perspectiva, tributaria de una mirada descalificadora de los sectores populares y sus estrategias, contrastaba con un proceso importante de organización y movilización social de los mismos, que se fue consolidando con los años. Esta movilización social, actualmente deriva en la emergencia de distintas identidades en torno a la “economía popular” o “la economía popular y solidaria”, como “economías populares” que cobijan la reconfiguración de un nuevo sujeto trabajador. Éste protagoniza intensos procesos de resistencia y construcción de alternativas, ante un modelo social que persiste en ofrecer a las mayorías horizontes de vida sumidos en la precariedad.

Nuestra investigación aborda la actualidad del fenómeno de estas economías populares, delimitando el objeto de observación en aquellas experiencias que se organizan en ámbitos colectivos y que comparten un origen e historia en común en el “emergente del 2001”, que contacta con la historia de los movimientos de trabajadores desocupados, excluidos, piqueteros, cartoneros y demás identidades colectivas que se forjaron por aquellos años. Desde esos ámbitos colectivos -que denominaremos de manera simplificada “organizaciones”-, éstas despliegan desde hace años diversos procesos de reivindicación, despliegue político y estrategias de producción y de trabajo, que resisten al lugar social subalterno que se les ha asignado a lo largo del tiempo.

Para ello, consideramos relevante abordar aquí una clave de análisis propuesta por Gago, que refiere a, por un lado, indagar de qué manera las economías populares logran hoy sortear los intentos de normalización de sus proyectos políticos y subjetividades colectivas que le dieron origen, y a partir de allí, por el otro, reflexionar sobre la actualidad de las resistencias que son capaces de estructurar en el tiempo presente (Gago, [Canal Facultad Libre] 2018a, 16m30s). Es decir, nos proponemos reconocer elementos que nos ayuden a interpretar el modo en que las tensiones y disputas se condensan en las prácticas que hoy efectivamente llevan adelante las economías populares organizadas. A su vez, identificar en esas experiencias, la existencia (o no) de vectores novedosos de resistencia en el escenario actual.

En ese sentido, nos detendremos a analizar un tipo de prácticas que estas organizaciones desarrollan con mayor visibilidad en los últimos años, en un territorio particular como los ámbitos más urbanizados del Área Metropolitana de Buenos Aires. Dichas prácticas en sí mismas podrían no llamar demasiado la atención, pero vistas en perspectiva, creemos que expresan particularidades a indagar. Nos referimos al desarrollo de prácticas agrícolas urbanas iniciadas o relanzadas en los últimos años, a propósito de la profundización de la crisis social y económica que se viene desplegando en Argentina, profundizada durante el contexto de la pandemia del coronavirus.

Se trata de dispositivos de producción, tales como huertas urbanas, polos agroecológicos y eco-parques, que ocupan terrenos de importantes dimensiones en medio de la principal metrópolis de Argentina, donde las organizaciones destinan un importante caudal de recursos materiales y humanos para el sostenimiento de los mismos. Estas experiencias involucran una diversidad de actividades productivas vinculadas a lo agrícola, como el cultivo de especies hortícolas, la producción de plantas medicinales y nativas, la producción avícola de pequeña escala y la producción de abonos en escala mediante el compostaje, etc. A todas estas prácticas las identificamos aquí dentro de la expresión “prácticas agrícolas urbanas”.

Éstas se desarrollan dentro de “predios” gestionados colectivamente, donde las organizaciones despliegan una estrategia más amplia de acciones, tales como la organización de espacios de cuidado para las infancias, el desarrollo de unidades productivas de distinto tipo, la puesta en marcha de espacios formativos, comedores, almacenes y ferias de comercialización de diversos productos, entre otras iniciativas. Se trata de terrenos de propiedad estatal, generalmente en estado de abandono, que las organizaciones usufructúan mediante diversos mecanismos, que van desde la ocupación del terreno a la gestión de permisos para su uso. Para el acondicionamiento de los mismos, las organizaciones destinan recursos provenientes tanto del Estado, como de las actividades comerciales propias, puestas en infraestructura y equipamientos. Algunas de las personas que trabajan en estos predios son militantes sociales y/o

trabajadores que cuentan con alguna retribución por su trabajo mediante distintos programas de asistencia estatal.

Ahora bien, no se trata de prácticas que estas organizaciones no hayan desarrollado en otros momentos. Las prácticas agrícolas ya habían formado parte de las estrategias de sobrevivencia que desplegaron alguno de los movimientos de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires, fundamentalmente en el período pre y post 2001, para enfrentar la crisis.

Así mismo las huertas urbanas como fenómeno social tienen historia en el territorio urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (Parés, 2009, Platón et al, Gallardo Araya, 2016, 2021), tanto a nivel familiar, como en instituciones públicas y espacios comunitarios. Han emergido de estas prácticas distintas expresiones colectivas y reivindicativas, que se identificaron fundamentalmente con la “agricultura urbana” como movimiento, contactando con el sujeto emergente de la “agricultura familiar y campesina” que fue cobrando visibilidad a fines del siglo pasado. También las asambleas barriales que surgieron con la crisis en la Ciudad de Buenos Aires y localidades cabecera de distintos distritos del conurbano, incluyeron el desarrollo de huertas urbanas como parte de sus repertorios de acción.

En definitiva, se trata de prácticas presentes en la cultura de los sectores populares, que sobrevivieron a las migraciones del campo a la ciudad durante décadas, y que se mixturaron de diversas formas en el espacio urbano.

En ese sentido y siguiendo a Gallardo Araya (2016), quien sostiene que la huerta urbana es “mucho más que alimentos”, nos preguntamos por qué las economías populares organizadas en ámbitos colectivos en los espacios más urbanizados del Área Metropolitana de Buenos Aires, encontraron en las prácticas agrícolas urbanas una estrategia apropiada para fortalecer sus horizontes de acción en el corto y mediano plazo en los años recientes y se disponen a incluirlas dentro de su agenda de prioridades. En otras palabras, nos preguntamos ¿cuál es el sentido que tiene hoy desarrollar prácticas agrícolas en la urbanidad para estas organizaciones?

En este aspecto, una interrogación posible sería indagar si existe una intención de resolver el problema alimentario de los sectores populares y generar una dinámica de autoabastecimiento. Ahora bien, si se tratase sólo de resolver la cuestión alimentaria, la relación entre escala de producción y cantidad de participantes involucrados en estos dispositivos, evidencian una clara insuficiencia como para ser considerada una estrategia en ese sentido¹.

Si bien experiencias como las de la agricultura urbana en Cuba o en nuestra cercana ciudad de Rosario se constituyeron en referencias para la producción de alimentos en la ciudad, lo cierto es que las extensiones de terrenos disponibles para la agricultura tienen allí una escala muy superior a la que puede encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los distritos más densamente poblados del conurbano bonaerense. Entonces, ¿por qué es relevante para estas experiencias producir alimentos en *esta* urbanidad?

Por otra parte, cabe señalar que estas prácticas agrícolas se emplazan en espacios fiscales o estatales que fueron recuperados por las organizaciones, lo que nos lleva a relacionarlo con los numerosos antecedentes de desalojo de huertas urbanas que tuvieron lugar sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Gallardo Araya, 2016). ¿Hay allí una conflictividad subyacente en torno a la disputa por la ocupación y uso del espacio urbano?

También podemos relacionar el desarrollo de prácticas agrícolas con las necesidades vinculadas a la relación con el ambiente y los modos de habitar en la ciudad (Gallardo Araya, 2016). ¿Existe una motivación ambiental o recreativa que empieza a desplegarse en las economías populares urbanas? ¿Se trata de la emergencia de una nueva conciencia ambiental?

Al mismo tiempo y teniendo en cuenta que estos proyectos agrícolas son parte de una estrategia mayor de actividades y emprendimientos económicos que ponen en juego tanto iniciativas productivas, con otras que apuntan a lo reproductivo (por ejemplo, los cuidados), ¿en qué medida estas experiencias expresan nuevas definiciones en torno a lo que se entiende por trabajo?

¹ Según INTA (2012b), para abastecer de alimentos a una familia de cuatro integrantes se precisan aproximadamente 100 m² de cultivo, con un manejo intensivo.

En definitiva, todas estas preguntas nos retrotraen a la pregunta principal, ¿por qué para sus impulsores el desarrollo de prácticas agrícolas urbanas se trata de una estrategia relevante en los años recientes? ¿En qué medida estas prácticas reflejan aspectos significativos en sus apuestas políticas? Desde ese punto de vista, si los sentidos de las mayorías populares están siempre en disputa, así como su capacidad de construir horizontes emancipadores, estas prácticas, ¿conforman experiencias que juegan un papel en esas tensiones? ¿En qué aspectos podríamos verlo?

1.2. Estado del arte y marco teórico

Las prácticas agrícolas urbanas en movimientos sociales y organizaciones de la economía popular como tema de estudio ha sido poco indagado a nivel académico.

Por un lado, contamos con una extensa y variada bibliografía que se enfoca en la “agricultura urbana” como concepto aglutinador de los fenómenos vinculados a la producción agrícola en contextos urbanos, y más recientemente desde un nuevo campo discursivo que refiere a la “agroecología urbana”. Estos trabajos historizan el origen y desarrollo de estas experiencias tanto desde la realidad de países europeos (Mougeot 2001, Daghendart 2016, Miriam-Hermi Zaar 2011, Arosmena 2012, Soler Montiel y Farre 2010, Morán 2015,) como desde las particularidades latinoamericanas y argentinas, también llamado “Sur Global” (Gutman y Gutman 1985, Herrera 2017, Gallardo Araya 2011, 2016, 2022).

Particularmente recuperaremos los aportes realizados por Gallardo Araya (2016), quien estudia las huertas urbanas comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires, identificando la huerta como una estrategia de acción política colectiva, en donde se disputan los sentidos de lo “verde” en la ciudad y se muestran los conflictos en torno al uso del espacio urbano.

Es preciso distinguir el campo de la agricultura urbana de las prácticas hortícolas que se desarrollan en los cinturones verdes de las ciudades, ya que se refieren a otro tipo de actividades altamente productivas, en espacios periurbanos de grandes dimensiones y con mayor inversión en infraestructura y equipamiento. Dicho sector abastece de hortalizas a los mercados

concentradores, antiguamente compuesto por inmigrantes europeos (italianos, portugueses), hoy mayormente migrantes de nacionalidad boliviana.

La agricultura urbana, por el contrario, refiere a prácticas hortícolas que se desarrollan dentro del entramado urbano propiamente dicho, involucrando también en menor medida, producción de plantas ornamentales y actividades pecuarias, generalmente de baja escala y con diversas finalidades, pero mayormente asociada a la producción de alimentos. En Argentina “la huerta” como dispositivo de referencia de la agricultura urbana, tiene un origen vinculado a las políticas públicas que le dieron visibilidad. Esto imprimió en ellas un sesgo particular asignado desde distintos programas especializados². En Argentina cabe destacar el rol del Programa ProHuerta³ que surge a comienzos de los ‘90 como política pública focalizada de asistencia a la pobreza y desnutrición, y que continúa vigente hasta nuestros días, con algunas modificaciones. Es una política con gran capilaridad territorial, que combina asistencia técnica para la promoción de huertas urbanas, facilitando distintos insumos para su desarrollo (principalmente las semillas).

Con el propósito de recuperar la mirada de los propios actores sobre la actividad, es pertinente recuperar el trabajo de Pares (2009), quien realiza un estudio de caso sobre experiencias de agricultura urbana del partido de La Matanza, en el que revela las múltiples funciones que éstos le asignan a la misma, así como también la identidad de “agricultores” que asumen, independientemente de su vinculación al ámbito urbano o rural.

Al respecto, es preciso señalar que la noción de agricultura urbana identifica a los actores en relación a si practican o no la agricultura en la ciudad, incluyendo en un mismo universo a sujetos con características sociales y económicas distintas. En ese sentido, puede resultar confusa la identificación del sujeto social que lleva adelante esas prácticas en cada contexto y

² Este tipo de políticas tuvieron un fuerte impulso desde los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y la FAO, como estrategia de contención de las consecuencias que las reformas neoliberales ocasionaron en los países pobres del planeta. De allí que, como sostiene Gallardo Araya (2016), resulta interesante desentramar esa genealogía en los discursos actuales de la agricultura urbana y las políticas públicas afines.

³ Es una política conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

los sentidos que allí se encuentran involucrados, si no se explicita especialmente esta dimensión. Las referencias que recuperan los antecedentes de la agricultura urbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, generalmente refieren a un sujeto diverso que recupera estas prácticas a partir de distintas circunstancias, ya sea en ámbitos domésticos o colectivos, conformando una historicidad propia asociada a la evolución de esta práctica en cada contexto histórico.

Por tal motivo, si nuestro recorte parte del sujeto social que lleva adelante estas prácticas, no encontramos trabajos que aborden específicamente las experiencias de huerta en relación a los movimientos de trabajadores desocupados y su devenir en economías populares, siendo que también se desarrollaron huertas de manera relevante en algunos territorios del Área Metropolitana de Buenos Aires en tiempos de crisis.

Si por el contrario, partimos del campo de estudio que se enfoca en el sujeto social, tenemos un área muy extensa de trabajos académicos que han realizado recientes investigaciones sobre la economía popular como fenómeno social en Argentina, indagando sobre distintos aspectos que competen a las formas de representación y subjetividad política (Abal Medina, 2016; Bruno et al., 2017; Fernandez Alvarez 2016, 2019, 2022; Rach, 2022), la construcción de subjetividades en torno al trabajo (García, 2022), la vinculación con las políticas sociales y laborales (Hopp, 2018; Muñoz y Villar, 2017, Natalucci y Mate, 2020), la vinculación entre feminismo y economía popular (Quiroga y Gago, 2014; Campana y Rossi, 2020; Bascuas et al., 2019), entre otros aspectos. No obstante, tampoco encontramos allí una exploración en particular sobre la relación de las experiencias urbanas de la economía popular y su vínculo con las actividades agrícolas urbanas.

En relación a los enfoques conceptuales que vienen desarrollando interpretaciones en torno al problema de la crisis del trabajo y la emergencia de nuevos sujetos y conflictos sociales asociados a esos cambios, particularmente retomaremos tres lecturas desde Argentina que resultan claves para el debate. Se trata de perspectivas que retoman un punto de vista crítico y que tienen aportes significativos para la comprensión del problema que abordamos.

Nos referimos, por un lado, a la perspectiva de la **economía social y solidaria** cuyo exponente principal es el economista José Luis Coraggio. Su apuesta teórica se centra en construir esquemas conceptuales que permitan captar la complejidad del sistema social en sus múltiples dimensiones y temporalidades, pero no solamente a los fines de la comprensión de los fenómenos, sino más bien, para elaborar herramientas de análisis que contribuyan en la posibilidad de transformación de las relaciones económicas y sociales para construir “otra economía” alternativa al capitalismo. Siguiendo la propuesta de Vazquez (2017) la denominaremos *perspectiva clásica*.

Por otro lado, tomaremos los aportes de la perspectiva de la **economía popular** a secas, que llamaremos *perspectiva de los movimientos sociales*, surgida en los años recientes a partir de las propias apuestas políticas de las organizaciones sociales que construyeron en torno a la definición de la “economía popular” un nuevo actor social⁴. Esta mirada se nutre de los trabajos de distintos intelectuales que abonaron teorizaciones desde la academia (como los del sociólogo Alexandre Roig y el economista Pablo Chena). Aquí resaltaremos la capacidad de praxis que han tenido estas aproximaciones, en tanto pudieron conjugarse de manera interesante con los procesos sociales realmente existentes, permitiendo sintetizar lo disperso, crear una nueva herramienta político-gremial que represente a los trabajadores expulsados del mercado de trabajo y otorgarle una posición de mayor poder relativo y visibilidad para avanzar en la conquista de derechos.

Por último, tomaremos la perspectiva de **las economías populares** (en plural) que retoma los trabajos de la politóloga Verónica Gago y que denominaremos *de investigación militante*. Resaltamos de esta perspectiva la agudeza interpretativa de los dilemas de la actual configuración de fuerzas entre capital y trabajo en las sociedades contemporáneas, y en particular, de los procesos de conflictividad social en los que se insertan las mayorías expulsadas del mundo asalariado, que nos permite identificar las tensiones, marchas y contramarchas que

⁴ Nos referimos a la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), como sindicato de nuevo tipo, experiencia que iremos reseñando a lo largo de este trabajo.

están en juego. En ese sentido, es relevante la recuperación que realiza de las teorías feministas para comprender las complejidades y luchas de estas nuevas (y no tan nuevas) formas de trabajo.

Denominaremos “campo conceptual de las otras economías” para referirnos al debate que componen estas tres corrientes analíticas, de manera de saldar las acepciones que supone tomar la denominación definida por cada una, a sabiendas de que existen otras corrientes que pueden incorporarse dentro del debate de “las otras economías”, pero que no incluimos aquí (por ejemplo, la perspectiva de la economía de los trabajadores, el cooperativismo, entre otras).

Ahora bien, retomando nuestra inquietud principal acerca del rol que pueden estar jugando las prácticas agrícolas en las estrategias de acción de las organizaciones de la economía popular urbanas en los años recientes, sumaremos otras teorizaciones y propuestas conceptuales específicas que resultaron pertinentes en el transcurso de la presente investigación, a saber: por un lado, los debates en torno a la producción de “lo común”, propuestos por Raquel Gutierrez Aguilar y otros autores, y por otro, los enfoques que retoman la relación entre guerra y capitalismo como dispositivos de dominación y organizadores de lo social, trabajado por Mauricio Lazzarato, Eric Alliez y Silvia Federici.

1.3. Objetivos

El objetivo general se centra en comprender el rol que cumplen las prácticas agrícolas urbanas en las estrategias de resistencia desplegadas por las organizaciones de las economías populares que se encuentran en los ámbitos más urbanizados del Área Metropolitana de Buenos Aires en los años recientes.

Para abordar ese planteo general, nos proponemos tres objetivos específicos. En primer lugar, contextualizar el debate teórico reciente sobre el campo de las “otras economías” en Argentina, incorporando marcos conceptuales específicos relacionados a las dinámicas que configuran los procesos de acumulación de capital actual y las resistencias que emergen desde los sectores populares.

En segundo lugar, buscamos recuperar los antecedentes históricos del emergente de la(s) economía(s) popular(es) en nuestro país, haciendo especial énfasis en el despliegue de prácticas económicas en general y su relación con la producción agrícola en la urbanidad, en particular, para contar con una perspectiva del proceso en el tiempo y rescatar las singularidades del presente.

Y en tercer lugar, pretendemos abordar el análisis de los casos seleccionados en función de dos dimensiones: las dinámicas de restitución de “lo común” y “las territorialidades de la defensa”, en contextos de lo que llamaremos las “economías de la resistencia”.

1.4. Hipótesis de trabajo

Nuestra hipótesis de trabajo, entonces, parte de la suposición de que existe una relación entre las prácticas agrícolas desarrolladas por las economías populares que integran organizaciones colectivas en el territorio urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires, con las formas actuales en que se expresan las resistencias de las mismas en el actual contexto. Tal como señala Gago (2015), las economías populares como devenir de aquel sujeto que irrumpió en el 2001, son permanentemente puestas en cuestión por diversos discursos y políticas, que intentan normalizar su aspecto disruptivo con el objetivo de lograr su fijación en estados de *mansedumbre*. La pregunta es hasta qué punto este sujeto demuestra una capacidad de disputar ese sentido impuesto y reinventar formas de antagonizar las relaciones sociales dominantes.

En esa línea, nos interesa particularmente identificar las resistencias que se expresan en los modos de organizar los procesos de trabajo y producción en el tiempo reciente, que creemos presentan ciertos rasgos particulares en clave de los desafíos de construir “otras economías” posibles y que si bien no aparecen en estado “puro” -sino mixturado con otras lógicas, incluso contrapuestas- pueden resultar significativos para el análisis.

Para indagar acerca de la relación propuesta en la hipótesis, nuestro enfoque parte de tres supuestos: a) las prácticas agrícolas abonan a una suerte de revalorización de lo popular-comunitario como forma de resolver la reproducción colectiva de las economías

populares; b) las huertas funcionan como trincheras que parecieran orientarse a la defensa de las trayectorias y construcciones colectivas conquistadas en los últimos años, y c) lo singular de estas economías está en la capacidad (planificada y colectiva) de anteponerse a las dinámicas que buscan su desarticulación, siendo las prácticas agrícolas formas que contribuyen en esa estrategia. A continuación detallaremos el sentido de cada uno.

En primer lugar, nos referimos al supuesto de que existen elementos significativos en el modo en que estas experiencias están “haciendo economía”, relacionadas al despliegue de estrategias colectivas de reproducción de la vida. Dichas estrategias serán analizadas a la luz de lo que la autora mexicana Gutierrez Aguilar (2017) esboza como “horizontes populares comunitarios”. Con esta idea la autora enfatiza el carácter político que asumen los modos comunitarios y populares de resolver la vida, frente a los *no horizontes* que ofrece el sistema capitalista. Encuentra allí una recuperación del sentido de “lo común” como instancia ordenadora de relaciones sociales, suponiendo ello un intento de disputar la re-apropiación colectiva de la riqueza social (es decir, devolver al “común” lo quitado y expropiado). Al mismo tiempo, esa búsqueda implica el desarrollo de formas particulares de ejercer la autonomía (Gutierrez Aguilar, 2017). Es decir, formas que cuestionan el modo capitalista de definir qué es y no es trabajo, y qué es y no es productivo.

En ese sentido, la forma en que los sectores populares encuentran para resolver su reproducción y el sustento colectivo en el marco de un mundo en crisis, lejos de presentarse como un rasgo folklórico de sociedades precapitalistas de tiempos pasados (Gago y Mezzadra, 2015), se torna un elemento clave en relación a las demandas actuales.

Por lo tanto, nuestra suposición apunta a que las prácticas agrícolas insertas en estas experiencias aportan al desarrollo de estrategias de resistencia hacia lógicas de producción de “lo común”. Esto implica, por un lado, ir más allá de interpretaciones que habitualmente relacionan huertas con producción de alimentos, prácticas ambientales y terapéuticas, o bien ocio recreativo. Por otro lado, también propone complejizar la mirada que tiende a jerarquizar

los aspectos productivos de la economía popular (es decir, el desarrollo de su potencial en términos de productividad), respecto de otras actividades que son consideradas meramente como reproductivas.

Así como el feminismo ha permitido echar luz sobre los trabajos invisibilizados desde la mirada productiva del capital y el mercado, las formas de producción ligadas a restituir “lo común”, representan instancias de consolidación de los horizontes políticos de las economías populares. En ese sentido, las prácticas agrícolas urbanas en estos contextos, lejos de significar un pasatiempo, revelan modos de construcción política que exceden los objetivos propios de las labores hortícolas.

No obstante, tal como nos advierten Mazzeo y [Stratta \(2001\)](#), estas interpretaciones no deben dejar de lado la relevancia de problematizar cuestiones estructurales necesarias para que estas economías puedan desarrollarse, como por ejemplo, redefinir la propiedad de la tierra, la distribución de la riqueza, la democratización del mercado, el rol del Estado, entre otros aspectos nodales, para no correr el riesgo de caer en “romantizaciones” de la pobreza.

Ahora bien, en otro orden del análisis, pasemos a nuestro segundo supuesto. Al observar las formas de ocupar y disputar el espacio urbano que implican esas prácticas agrícolas, nos preguntamos acerca del tipo de territorialidad que se está desplegando allí. En ese sentido, consideramos que las huertas contribuyen en el armado de una suerte de trinchera como medida defensiva, tanto de sus construcciones colectivas como del resguardo futuro ante posibles adversidades.

A partir de allí y pensando qué elementos podría provocar estos mecanismos de defensa por parte de las organizaciones populares, la apuesta de Alliez y Lazzarato (2022) respecto de incorporar la dimensión de la “guerra” como elemento clave para analizar los vaivenes históricos del desarrollo del capitalismo, cobraron sentido en nuestra indagación. Según estos autores y retomando a Foucault (1992), los dispositivos de guerra asumieron características propias en cada etapa histórica, en función de ordenar y permitir la acumulación de capital

necesaria en cada momento. Ese ordenamiento bélico que disciplina regiones, naciones y cuerpos, permite reconocer las formas de poder que están detrás.

Alliez y Lazzarato (2022) retoman también los trabajos de Federici (2010, 2018), quien ya había señalado el origen del capitalismo asociado a la guerra tanto en los cercamientos de tierras comunales campesinas, como en la “caza de brujas” efectuada contra las mujeres de fines de la Edad Media, como mecanismos de despojo y apropiación de bienes para la acumulación originaria, así como también, de disciplinamiento del trabajo bajo la modalidad asalariada y doméstica.

Como afirman distintos autores (Aglietta, 2000; Basualdo, 2001; Chesnais, 2003), hoy la acumulación de capital pasa por la hegemonía del sector financiero. Los antagonismos no se establecen en función de países centrales y periféricos, o entre capitalistas y trabajadores, sino más bien entre los dueños del dinero y quienes necesitan el dinero; entre acreedores y deudores. En términos de Alliez y Lazzarato (2022), el tipo de guerra que es funcional a ello, son *las guerras contra las poblaciones*, mecanismos que permitan gobernar y controlar a las mayorías, y sobre todo, evitar desbordes que cuestionen su hegemonía.

Nuestra sospecha consiste en que de algún modo existe una percepción de este escenario por parte de las organizaciones analizadas, y en ese sentido, tanto las prácticas agrícolas urbanas como la recuperación y aprovechamiento de predios para el desarrollo de tramas comunitarias, adquieren un sentido de la defensa frente a la adversidad del contexto presente.

En función de todo esto, y pasando al tercer y último supuesto que compone nuestra hipótesis, retomamos las reflexiones acerca de las valoraciones y expectativas que ponemos en juego a la hora de analizar experiencias en el marco de lo que podemos llamar las “otras economías”. En ese sentido, nos preguntamos si más allá de las consideraciones sobre los aspectos productivos que éstas despliegan, en clave de construir una transición de las relaciones sociales capitalistas, no se trata de experiencias en donde lo relevante se centra en la capacidad de desplegar estrategias colectivas para resistir las adversidades del contexto, defender las

conquistas de años de lucha y al mismo tiempo avanzar en la re-apropiación de la riqueza social que les fue despojada. Por lo tanto, suponemos que lo significativo de estas economías se encuentra más en su capacidad de sustentar la reproducción de la vida en escenarios adversos, y no únicamente en la ampliación de su escala de producción. No se trata de pensarlas como estrategias de sobrevivencia desde la pobreza, como se conceptualizó tiempo atrás, sino que en este contexto, ese sostenerse colectivamente se torna en una estrategia política. Expresan que no es posible entender los desafíos económicos disociados de los dilemas políticos, por ese motivo nos proponemos interpretar este rasgo de las experiencias analizadas como “economías de la resistencia”.

1.5. Sobre la relevancia de la presente investigación

En cuanto a la relevancia de realizar esta investigación, en primer lugar, señalamos los aportes acerca del rol que adquieren las economías populares en el actual momento de crisis. En otras palabras, en qué medida las luchas de las economías populares siguen estructurando la posibilidad del cambio social, y desde ese enfoque, cuáles son los modos de hacer economía que acompañan hoy ese camino.

En segundo lugar, creemos que la presente investigación proporciona elementos al campo teórico de “las otras economías”, poniendo en diálogo las distintas perspectivas y contribuyendo en herramientas de síntesis que se proponga la ampliación y fortalecimiento del propio campo.

En tercer lugar, y siguiendo esa idea, esta investigación pretende incorporar elementos para caracterizar estas experiencias, dando cuenta de los sentidos que se ponen en juego en categorías centrales como el trabajo y la producción, retomando tanto las particularidades del contexto actual, como las ideas y teorías que se desarrollan desde otros campos conceptuales, como la economía feminista.

En cuarto lugar, esta investigación amplía las miradas sobre la agricultura urbana, complejizando la perspectiva que desvincula los dispositivos de huertas de las relaciones

sociales en las cuales se inserta (Gallardo Araya, 2016), cuestión mayormente presente en los ámbitos institucionales y gubernamentales.

Por último, y vinculado a lo anterior, creemos oportuno el aporte que significa para el desarrollo y mayor integración de programas y políticas de fomento de estas experiencias, que hoy se abordan desde distintas áreas de intervención, no siempre vinculadas y/o cabalmente articuladas (ambiente, agricultura familiar, agroecología, economía popular, salud).

1.6. Metodología

Se utilizaron metodologías cualitativas, siendo el estudio de caso instrumental (Stake, 1999) la estrategia de abordaje seleccionada. Este tipo de estudio se utiliza para indagar acerca de un problema que excede al caso analizado. En este contexto, el caso en sí pierde centralidad, resultando un medio para aportar a la comprensión de un fenómeno que lo supera (Merlinsky, 2008).

Al mismo tiempo, se trató de un estudio de caso múltiple (Yin, 1994), ya que se utilizaron tres casos. Consideramos a los mismos como “unidades empíricas” (Ragin y Becker citados por Arzaluz Solano, 2005), a partir de las cuales se obtuvo la información para trabajar sobre el problema definido. En ese aspecto, nuestro análisis no contempló una comparación entre casos, sino más bien se propuso captar -tomando lo que cada una nos permitía ver- las dinámicas principales del problema general que intentamos abordar.

Nos nutrimos de los trabajos de Gallardo Araya (2012, 2015, 2016), así como también, de lo elaborado en el marco del Proyecto de Investigación “La agricultura y la cuestión ambiental en el Área Metropolitana de Buenos Aires”⁵, en donde las prácticas agrícolas urbanas son tomadas como “ventanas de observación” de los fenómenos sociales en los cuales las mismas se insertan y de alguna manera, las producen. Estos fenómenos se aprehenden desde los sentidos y relaciones que intervienen en la configuración de tres dimensiones específicas: la cuestión económico-productiva, la cuestión ambiental y las disputas por el espacio público.

⁵ Presentación del Proyecto de investigación UBACyT 2023, de la Cátedra Extensión y Sociología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (a la espera de aprobación).

Nuestro trabajo se enfocó en observar las prácticas agrícolas desde su interrelación con la dimensión económica, y desde allí encontrar lo significativo que las mismas expresan en el despliegue de las economías populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de interpretar los modos en que estas prácticas son refuncionalizadas en las economías populares durante los años recientes.

Respecto del territorio de referencia, destacamos algunos elementos que consideramos relevantes. El Área Metropolitana de Buenos Aires en su conjunto reúne a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 40 distritos de la Provincia de Buenos Aires en un mismo aglomerado urbano, que ocupa un espacio de aproximadamente 3.833 km² y concentra 35% de la población nacional (INDEC, 2022). Aquí se asienta el principal polo industrial, financiero y comercial del país, y se encuentran las sedes de los gobiernos de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Se pueden distinguir 4 coronas urbanas, en función de los grados de urbanización, densidad poblacional y cantidad y calidad de servicios que disponen (INTA, 2012a).

Tomaremos de INTA (2012a) la distinción entre el “territorio periurbano” y el “territorio urbano” del Área Metropolitana de Buenos Aires, en función de la caracterización de sus sistemas productivos agrícolas. En ese sentido, en el territorio urbano las actividades productivas de base agropecuaria *“están insertas en las matrices urbanas. Esto implica que sus procesos y ciclos se encuentran vinculados y relacionados de manera íntima con el funcionamiento socioeconómico y ecosistémico general de las ciudades”* (INTA, 2019). Se distingue por los grados de urbanización local que presenta su entorno (zonas con niveles de urbanización medios a altos), incluyendo de manera integral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los distritos del 1° y 2° cordón urbano de la Provincia de Buenos Aires, y las localidades cabecera del resto de los distritos del AMBA (INTA, 2019). Particularmente tomaremos tres casos de análisis: dos se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en los barrios de

Caballito y La Boca) y un tercer caso se emplaza en la localidad de Boulogne, municipio de San Isidro, en el conurbano norte.

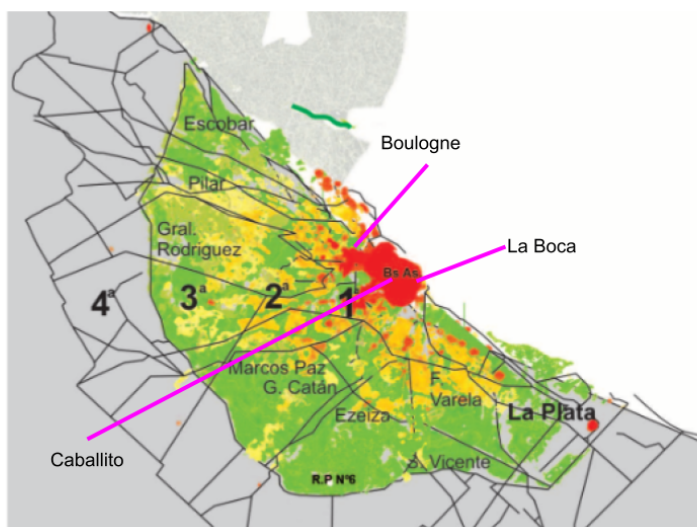


Figura N°1 Área Metropolitana de Buenos Aires - Coronas urbanas y red vial
Fuente: Subsecretaría de Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, citado en INTA (2012a).

Si bien es un territorio diverso con características diferenciadas, una constante que se presenta es la fragmentación espacial y el contraste social, así como la disputa entre actores por definir el uso del poco espacio disponible. Conviven barrios de alto poder adquisitivo, con situaciones de alta precariedad habitacional, que fue configurando un desarrollo urbano con “injusticia espacial” (Fernandez Wagner, 2018).

En relación a los casos, los mismos fueron seleccionados a partir del criterio de complementación, entendiendo que presentan características comunes, pero a la vez, aspectos que los diferencian entre sí, permitiendo identificar con mayor densidad y particularidad el fenómeno. Los mismos son los siguientes:

- El Movimiento Popular Los Pibes y la Huerta Popular Martín “Oso” Cisneros, emplazada en el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta organización surgida al calor de los movimientos de trabajadores desocupados a mediados de los años ‘90 y con un despliegue muy rico de experiencias de organización en torno al trabajo durante casi 30 años, decide por primera vez en el 2019 llevar adelante una experiencia de huerta popular en un

predio lindero al edificio de la cooperativa de vivienda construida por la propia organización. El mismo había sido cedido en comodato a la organización por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, para la instalación de una feria de alimentos de la economía popular.

- El Movimiento Evita de San Isidro, y los proyectos de vivero, huerta y producción avícola del Polo Productivo Arenaza, ubicado en la localidad de Boulogne, Municipio de San Isidro. Este movimiento, que proviene de distintas expresiones de la resistencia al neoliberalismo de los años '90, define en 2017, junto a otras organizaciones de la zona, recuperar un predio de 5 ha. perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para llevar adelante allí un polo productivo para el desarrollo de múltiples emprendimientos en conjunto con trabajadores de la economía popular, entre los cuales las prácticas agrícolas ocupan un lugar importante.

- La Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste y el Eco-parque de Caballito, emplazado en el barrio del mismo nombre, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta cooperativa proviene de la experiencia de organización de “los cartoneros”, quienes habían irrumpido en las calles de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de crisis, y que con los años logró transformar esa actividad en un trabajo formalizado como recolectores de materiales reciclables. En el 2021 definen refuncionalizar uno de sus predios para la instalación de un “eco-parque” abierto a la comunidad. El mismo había sido ocupado en el año 2013 y es parte de los terrenos ferroviarios, propiedad del Estado nacional.

Algunas de las características relevantes para selección de estos casos, fueron las siguientes:

- Se **trataba** de casos que eran expresiones del emergente del 2001, que si bien habían tenido trayectorias y características distintas (en cuanto a objetivos, posicionamientos políticos, escala, prioridades, estrategias), en todas mantienen el eje de ensayar alternativas para los trabajadores expulsados del mercado de trabajo.

- Los dispositivos agrícolas aparecían como proyectos significativos para sus organizaciones, significando una apuesta importante de recursos de todo tipo, y de una escala considerablemente importante en relación a las prácticas agrícolas urbanas existentes en sus entornos.

- Se referían a prácticas agrícolas urbanas que surgieron en un mismo recorte temporal reciente (últimos 5 años), lo que nos permitía identificar elementos relevantes del contexto que hubieran incidido en su desarrollo (crisis económica y social profundizada a partir de las políticas de endeudamiento externo y restricción fiscal desde 2015, la posterior pandemia, el propio fortalecimiento del sector de la economía popular como actor político, el emergente ambiental cada vez más visible para el conjunto de la sociedad, la ola feminista, entre otros).

- Los terrenos son propiedad del Estado y las organizaciones disputan (de manera más o menos implícita) con otros actores el destino y uso de los mismos.

- La composición social de sus miembros es similar, propia de los sectores populares del Gran Buenos Aires, en los que es posible identificar un pasado ligado a los ámbitos rurales de las distintas regiones del país, permitiendo visualizar la relación de las prácticas agrícolas urbanas con la recuperación de una memoria histórica vinculada a la tierra.

- La posibilidad de acceso a estas experiencias, a partir de la articulación que las mismas mantienen con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo público de desarrollo agropecuario donde personalmente me desempeñé como técnica de terreno hace varios años. Desde ese organismo se ejecuta el ya mencionado programa ProHuerta, que promueve la producción de alimentos en sectores populares a través del fomento de huertas en distintas poblaciones objetivo, dentro de las cuales se encuentran las organizaciones sociales.

Para abordar cada caso se realizaron entrevistas en profundidad a informantes calificados, fundamentalmente a dirigentes de las organizaciones, así como también a militantes y trabajadores encargados del trabajo cotidiano allí, entre julio de 2022 y mayo de 2023.

También se entrevistaron a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que promueve la agricultura urbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además fueron utilizados como insumo, los más de 15 años de desempeño laboral en el sistema de extensión del INTA, de los cuales los últimos diez se desarrollaron en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese contexto, constituye un antecedente directo de este trabajo la participación conjunta en el Proyecto de Extensión Universitaria sobre prácticas agrícolas en poblaciones urbanas y rurales, junto al Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y Comunitarias (PEHUEC) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Innovación para el Desarrollo y Acción Comunitaria (CIDAC), de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires. Allí compartí trabajo de campo y reflexiones conjuntas que enriquecieron el presente trabajo.

Por último y no por eso menos importante, el conocimiento del campo se nutrió considerablemente también desde mi experiencia como militante del campo de la economía popular, en donde entre 2013 y 2021 tuve una activa participación en el Movimiento Popular Los Pibes.

1.7. Estructura del trabajo

Luego de esta introducción, en el capítulo denominado “La(s) economía(s) popular(es) en debate”, desarrollamos el marco teórico a partir de la elaboración de las tres lecturas que componen el debate que definimos llamar “campo de las otras economías” en Argentina. Como señalamos anteriormente nos referimos, por un lado, a la perspectiva de la economía social y solidaria, representada por los trabajos de José Luis Coraggio, la perspectiva de la economía popular, sintetizada en los aportes de Alexandre Roig y Pablo Chena, y la perspectiva de las economías populares, que retoma los trabajos de Verónica Gago. Luego, introduciremos los enfoques que nos permitieron abordar las particularidades del problema de investigación, por un lado, el debate sobre “la producción de lo común”, recuperando una selección de textos de Raquel Gutierrez Aguilar, y por otro, la caracterización conceptual de la relación entre guerra y

capitalismo, reflejado en los trabajos de Maurice Lazzarato, Eric Alliez, y también Silvia Federici.

En el capítulo siguiente, denominado “Contextualización histórica de las economías populares en la urbanidad (1996-2023)”, incluimos un recorrido histórico del emergente de las economías populares, con el fin de poder reconocer hasta qué punto las dimensiones que caracterizan el despliegue actual de las resistencias de los sujetos de la economía popular, cobran sentido en el recorte histórico seleccionado, en relación a otras etapas históricas. Y en ese sentido, se busca identificar la novedad que está involucrada en las prácticas agrícolas urbanas propias de las economías populares. Para ello, partiendo de los trabajos de Coraggio y Loritz (2022) y Palumbo (2017) dividimos este recorrido en tres ciclos: i) el ciclo de resistencia al neoliberalismo “desde arriba” (1996-2003); ii) el ciclo de reconfiguración nacional-popular del Estado (2003-2015); y iii) y el ciclo del modelo de ajuste fiscal con endeudamiento externo (2015-2023).

En el capítulo “Economía, territorio y resistencias en economías populares urbanas a través de sus prácticas agrícolas en los años recientes (2015-2023)” desarrollamos el análisis de los procesos de resistencia y horizontes políticos de las economías populares a través de la observación de las prácticas agrícolas urbanas desplegadas en los años recientes. En ese sentido, incluimos en primer lugar, una descripción del perfil de cada caso de estudio, así como también las experiencias de prácticas agrícolas urbanas llevadas adelante. Luego, se presenta el análisis de la información recolectada, en función del marco teórico general propuesto y las dimensiones específicas seleccionadas (las dinámicas de restitución de lo común y las territorialidades de la autodefensa, en contextos del despliegue de economías de la resistencia).

Por último, se presentan las conclusiones de la investigación, en donde se describen los elementos encontrados en función de las hipótesis formuladas, así como también, recomendaciones para investigaciones futuras.

2. LA(S) ECONOMÍA(S) POPULAR(ES) EN DEBATE

El marco teórico de la presente investigación inicialmente se centra en el debate del campo que definimos llamar “de las otras economías” en Argentina. En dicho campo recuperamos tres corrientes que consideramos principales y que resultan significativas a la luz de los procesos históricos.

Como anticipamos, en relación al campo “de las otras economías” nos referimos, por un lado, a la perspectiva de la *economía social y solidaria*, que denominaremos “clásica”⁶, representada por los trabajos de José Luis Coraggio; por otro lado, la perspectiva de la *economía popular*, que llamaremos “de los movimientos populares”, sintetizada en los aportes de las propias organizaciones de la economía popular y los trabajos de Alexandre Roig y Pablo Chena, y la perspectiva de las *economías populares*, que llamaremos de “investigación militante”, representada en los trabajos de Verónica Gago.

Todas estas corrientes debaten con la mirada neoclásica de la economía informal (Portes, et. al., 1989; Tokman, 1992) para referirse a estos sectores, no sólo por los supuestos normalizadores y estigmatizantes que tales perspectivas ejercen sobre este tipo de población, sino sobre todo por organizar las categorías de “formalidad” y su reverso en torno a un modelo industrial que hoy se encuentra en crisis -o más bien, agotado-.

Existen otras corrientes que podrían considerarse dentro del campo de “las otras economías”, pero por razones de espacio y por referirse a otros sub universos dentro de este campo (empresas recuperadas y cooperativas), no los hemos incluido aquí. Nos referimos a la perspectiva que se autodenomina “economía de los trabajadores”, cuyos aportes provienen de las experiencias de las fábricas recuperadas por sus trabajadores y de la cuestión de la autogestión como horizonte de organización social (Ruggeri, 2009). Tampoco incluimos los aportes de distintas vertientes del cooperativismo, cuya vinculación con el campo de los

⁶ Tomado de Vazquez (2017) y Beckmann, et. al. (2019)

movimientos sociales y los programas de asistencia al desempleo, puede arrojar elementos interesantes (García, 2017).

Luego de situar el debate del campo teórico de “las otras economías” en Argentina, y partiendo de allí, continuaremos con el desarrollo de dos dimensiones analíticas en el apartado que denominamos “Otros aportes conceptuales para los debates recientes”, que resultaron pertinentes para responder nuestra hipótesis acerca de la relación entre prácticas agrícolas y economías populares urbanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los años recientes. Nos referimos, por un lado, a los debates en torno a la producción de “lo común” como indicio para el desarrollo de formas anticapitalistas de resolver la reproducción social, que trabajan Raquel Gutierrez Aguilar, entre otros autores. Por otro lado, retomaremos las lecturas sobre la relación entre guerra y capitalismo, que nos brindan elementos para comprender la conflictividad social del presente y que podrían expresarse en los casos analizados, trabajado por Mauricio Lazzarato, Eric Alliez y también, Silvia Federici. Por último, compartiremos la noción de “economías de la resistencia” que desarrollamos para graficar las particularidades del despliegue actual de las economías populares.

2.1. Lecturas de “las otras economías” en Argentina

2.1.1. La perspectiva clásica: la Economía Social y Solidaria

El enfoque de la economía social y solidaria desarrollado por José Luis Coraggio, es uno de los primeros enfoques que prestan atención al fenómeno de descomposición de la sociedad salarial en la región ya en los años `80 y produce teoría en clave de interpretar las estrategias del sujeto que emerge de tal coyuntura, de allí la denominación de “clásica”. Destacamos de la misma su apuesta propositiva y estratégica en términos de ofrecer elementos de análisis para pensar una posible transición sistémica.

Coraggio (2004, 2010, 2020, 2023) asume un encuadre epistemológico en sintonía con la crítica al modelo occidental de la ciencia moderna que diversos autores se plantean desde el “sur global”, por su incapacidad para pensar y contribuir al desarrollo de alternativas al capitalismo

(Sousa Santos, 2000). Es una propuesta comprometida con lo que plantea Wallerstein (1998) como conocimiento “utopístico”, un modo de combinar conocimiento científico, moral y política en base a las ideas y prácticas existentes en la historia que han demostrado un potencial antisistémico, y a partir de allí delinear posibles alternativas de organización de la vida social.

En su obra, hay un esfuerzo importante por desarmar conceptualmente la mirada neoclásica y liberal de la economía, dado que ésta logró imprimir el sentido común de lo que se entiende por “economía”, y que alcanza su máxima expresión durante el neoliberalismo. Esta se define como una “ciencia” que busca maximizar los beneficios y preferencias individuales de las personas, a partir de la administración *eficiente* de los bienes disponibles, que por definición son *escasos*, siendo el libre mercado el mejor mecanismo para resolver la asignación de esos bienes (Mochon y Becker, 2007). Esta visión resulta ser una construcción ideológica que busca esconder la lógica de acumulación de ganancias propias del funcionamiento del capital y del libre mercado, a los fines de beneficiar a un grupo minoritario de la sociedad, en perjuicio de las mayorías.

Para construir otra definición de economía, Coraggio toma los aportes de distintas corrientes que pensaron al capitalismo de modo crítico, como el pensador Karl Polanyi, quien entiende a la economía, y por tanto, al capitalismo, como un orden social *institucionalizado*. Desde esta mirada, su funcionamiento se rige por acuerdos que ordenan las relaciones sociales, siendo el mercado uno más de ellos. El problema que aporta Polanyi es que bajo el liberalismo, el mercado se independizó de la sociedad de tal modo, que su propio desempeño entró en contradicción con la vida humana y la naturaleza. Es preciso en ese contexto, señala Polanyi, reconstruir la institución mercado bajo nuevos principios y *reencastrar* la economía en la sociedad (Polanyi, [1944], 2007). Desde allí se retoma la necesidad de repensar toda la economía en su sentido *sustantivo*, es decir, asociado a los fines de organizar la reproducción de la vida, y en ese sentido, reorientar la construcción de nuevos acuerdos de organización social, con instituciones y prácticas económicas regidas por valores afines a esos objetivos.

Por otro lado, Coraggio retoma la crítica marxista al capital para develar la explotación que suponen los mecanismos de acumulación en el capitalismo, lejos de tratarse de una ecuación perfecta del mercado donde “todos ganan”. En ese sentido, la acumulación de ganancias es posible gracias a la apropiación de valor ejercido sobre otros ámbitos, mediante diversos mecanismos explotación, despojo y subsunción (sobre el trabajo asalariado, el trabajo doméstico, la naturaleza, el Estado, la relación colonial entre países, etc.), coincidiendo con Nancy Fraser (2022) y su trabajo sobre las *moradas ocultas* del capital.

En este sentido, Coraggio define a la economía como un “*sistema de instituciones y prácticas que se da una sociedad, para definir, movilizar, distribuir y organizar recursos, con el fin de resolver transgeneracionalmente las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros, de la mejor manera posible en cada situación y momento histórico*” (Coraggio, 2010: 34-35).

Por lo tanto, de lo que se trata es de redefinir el sistema de prioridades que se da una sociedad para organizar su reproducción social. Allí es donde cobra sentido la adjetivación “social y solidaria” que se le agrega a la palabra economía, que refiere a la necesidad de reconfigurar a ésta bajo una nueva ética que priorice el sustento de la vida y la naturaleza, en lugar de la mera ganancia. “Social y solidaria” en términos de reencastar la economía en la sociedad y evitar que la institución mercado se independice y se apropie de las instituciones que regulan lo social. Se trata de una economía que sea socialmente consciente de la sociedad que produce, lo que implica la existencia de sujetos sociales activos que asuman esa capacidad de transformación de las relaciones sociales (Coraggio, 2010: 59-62).

Ahora bien, estos valores y prácticas solidarias pueden verse en la economía realmente existente solamente en términos embrionarios o parciales, dado que la racionalidad hegemónica que organiza los procesos económicos en los distintos niveles y esferas de la vida social es la lógica del capital y el libre mercado. De allí que la economía social y solidaria es una propuesta de transformación y no una caracterización de lo existente. El lugar donde se desarrollan lógicas

económicas orientadas por el principio del sustento de la vida, es en la economía que despliega el mundo de los sectores populares, por eso hay que mirar allí lo que sucede, sin perder de vista el contexto de relaciones que los condicionan⁷.

Contrastando la mirada neoclásica que reconoce solamente al ámbito empresarial privado como el ámbito propiamente “económico”, Coraggio propone un esquema de análisis sistémico de la economía que denomina “economía mixta”, al cual le agrega otros dos subsistemas económicos interrelacionados (la economía estatal y la economía popular), cada cual con sus propios actores, lógicas económicas, instituciones y recursos (Coraggio, 2010, p. 51). En ese sentido, identifica, por un lado, a la economía empresarial o de capital, en donde la empresa privada y sus ramificaciones son el actor principal. Éstas se mueven bajo una única lógica que es la acumulación de ganancias obtenidas a partir del mecanismo del capital. Por otro lado, existe una economía estatal, organizada jerárquicamente a partir de instituciones públicas, cuya lógica de acción está orientada por la acumulación de poder político y en donde el presupuesto funciona como principal recurso económico. Por último, define a la economía popular como el tercer subsistema económico, compuesto por trabajadores organizados en unidades domésticas familiares o comunitarias, en donde la principal lógica que organiza las prácticas económicas es la reproducción de la vida. Los recursos con los que cuenta provienen de múltiples fuentes de ingresos que Coraggio llama “fondo de trabajo”.

Esta economía popular “realmente existente”, incluye a todos quienes dependen de su fuerza de trabajo para vivir y combinan estrategias diversas para resolver su reproducción (tanto el trabajo asalariado formal o informal, la producción para el mercado y/o autoconsumo, y el trabajo doméstico y de cuidados). Por lo tanto incluye a los trabajadores asalariados formales.

⁷ “(...) el objetivo no es consolidar la economía popular existente sino su transformación hacia formas de economía solidaria, centrada en el trabajo autónomo asociado, la cooperación, la complementariedad, la coordinación consciente de capacidades, recursos y necesidades legitimadas. La economía popular actualmente existente es entonces la base de las prácticas de construcción de otra economía, prácticas que denominamos de economía social” (Coraggio, 2010: 84).

Si bien es la reproducción de la vida lo que organiza las prácticas económicas de la economía popular -y no han sido pocas las veces en la historia que ante tiempos adversos, la solidaridad del tejido comunitario de los trabajadores operó como sostén- se presentan dos problemas: por un lado, las condiciones de producción de bienes y servicios es limitada, no suficientes para lograr una vida plena, y por el otro, las lógicas que organizan las relaciones sociales no necesariamente responden a valores humanamente solidarios, dado que bajo la hegemonía del proyecto neoliberal, pueden operar culturalmente valores individualistas, del “sálvese quien pueda”, de feroz competencia⁸ (Coraggio y Loritz, 2022: 106).

Por tanto, en el plano propositivo, la construcción de una “economía social y solidaria” implicaría la ampliación y empoderamiento de la economía de los trabajadores, bajo instituciones, principios y prácticas cada vez más anticapitalistas y solidarios (entendida como “economía popular solidaria”), al punto de lograr conjugar un nuevo orden social que organice al conjunto (incluyendo al Estado, al sector privado, sus actores y recursos) bajo la lógica de la reproducción de la vida, ampliando las bases sustantivas y participativas de una democracia plena. En otras palabras, el horizonte de construcción de una economía alternativa, implica la ampliación de procesos de producción, distribución y consumo de la riqueza social institucionalizado bajo prácticas con valores solidarios y humanos, para lo que se necesitará el empoderamiento de un sujeto colectivo capaz de llevar adelante esas transformaciones.

Por último, señalaremos que Coraggio agrega dos dimensiones fundamentales que se deben considerar al análisis: diferenciar el recorte de escala que se está realizando (si se está abordando la escala micro, meso, macro o sistémica) y la temporalidad (si se está abordando el tiempo presente, si se piensa en los tiempos de transición o si nos ubicamos en las proyecciones de lo que podría ser en un futuro). Coraggio entiende que los intelectuales orgánicos

⁸ En el trabajo de Verónica Gago *La razón neoliberal* (2014), justamente muestra la peculiar configuración neoliberal que producen las economías populares, lejos de ser un constructo de dominación ejercido únicamente de arriba hacia abajo. Se ampliará en las páginas siguientes.

contemporáneos precisan dominar los múltiples niveles de análisis y temporalidades para poder ofrecer alternativas a los procesos históricos (Coraggio, 2020).

Los aportes de Coraggio han sido referencia para el diseño -o aspectos del diseño- de políticas públicas en la región, en el contexto de los gobiernos “progresistas”, fundamentalmente en Ecuador.

2.1.2. La perspectiva de los movimientos populares: la economía popular

Otra de las corrientes a destacar aquí es la que emerge de las propias organizaciones de la economía popular forjadas en los años recientes. Nos referimos al proceso de organización de los trabajadores expulsados del mundo formal, que derivó en la definición de un nuevo sector denominado “economía popular”, que construyó una herramienta política y sindical novedosa: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)⁹, que irrumpió en el debate público en 2011.

Tomaremos los aportes de Alexandre Roig y Pablo Chena, intelectuales que vienen contribuyendo en la teorización desde las organizaciones, así como las elaboraciones que realizaron los propios dirigentes sociales de la llamada economía popular (Juan Grabois y Emilio Pérsico).

En esta perspectiva podemos ver que existe una fuerte ligazón entre acción política y teoría, en donde es la primera la que va marcando el ritmo y necesidades a la segunda. En ese sentido, podemos decir que se trata de una *epistemología de la praxis*, en tanto que es desde las necesidades del movimiento popular que se desencadenan los momentos de teorización.

Las organizaciones de la economía popular emergen ante la confirmación de que las transformaciones del mundo del trabajo iniciadas en la década del ‘90 no iban a ser momentáneas, sino estructurales. Las políticas de amortiguamiento social “hasta que vuelva el pleno empleo” (Coraggio y Loritz, 2022: 139) -que como veremos, se promovieron durante las gestiones de gobierno kirchnerista entre los años 2003 y 2015- no podían tener resultados de

⁹ Hoy Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

fondo para los amplios sectores de trabajadores privados de derechos. Justamente es a ese sector que pretenden representar y organizar.

Desde esta perspectiva, entienden que el conjunto de trabajadores desafiados del mundo del trabajo asalariado antes que *población sobrante* o *masa marginal*¹⁰ sin ninguna funcionalidad para la acumulación de capital, siguen siendo sectores productivos que trabajan, de diversas y múltiples maneras, sólo que ahora lo hacen sin un patrón, ni en un espacio de trabajo específico. En ese sentido, Chena (2017) señala que además de encontrarse por fuera de la relación salarial tradicional, lo que define a las actividades de la economía popular es que tienen bajos ingresos y escasa capacidad de consumo y acumulación de capital.

Se trata de trabajadores que desarrollan sus actividades tanto en los hogares, como en el espacio público, o en espacios comunitarios, se organizan bajo distintas formas (cuenta propia, trabajo familiar, asociaciones, cooperativas), y se dedican a distintas “ramas” productivas o de servicios (desde la producción textil, alimentos, venta ambulante, comercialización popular, trabajo de cuidados, infraestructura, reciclado, entre otros) (Maldovan Bonelli, 2018). Según sus dirigentes, es un trabajo “que se inventaron” los excluidos para resolver su sustento, que no fue organizado previamente ni por el mercado, ni por el Estado (si bien algunos trabajos ya se desarrollaban -producción campesina, trabajo doméstico-, pero sin un debido reconocimiento) (Grabois y Pésico, 2015).

Un contrapunto con la perspectiva clásica, es que este recorte excluye a los trabajadores asalariados formales como parte de la “economía popular”. Pero no por antagonizar con ese sector, sino más bien por encontrar en estos trabajadores un núcleo en común, que es la ausencia de derechos e instituciones que los representen. Al estar fuera de la relación laboral tradicional, estos trabajadores están dispersos, desorganizados y no cuentan con sindicatos que puedan

¹⁰ Nos referimos al debate que en los años 70 tuvo como referente al sociólogo José Nun, quien cuestionó el concepto de “ejército industrial de reserva” de Marx y el rol de los trabajadores desocupados en relación al proceso de producción capitalista, proponiendo la idea de la “masa marginal”, como la posibilidad de la ausencia de una función específica de estos sectores en la acumulación de capital, sentando las bases para el debate sobre desafiación y exclusión social que tendría resonancia en los años 90.

defender sus derechos. De allí que la conformación del sector de la economía popular se da al calor de construir una herramienta sindical propia (Grabois y Pérsico, 2015). Su escasa institucionalización como trabajo impide el acceso a derechos laborales, como los conquistados por la clase obrera en las fábricas.

En este sentido, encuentran que si bien los trabajadores de la economía popular siguen produciendo valor y permiten la reproducción de la vida de los sectores populares, este trabajo está atravesado por relaciones de dominación en las que se les extrae renta de diversas formas, imposibilitando su desarrollo. Esto se da, por un lado, a través de las relaciones desiguales de intercambio en el mercado (bajo poder de negociación para vender sus productos, comprar bienes e insumos, vender su fuerza trabajo, etc.) y la subordinación al capital financiero en el momento del consumo (endeudamiento y usura), al que recurren por la falta de activos (Chena, 2018; 41; 2022; Roig, 2018: 88). Por lo tanto, existen condiciones de desventaja y explotación por parte de los sectores rentísticos del capital, que le impiden acceder a niveles de ingresos que garanticen una vida digna.

Por lo tanto, de lo que se trata es de romper esas relaciones de subordinación y dotar de derechos a estos trabajadores para que puedan desarrollarse, lo que lleva a impulsar un proceso de reivindicación y lucha por el reconocimiento de estos sectores como trabajadores (ya no como desocupados), y la necesidad de conquistar sus derechos actualmente inexistentes.

En un artículo reciente, Chena (2022) avanza en la posible consideración de la economía popular como un nuevo modo de producción, que si bien no cuenta aún con las condiciones materiales para su consolidación, demuestra generar procesos de trabajo y producción que resuelven las condiciones materiales de existencia de los sectores populares, bajo criterios éticos, políticos y económicos que le son propios y que podrían expandirse más allá de su propio sector¹¹.

¹¹ En este artículo pareciera acercar posiciones respecto de la perspectiva clásica, de la cual se retoma la caracterización de la economía popular y la perspectiva transicional.

A diferencia de la perspectiva clásica, se parte de las actividades económicas realmente existentes en los sectores populares, para emprender un camino de dotación de derechos laborales que permitan su desarrollo, así como también el reconocimiento y jerarquización de sus actividades. En la perspectiva de la economía social y solidaria, el énfasis del desarrollo de la economía popular (a medida que se va conformando en “economía popular solidaria”) está puesto en el despliegue de entramados productivos, de distribución y consumo propios, crecientemente autogestivos y cooperativos, que vayan reemplazando los trabajos de baja calificación y productividad desarrollados espontáneamente por los trabajadores como solución de “emergencia” ante la crisis.

Como ejemplos, para la economía popular, una actividad como el “cartoneo” pasa de ser una actividad de la más baja calificación, a una actividad relevante a nivel social, vinculada al reciclado de residuos, la promoción ambiental y la ecología urbana. Un “trapito” cuidacoches, si se logra una base de organización y dignificación, podría pasar a formar parte de brigadas de seguridad urbana organizadas por la propia comunidad, resolviendo una necesidad apremiante en la realidad de los territorios urbanos. El trabajo destinado a la gestión de comedores sociales, más que una tarea de sobrevivencia y de gestión de la pobreza, puede jerarquizarse como una actividad relevante en la nutrición y el derecho alimentario, en la promoción de la soberanía alimentaria en los barrios. Son actividades que además de incidir en la reproducción social de las propias comunidades, proponen al conjunto de la sociedad una manera de resolver la crisis que el sistema produce (a nivel ambiental, social, alimentario).

No es que la producción de encadenados productivos y de servicios autogestivos, vinculados a circuitos crecientes de comercialización y consumo cooperativo, no formen parte de un horizonte a desarrollar, pero hay un énfasis en partir de la dignificación de actividades realmente existentes, aunque resulten en principio trabajos insuficientes en clave de los desafíos de construir “otra economía”. No obstante, muchas de estas actividades terminan siendo claves

en la reproducción de la vida de los sectores populares, mucho más si se valorizan, jerarquizan y se politizan poniéndose al servicio de la comunidad.

Aquí radica, a mi entender, un elemento novedoso y que aún se encuentra en etapa de exploración incluso para los propios movimientos de trabajadores de la economía popular, que es la convergencia con las luchas feministas, tema que desarrollaremos más detenidamente a partir de la perspectiva de las economías populares.

Recapitulando, la “economía popular” como concepto es significativo en cuanto a lo que posibilitó en términos políticos: (i) en pocos años reconstruir la subjetividad como trabajadores (y sobre todo, una agenda de lucha común) de un importante sector de la población económicamente activa excluida del mercado de trabajo (y en algunos casos, nunca incluidos en él), (ii) construir una herramienta de representación político-gremial, (iii) avanzar en la conquista de derechos para estos trabajadores, y (iv) visibilizarse, participar y disputar sentido en la opinión pública y la arena política. Otorgó un sentido unificador a un conjunto disperso de trabajadores, propiciando su reconfiguración como sujeto político en la escena nacional (Muñoz y Villar, 2017; Fernandez Alvarez, 2022).

Más allá de distintos lineamientos y discursos que refieren al modelo de sociedad al cual se aspira llegar (acceso a tierra, techo y trabajo, justicia social, independencia económica, soberanía política), la gran preocupación es el tiempo presente y cómo mejorar las condiciones del sector, con las posibilidades que se van generando en cada instancia. En este sentido, el Estado es un actor clave para abrir ese camino de “institucionalización” del sector, que permita construir y garantizar los derechos para estos trabajadores.

Es importante destacar que los movimientos sociales que dieron origen al armado de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, provienen tanto de corrientes de pensamiento de la izquierda, como de tradiciones nacional-populares, en donde cobra centralidad la categoría “pueblo” en su sentido plebeyo y como sujeto histórico de

transformación. Los trabajadores de la economía popular son visualizados como los “descamisados” del siglo XXI (Maldovan Bonelli et. al.: 2017).

2.1.3. La perspectiva de la *investigación militante*: las economías populares

La tercera corriente que completa el presente mapa conceptual, es la que se compone de los trabajos de Verónica Gago sobre las economías populares (2014, 2015, 2016, 2018). Desde un marco teórico-epistemológico que toma forma al calor de las insurgencias populares de fin de siglo XX en la región, hay una apuesta metodológica que encadena de manera sinérgica la interpretación con la acción; el pensar, con el hacer. Los discursos y modos de interpretar la realidad tienen carácter performativo, abren o cierran posibilidades, y en ese camino, el ejercicio de teorización sobre lo que sucede cobra un sentido *militante* (Gago, 2017).

En sus trabajos hay presente una tradición foucaultiana, combinada con las bases de la crítica a la economía política marxista con la teoría feminista, puesta al servicio de interpretar los mecanismos de poder presentes en estas coyunturas -siempre dinámicos y cambiantes-, así como las formas de resistencia desplegadas por los sectores subalternos. La cuestión central es develar los procesos que están sucediendo en el aquí y ahora y captar su movimiento.

Coincidiendo con las perspectivas ya comentadas, “las economías populares” para esta autora también se vinculan a la temporalidad específica de la crisis del trabajo asalariado de los últimos 40 años y las luchas sociales que emergieron en ese contexto. Sumado a ello, entiende que éstas refieren a una espacialidad particular, ya que se concentran mayormente en las periferias y suburbios del denominado “sur global” (metrópolis latinoamericanas y periferias del mundo). Al mismo tiempo, encuentra que hay en ellas un origen “analítico” propio que las distingue, que contacta con diversas corrientes críticas de la teoría económica convencional (Gago y Gachet, 2018: 12-13). Se refiere a ellas en plural, debido a la diversidad de formas que asumen en cada contexto en particular.

Dado su origen *plebeyo*, encuentra que su sentido está siempre en disputa. Con el objetivo de neutralizar su carácter disruptivo, existen sobre ellas intentos de normalización que

las coloca en universos asociados al imaginario del emprendedorismo o la economía informal, pero que sin embargo es posible identificar en su recorrido una capacidad de reinventarse y recuperar horizontes políticos que permitan imaginar nuevos desplazamientos sobre el orden instituido (Gago, 2016). Esa capacidad para lograr (o no) tales desplazamientos, permanece en constante tensión, por tanto se torna necesario hacer una lectura precisa en cada coyuntura.

A modo de ejemplo sobre la relevancia de esta cuestión, Gago revela en un estudio sobre las prácticas de trabajadores migrantes de países limítrofes en contextos de los gobiernos populares de la región, la persistencia de racionalidades neoliberales que se producen *desde abajo*, aún cuando el giro nacional y popular de los gobiernos llamados “progresistas” habían enterrado, al parecer, la influencia neoliberal¹² (Gago, 2014).

Encuentra que en estas “economías abigarradas”¹³, se combinan tanto las lógicas de resistencia al despojo y la vida comunitaria, con la racionalidad del cálculo economicista de una manera propia, *tácticamente*, que lejos de operar en términos de subordinación lineal, adquieren una *pragmática vitalista*, una capacidad de operar positivamente y en su favor sobre condiciones que le son adversas¹⁴. En síntesis, los procesos de dominación y resistencia en las economías populares son complejos y no pueden leerse de manera simplista.

Ahora bien, a modo de organizar los aportes que trae esta perspectiva para interpretar el recorrido del universo diverso que componen las economías populares en los últimos años, tomaremos tres aspectos principales que nos parecen importantes recuperar en nuestro análisis: (i) la interpretación de las nuevas formas de extracción de valor que se ejercen sobre el trabajo, (ii) la recuperación de la economía feminista para comprender las economías populares y (iii) la dimensión política de su genealogía.

¹² Gago diferencia así un neoliberalismo producido *desde arriba*, que en todo caso es sobre el cual intervinieron los gobiernos de tinte nacional y popular, con dispositivos que siguieron funcionando *desde abajo*, y que no son tenidos en cuenta en el análisis político.

¹³ Concepto tomado del sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, que refiere justamente a la mixtura de lógicas de distintos espacios y etapas, conjugadas en un mismo tiempo.

¹⁴ Si bien desde un marco teórico muy diferente, podemos encontrar similitudes con el planteo de Coraggio respecto de la “economía popular realmente existente” y la presencia de lógicas no necesariamente antagónicas al homo economicus de la economía neoclásica.

En relación al primer aspecto, en un escrito realizado junto a Mezzadra, Gago parte de las transformaciones recientes del capitalismo, en las que advierte la presencia de dinámicas de acumulación de capital que viraron del sector productivo a las finanzas, proceso que venía expandiéndose desde hace años pero que se terminó de consolidar a partir de la crisis financiera del 2008 (Gago y Mezzadra, 2015). Ello representó una reconfiguración de las operatorias de extracción de valor sobre el trabajo. A la histórica relación de explotación presente en las fábricas mediante el trabajo asalariado, Gago y Mezzadra señalan que las masas de trabajadores relegadas a los márgenes de la formalidad también ofrecen rentabilidad al capital (ahora financiero), mediante el mecanismo que denominan “extractivismo ampliado”.

Encuentran que en el contexto de los gobiernos “progresistas”, estos procesos tomaron mayor dinamismo y dimensión. Durante este período, el modelo de acumulación se asentó sobre las bases de un neodesarrollismo basado en la extracción de recursos naturales y commodities agropecuarios y mineros, como mecanismo de financiamiento del Estado y la economía. En ese contexto, la implementación de programas de transferencias de ingresos para disminuir los niveles de pobreza y desocupación, terminó oficiando de puntapié para la injerencia de las finanzas en el mundo de los pobres. Estas transferencias dieron lugar a “formas precarias de inclusión social”, basadas en el fomento del consumo que permitieron estos subsidios. Un consumo que no se destinó al consumo durable (vivienda, tierra), sino a la obtención de medios de subsistencia, provistos por una industria y un mercado concentrado y extranjerizado, mediante diversas formas de crédito y endeudamiento.

Sumado a eso, Gago entiende que los subsidios se implementaron resaltando una concepción individual de los derechos (“ciudadanía basada en el consumo”), sin buscar fortalecer las formas comunitarias de existencia propias de las economías populares y sus mecanismos de organización que habían proliferado durante la crisis. Esto terminó favoreciendo

la consolidación de subjetividades neoliberales que contribuyeron a la propia deslegitimación de estos gobiernos¹⁵ (Gago, 2014, 2016).

En síntesis, estar fuera o dentro de la relación salarial, ya no interviene entonces en la posibilidad del capital de extraer valor. Por lo tanto, tampoco en esta corriente se abona a la tesis de los excluidos como masa marginal.

La segunda dimensión a retomar, tiene que ver con la recuperación de las teorías de la economía feminista. Gago encuentra que existe una afinidad particular entre economías populares y economías feministas, en el hecho de que en ambos casos se trata de pensar el trabajo y la explotación más allá de la forma “salario” (Quiroga Díaz y Gago, 2014; Gago, 2018a, 2018b [Facultad Libre]).

Retoma los trabajos de Silvia Federici (2010, 2018), quien realiza una genealogía del trabajo asalariado como dispositivo de dominación durante el capitalismo. Federici sostiene que el salario funcionó como un dispositivo disciplinador del trabajo en el pasaje del feudalismo al capitalismo, transformando a campesinos y siervos en trabajadores disponibles para servir a la naciente industria, al mismo tiempo que reorganizó a la nueva sociedad reforzando los principios patriarcales. La nueva definición de “trabajo” socialmente reconocido, visible y remunerado, se reduce al trabajo asalariado organizado por el capital en los espacios productivos de talleres y fábricas. Este fue asignado a los varones, quienes se consolidaron en su rol patriarcal de proveedores y jefes de familia. Mientras que a las mujeres se las recluyó en los hogares, sosteniendo la reproducción familiar, desarrollando un trabajo que no es reconocido, ni remunerado, pero que al mismo tiempo es condición de posibilidad de la acumulación de capital en la fábrica. De allí que la “caza de brujas” de fines de la Edad Media, funcionó como mecanismo de persecución y confinamiento de las mujeres al ámbito doméstico, que hasta el momento cumplían un rol social importante en sus comunidades, en el cuidado de la salud, la

¹⁵ Gago menciona la paradoja de los gobiernos progresistas que construyeron legitimidad en base a la fórmula de la ciudadanía a partir del consumo, para luego ubicar allí mismo la causa de su fracaso electoral, argumentando que se debió a “fallas en la politización” de ese consumo inducido (Gago, 2016).

alimentación y el cuidado de la tierra. La lucha de las mujeres en las distintas oleadas feministas, tuvieron que ver con visibilizar y cuestionar ese rol social asignado.

La relación que encuentra Gago con las economías populares, es que éstas también son producto de la expulsión de los trabajadores de la fábrica, y con ella, de la forma asalariada del trabajo. Al igual que las mujeres de la Edad Media, estas masas de trabajadores fueron recluidas a los márgenes invisibles de reproducción de la vida. Éstos se vieron inmersos en el despliegue de diversas formas de trabajo no reconocido, ni remunerado (o mal remunerado), que sin embargo permite garantizar la vida de amplios sectores de la población, y que como vimos, también ofrecen valor para la acumulación capitalista.

Por lo tanto, tanto el feminismo como la economía popular se rebelan y cobran politicidad al tomar conciencia del valor de su trabajo y el lugar que en realidad ocupan en la sociedad. Son resistencias que al mismo tiempo despliegan de manera latente y embrionaria, formas comunitarias de existencia propias de las clases subalternas, abriendo la posibilidad a la emergencia de sociabilidades y subjetividades anticapitalistas.

Esto nos lleva a la tercera dimensión que refiere a la relación de las economías populares y sus formas de politicidad y resistencia. Para Gago (2016), hay una genealogía política a recuperar en las economías populares, que las conecta con los procesos de resistencia contra el neoliberalismo de los movimientos sociales de los años '90.

La lectura sobre la crisis del 2001 ha sido terreno de disputa de sentido acerca de a quién se le otorga el protagonismo para que se produjera el cambio de ciclo. Por lo tanto, una clave de análisis que propone Gago es poder identificar la temporalidad de las luchas, es decir, cómo las organizaciones de la economía popular estructuran la revuelta en el tiempo y qué capacidad tienen de imponer una lógica propia frente al discurso que impone la estatalidad gubernamental (más allá de qué gobierno se trate) (Gago, 2018a [Facultad Libre], 16m30s).

El resultado de esas tensiones van moldeando a las economías populares o bien como foco de insurgencias o bien, como estabilización de mansedumbres (Gago, 2016: 3). En ese

contexto, identifica a las formas popular-comunitarias de resolver la vida que despliegan en los territorios, como vectores donde las resistencias se consolidan.

2.1.4. A modo de síntesis

Hasta aquí un breve mapa de las principales interpretaciones de este campo en construcción, cuyo diálogo aún no pareciera consolidarse en clave de identificar los acuerdos y desacuerdos existentes, los que parecieran responder no tanto a definiciones ciertamente opuestas, sino más bien a los distintos contextos epistemológicos de los cuales forman parte, que enfatizan sobre aspectos distintos. Desde nuestro punto de vista, tales perspectivas son más bien complementarias, que contradictorias.

A modo de síntesis, en la perspectiva clásica, la ética y los valores ocupan un lugar muy importante como base para reordenar la economía (siendo que se parte de una concepción de la misma como orden *institucionalizado*), así como la prefiguración del ideal a donde llegar, como un elemento relevante para analizar de manera estratégica los procesos de transformación en clave *transicional*. Ambas cuestiones resultan relevantes a la hora de pensar los cambios paradigmáticos.

En la perspectiva de las economías populares, se enfatiza en las dinámicas y transformaciones de los procesos de acumulación de capital, así como las conflictividades sociales y la particular configuración de relaciones de poder entre el capital y el trabajo, incorporando fuertemente la dimensión feministas en el debate, que sin duda resulta importante para comprender a los sujetos y dinámicas sociales que habilitan u obturan las transformaciones del orden social.

Y en la perspectiva de los movimientos sociales, los marcos teóricos se ordenan en función de la intervención concreta de los procesos reales, del “qué hacer” en una temporalidad del conflicto social y la construcción de subjetividad presentes, que permitan incidir en la mejora urgente de las condiciones de vida de las mayorías precarizadas.

Más allá de la importancia de construir consensos, hay ciertas coincidencias importantes entre las tres propuestas, que también se fueron constatando en la observación de los casos a medida que fui avanzando en el trabajo de campo. Estas fueron delineando el recorte definitivo del problema y el enfoque conceptual específico a desarrollar para interpretarlo, a saber, cuál es el rol que juegan los proyectos de huertas urbanas en el despliegue de las economías populares en los años recientes, y en qué medida se ponen en juego nuevas o particulares prácticas de resistencia.

Me refiero por un lado, a la centralidad que adquiere “lo comunitario” como distinción de las relaciones sociales que construyen estas economías; una centralidad cuyo sentido político empieza a ganar espacio frente a un sentido que habitualmente se lo asoció a las formas de contención social emergidas en tiempos de crisis. Dicho de otra manera, lo comunitario se torna en esta etapa en horizonte político.

Y por otro lado, la afirmación respecto de la persistencia de los procesos de despojo y extractivismos de todo tipo que se siguen profundizando en el tiempo presente, delineando de manera particular el desarrollo de antagonismos y conflictos sociales actuales.

A continuación, profundizaremos en estas dos cuestiones, compartiendo debates y conceptos que nos permitan interpretar el modo en que aparecen en los casos analizados.

2.2. Otros aportes conceptuales para los debates recientes

2.2.1. Lo popular-comunitario y las formas de producción de “lo común”

Lo comunitario como relación social presente en los sectores populares no es una novedad. Son formas precapitalistas de sociabilidad que desarrollaron los pueblos originarios, y distintos autores describen como “economías comunitarias” (Chiroque Solano, Mutuberría Lazzarini, 2011). Esos rasgos, lejos de haber quedado en el pasado o circunscritos a los territorios indígenas, siguen vigentes de manera “abigarrada” en los sectores populares del presente en nuestras metrópolis latinoamericanas, mixturados con otras lógicas. Pese a su

desarticulación en la transición a las sociedades capitalistas urbanizadas, aún permanecen latentes en los sectores subalternos.

En ese sentido, las lógicas comunitarias propias de las economías populares han sido destacadas en las corrientes de pensamiento presentadas aquí. Por un lado, como parte del despliegue de su fuerza de trabajo, visible en la resolución colectiva de la reproducción social asumiendo trabajos de cuidado, autoconstrucción, abastecimiento, etc. Es decir, construyen comunidad, como aparece la perspectiva de la economía popular. Por otro lado, lo comunitario es un aspecto clave en el funcionamiento de las unidades domésticas de la economía popular solidaria, centrada en la reproducción de la vida, y a su vez representa de forma embrionaria la solidaridad sistémica a desarrollar en una economía social y solidaria. O bien, como elemento que permite actualizar la conflictividad social, reflejando las tensiones entre resistencia y mansedumbre, entre subjetividad no capitalista y subjetivación neoliberal, como presenta la perspectiva de las economías populares.

Este consenso de la relevancia de lo comunitario, se amplía a otros intelectuales y dirigentes sociales compenetrados con la crisis de época, como por ejemplo Rita Segato, quien en su audaz descripción de las formas actuales de descomposición social, encuentra también que son los lazos comunitarios y populares los que pueden frenar el avance de la emergencia de las economías ilegales y subterráneas (Segato, 2013). O como el Papa Francisco, quien desde un lugar central del tablero de poder global, se refiere a la inviabilidad del capitalismo como proyecto societal, generando descarte y muerte, y resaltando en contraposición el rol de los “poetas sociales” (en referencia a los movimientos populares) como constructores de comunidad (Francisco, 2015).

En síntesis, más allá de las diferencias de mirada, lo *comunitario* aparece como un rasgo importante a destacar de las luchas populares del presente, no solamente como un elemento cultural, sino más bien, político.

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con *lo popular comunitario*?

Encontramos pertinente recurrir a los debates que vienen impulsando distintas intelectuales feministas en torno a la noción de “lo común” como síntesis de los antagonismos y resistencias que se estuvieron desplegando en las luchas de principio de siglo en el continente. Nos referimos a los aportes de Raquel Gutierrez Aguilar y Silvia Federici, como figuras relevantes de un colectivo más amplio, presente también en varios de los trabajos de Verónica Gago.

Raquel Gutierrez Aguilar es una intelectual mexicana que estuvo muy comprometida con las luchas indígenas en Bolivia durante los años ‘80 y ‘90. A lo largo de los años, viene estudiando las formas no capitalistas de reproducción de la vida, inspirada en las luchas que pueblos indígenas y sectores populares urbanos protagonizaron en el continente en la historia reciente. Encuentra que allí se develaron “horizontes populares comunitarios” de lucha, reflejados en los *entramados comunitarios* que cobraron densidad como estrategia política, logrando “vetar” los planes del proyecto neoliberal (en referencia a las guerra del gas y el agua en Bolivia) (Gutierrez Aguilar, 2017).

La autora enfatiza la importancia de entender lo “no capitalista”, lo “anticapitalista” como formas existentes en la realidad, en los mundos indígenas, en los sectores campesinos, en las barriadas urbanas latinoamericanas, frente a los discursos que lo construyen como inviable o imposible. No lo asume como una característica de los pueblos del pasado, sino como una realidad presente en diversos mundos periféricos.

Lo comunitario refiere a “*aquellas relaciones de compartencia y cooperación, asumiendo una capacidad autónoma de una colectividad de decidir sobre su reproducción material y simbólica*” (Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman, 2019: 23). Por lo tanto, responden a formas de *producción de lo común*, que implican tanto una voluntad de recuperar la riqueza social expropiada por el capitalismo, al tiempo que se asumen formas de autonomía para el despliegue productivo. Se trata de una forma social de reproducir la existencia mediante la producción de *valores de uso* en lugar de *valores de cambio*, como en el capitalismo. En ese

sentido, no se trata únicamente de las luchas por los “bienes comunes” de la naturaleza, sino que de manera más amplia, se propone recuperar, producir y usufructuar en común el conjunto de bienes para la reproducción de la vida.

Estas dinámicas productivas de “lo común” no configuran un sistema aislado, sino que son formas que presentan relaciones condicionadas por el capital y dinámicas estatales de subordinación. Así como el campesinado es considerado como una formación social distinta al capital, con autonomía para desarrollar su reproducción social, pero que fue subsumida por el capitalismo, estas dinámicas de producción asociadas a lo común, presentan relaciones similares con el capital. Puede presentar una dinámica de subordinación, pero incompleta, ya que a diferencia de lo que ocurre con el asalariado, sus formas de producción y reproducción se realizan por fuera del ámbito productivo capitalista. Esa capacidad de dar forma a la reproducción de la vida social, se realiza “*trastocando, deformando o reformando la propia forma de la dominación, de tal manera que su propia reproducción sea posible a través del tiempo, y al hacerlo se contrapone al capital: por eso, lo comunitario es por definición antagónico al capital, aunque su producción no esté definida por este*” (Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman, 2019: 27).

Otro aspecto relevante, es el carácter social que asume el trabajo en estas formas productivas de “lo común”. Como explicó Marx, en las relaciones capitalistas el trabajo concreto que produce cosas se transforma en *trabajo abstracto*, es decir, importa solamente en tanto capacidad de producir productos para el intercambio y no para su uso. Allí reside su carácter social (Marx, [1867], 2000: 36-47). En cambio, en los entramados comunitarios, el trabajo concreto que permite la producción de cosas para su uso (valores de uso para la reproducción de la vida), se transforma en riqueza social para ser utilizada por otros. El carácter social del trabajo concreto bajo esta trama, es para Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman, el *trabajo comunitario*, que produce *bienes comunitarios*. Es la producción de los medios de existencia para la reproducción en común. Producción y reproducción se funden en un mismo

objetivo colectivo (y no como en el capitalismo, que aparecen esferas separadas, siendo la producción que subsume a la reproducción). Así como tampoco cobra sentido la división entre un trabajo productivo y otro reproductivo (Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman, 2019: 32).

Ahora bien, la reproducción de la vida necesariamente puede requerir el uso de bienes que no hayan sido producidos en esa trama comunitaria, dando lugar a procesos de intercambio. Pero esos intercambios, no son tampoco organizados por el criterio de los valores de cambio, sino mediante otros códigos y dispositivos producidos e interiorizados en cada cultura.

Así es como llegamos a otro de los puntos centrales de este planteo, que refiere a cómo se procesan las relaciones de poder, que la autora resume en la idea de “autorregulación”, es decir, la generación de “acuerdos que obligan”, similar al planteo de la reciprocidad presente en Polanyi. La política se centra en organizar los *modos en que se produce y se aprovecha el usufructo común, las formas de uso de aquello producido colectivamente*. Lo común no es algo dado, hay que producirlo y regular su aprovechamiento que se delibera colectiva y políticamente. De manera que no hay escisión entre el proceso productivo y las actividades políticas (Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman, 2019: 40).

De aquí se desprende todo un debate en torno a la propiedad y el derecho, en términos de poner en perspectiva justamente ese “común” que puede encontrarse en disputa, y que tensiona en discutir la reapropiación colectiva de la riqueza material disponible, su gestión y usufructo, como se produjo en aquellas guerra por el gas y el agua en Bolivia (Gutierrez Aguilar, 2017: 36).

En ese sentido, dada la capacidad de las lógicas comunitarias de antagonizar con el capital, éste siempre intenta subsumirlas. Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman llaman “subsunción general” al proceso de explotación de valor que produce el capital sobre las formas comunitarias, no capitalistas. Citando a Armando Bartra (1979), señalan que la principal explotación que se produce sobre estos sectores, se da en el momento del intercambio en el mercado. Ahora bien, al seguir contando con medios de producción, tienen la capacidad de

acumular colectivamente bases materiales que les permiten cierta autonomía y capacidad de sustento. En ese sentido, lo que más interesa al capital es desarticular la comunidad, ya que es ésta la que condiciona el proceso de acumulación capitalista, mediante el despliegue de una “capacidad de veto” sobre los planes de acumulación y sobre las formas estatales que buscan desarticular la capacidad de producir decisiones colectivas (Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman, 2019: 43).

Por lo tanto, las transformaciones sociales deben pensarse más como “revoluciones por alejamientos sucesivos”, cotidianos y en distinta escala, que como cambios rotundos de un día para el otro.

En síntesis, desde esta óptica, lo popular comunitario es mucho más que una característica cultural de nuestros pueblos, sino que contiene un potencial transformador del modo de producción.

Nos interesará poner estas categorías en diálogo con las experiencias analizadas, para poder detectar -a partir de lo que las prácticas agrícolas en la urbanidad nos permiten ver- en qué medida esta mirada respecto de las formas de producción de lo común, aparece en las estrategias de resistencia de las economías populares propias del momento actual, colocando lo popular-comunitario en el centro de sus horizontes políticos.

2.2.2. Guerra, capital y territorialidades de la defensa

La segunda dimensión a tratar aquí, refiere al análisis de las formas de ocupación del espacio de las economías populares urbanas para el despliegue de sus proyectos productivos y las territorialidades que se ponen en juego, buscando indagar acerca de la conflictividad que atraviesan los procesos analizados. Queremos indagar acerca del carácter particular de los antagonismos desarrollados sobre los sectores populares, en un contexto donde las luchas contra el despojo son distintivas de esta etapa neocolonial (Mazzeo y Stratta, 2019; Federici, 2010, 2018, 2022; Harvey, 2004).

En ese sentido, como señalan tanto Federici (2010) como Harvey (2004), la acumulación originaria lejos de haber representado un momento inicial en el desarrollo del capitalismo, es un dispositivo que se repite en la historia en distintos momentos, sobre todo en las crisis de acumulación. Se van ampliando “nuevos cercamientos” sobre territorios y recursos aún no sometidos al capital, y se van produciendo procesos de “acumulación por desposesión”, o bien, la proliferación de diversos extractivismos.

En la búsqueda por caracterizar las formas de violencia que supone el despliegue de los procesos de desposesión, encontramos los trabajos de Alliez y Lazzarato (2022), quienes recuperan la dimensión de la guerra como mecanismo constitutivo del desarrollo del capitalismo. Recuperan de Federici (2010, 2022) esos momentos de despojo como escenas de guerra en las que se ordena y disciplina a las poblaciones para la acumulación de capital. La “caza de brujas” que disciplinó a las mujeres para recluirlas en los hogares y someterlas al trabajo doméstico, también significó una guerra para doblegar sus cuerpos.

Así es como a los habituales análisis críticos del funcionamiento tanto del capital, como del rol del Estado como organizador de su despliegue, los autores asumen que es preciso incluir una crítica (y una teoría) respecto de la evaluación de la guerra como dispositivo para el desarrollo del capitalismo. Las distintas formas de la guerra han permitido disciplinar y ordenar los territorios y las poblaciones a los fines de la acumulación de capital necesaria en cada momento histórico.

Recordemos la célebre definición de guerra desarrollada por el militar prusiano Carl von Clausewitz ([1832] 2005), que la consideraba como la continuación de la política por otros medios. Si la política es entendida en la modernidad como la posibilidad de ejercer el poder y la dominación sobre otros grupos o pueblos, la guerra es una continuación de esos fines, incluyendo otros medios, como el uso de la violencia.

En ese sentido, y realizando una línea histórica de las modalidades de la guerra a través del tiempo, los autores señalan que así como las guerras por los cercamientos permitieron

subsumir tierras comunales a la valorización de capital, las guerras coloniales aportaron riquezas de los territorios conquistados para engrosar la acumulación originaria en los inicios del capitalismo. Una vez instaurado el capitalismo, las guerras imperialistas del siglo XIX y XX organizaron la disputa tanto por el reparto de tierras y mercados del mundo, así como la definición sobre la conducción y hegemonía de la economía mundial.

En América Latina, por ejemplo, la instauración del neoliberalismo necesitó del despliegue de un dispositivo bélico para consolidarse. Las dictaduras militares y la aniquilación de amplios sectores movilizadas y en lucha, fueron funcionales a la implementación de las reformas neoliberales.

Ahora bien, ante la actual consolidación de la hegemonía del capital financiero global y su reconfiguración de las relaciones de poder a escala planetaria, ¿cuál es el dispositivo de guerra funcional a su modelo de acumulación? Los antagonismos se han reorganizado. Estos ya no se encuentran predominantemente en la división entre capitalistas y trabajadores dentro de las fábricas. Tampoco se encuentran entre naciones centrales y periféricas, ya que los propios conceptos de Estado y nación se tornan porosos frente a la volatilidad de los flujos financieros. Tal es así, que la recolonización del presente pareciera ordenarse en torno a la dicotomía entre los dueños del dinero y los deudores (Lazzarato, 2013).

Partiendo de allí, Lazzarato y Alliez entienden que el dispositivo de guerra asociado a este contexto se desenvuelve como *guerra contra las poblaciones*, es decir, violencias que no se producen entre Estados, sino que apuntan a la disgregación de las sociedades como mecanismo de disciplinamiento y control. Es una guerra cuya dinámica termina desembocando en modalidades de guerras civiles y en la ruptura del lazo social, de modo tal de dejar a territorios y distintos ámbitos de los que se pretende extraer valor (las clases, las razas, las subjetividades, la naturaleza) sin capacidad de reacción y dóciles para someterse a los mecanismos de acumulación. De allí que se trata de un tipo de guerra ya no en singular como en el siglo XX,

sino de *guerras* en plural, y de carácter permanente (no tienen fin, hasta tanto no cesen las dinámicas de despojo).

La emergencia de nuevas derechas extremas, profundizada a partir de la crisis financiera del 2008, son una expresión del despliegue de estos mecanismos de violencia y ruptura de los lazos sociales, dispuestas a lanzar una “guerra racial de clase” y de un neoliberalismo que “*promueve una posdemocracia autoritaria y policial manejada por los técnicos del mercado*” (Op. Cit.: 30). El propósito no es más que echar por tierra las condiciones que habían permitido el “reformismo del capital” de los llamados “30 años dorados” del capitalismo.

Otra realidad funcional a esto que nos describen Alliez y Lazzarato es lo que sucede con el avance de las economías ilegales en los suburbios, tanto latinoamericanos como de otras partes del mundo, temas que Segato (2013) y Gago (2019) desarrollan detenidamente. Estas violencias ligadas al narcotráfico van construyendo una nueva institucionalidad que “golpea” por lo bajo a las formas legales de la política y el Estado. Ofrecen trabajo y recursos, frente a la ausencia de otras alternativas laborales y disciplinan cuerpos apáticos, violentos e insensibles al sufrimiento del otro, siendo las mujeres y cuerpos feminizados el territorio privilegiado para ejercer la violencia. En definitiva, es un mecanismo funcional al movimiento de las finanzas. Va desarticulando la institucionalidad formal y abriendo camino a la libre circulación de grandes volúmenes de dinero, que se mueven de un extremo al otro de la legalidad, en una economía que responde más a una lógica de “dueños” que de capital. En ese sentido, guerra civil y narcotráfico son parte de un mismo dispositivo de guerra.

Continuando con el análisis de Alliez y Lazzarato, resulta interesante detenerse en el análisis que realizan de las doctrinas militares recientes de los centros de poder. Allí encuentran una definición del “enemigo” propio de estos contextos. Señalan que este tipo de *guerras contra las poblaciones* se desarrollan sobre un enemigo *indetectable e indeterminado*:

“Como el adversario ahora sólo puede ser “irregular”, la única manera de intervenir es controlar el medio, intervenir para controlar el entorno donde

vive la población y el interior del cual se esconde lo irregular. (...) La acción del ejército debe consistir menos en la identificación y la destrucción de los objetivos que en el control del territorio y la ciudad en particular, ya que esta última constituye el medio o el entorno de la población y de la pobreza globalizada” (Alliez y Lazzarato, 2022: 354).

Así como las guerrillas de los períodos de la descolonización conformaron enemigos irregulares para ejércitos y dictaduras, los enemigos irregulares de hoy podrían estar representados en todas aquellas poblaciones excluidas que intenten cuestionar la lógica de acumulación y extracción de valor del capital. Los pobres, los migrantes, las mujeres, y en conjunto, las economías populares organizadas, pueden constituirse en focos de rebelión. En ese sentido, de lo que se trata es de neutralizar al enemigo, controlando el territorio donde habitan y se desenvuelven.

Es interesante aquí el rol que cumplen las ciudades para el despliegue de este tipo de guerra. En las guerras convencionales, el lugar de la batalla se desarrolla fuera de las ciudades, en los campos, fronteras y territorios lejanos. Por el contrario, en este tipo de guerra, los suburbios y barriadas son los campos de batalla contra las poblaciones segregadas. Pero estas batallas no se despliegan únicamente con el ejercicio de la fuerza, sino que actúan de manera combinada estrategias de intervención sobre las subjetividades y la biopolítica, para apartar a las poblaciones de cualquier alternativa que se aleje de las máximas del libre mercado.

“El uso de la fuerza deberá medirse bajo la perspectiva político-militar de esta guerra de subjetividad que asocia el entramado disciplinario más fino del territorio con un proyecto biopolítico que ocupa los ámbitos económico, social, cultural y médico para mostrarle a la población que su seguridad y prosperidad estarán mejor aseguradas por la economía de mercado que por el colectivismo” (Alliez y Lazzarato, 2022; 368).

En síntesis, Alliez y Lazzarato retoman la afirmación de Carl Schmitt, acerca de que la economía (liberal) persigue los mismos objetivos que la guerra pero por otros medios¹⁶, para sostener que en la actualidad, la expansión de las guerras terminó de establecer ese continuum entre guerra, economía y política, que revelan al liberalismo como *filosofía de la guerra total*. Por lo tanto, la izquierda no puede permanecer ajena a estas problematizaciones. Es necesario incorporar tanto la guerra (como la posibilidad de las revoluciones) como parte de su reflexión crítica. En este sentido, destacan al Papa Francisco, quien sí alerta sobre este problema públicamente¹⁷.

Entendemos que este escenario imprime variables a ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las economías populares urbanas, y la construcción de alternativas en clave de los desafíos civilizatorios presentes. Pues si lo que está en marcha es el despliegue de un nuevo tipo de guerra, no resulta suficiente enfocarse solamente en los modos de ampliar la escala de producción en los emprendimientos populares como condición de expansión o crecimiento.

Relacionando esta propuesta de análisis con los propósitos de la presente investigación, queremos pensar en qué medida las economías populares urbanas pueden estar percibiendo e interpretando este escenario, y en ese contexto, poniendo en práctica estrategias que promuevan la defensa tanto de sus construcciones y conquistas, como de su existencia misma.

En ese sentido, ordenaremos la mirada en torno a las *territorialidades* puestas en juego en las experiencias analizadas, como modos de ocupar el espacio que permiten el despliegue de estrategias de defensa. Observaremos en qué medida las prácticas agrícolas urbanas desarrolladas en los predios colectivos gestionados por las organizaciones, pueden representar el armado de *trincheras* de defensa de “lo común”, así como también de defensa de la propia

¹⁶ Aquí se reformula la frase de Clausewitz, respecto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, a lo que Lenin invirtió en “la política es la continuidad de la guerra por otros medios”. En todo caso, economía, política y guerra, según Alliez y Lazzarato, son tres esferas siempre presentes e interrelacionadas.

¹⁷ “Cuando hablo de guerra, hablo de la guerra de verdad, no hablo de guerra de la religión, sino hablo de guerra mundial en mil pedazos (...). Es la guerra por los intereses, por el dinero, por los recursos naturales, por la dominación de los pueblos”, (Francisco, citado en Alliez y Lazzarato, 2022: 31)

existencia frente a los dispositivos de guerra y despojo que el escenario actual evidencia. Las prácticas agrícolas parecieran jugar un rol vital.

2.2.3. Economías populares y resistencias

Puestas en perspectivas, estas dinámicas desarrolladas aquí, tanto la producción de “lo común”, como las territorialidades asociadas a la defensa, entendemos que son parte de las estrategias que las economías populares están desplegando en el contexto actual y dan forma a lo que definimos llamar “economías de la resistencia”. Buscamos con ese concepto describir los modos en que éstas asumen y se anticipan ante un escenario adverso y hostil que las condiciona, y que se espera, pueda profundizarse en el horizonte no muy lejano. En ese contexto, las prácticas productivas, reproductivas o comunitarias cobran sentido en tanto desarrollo de capacidades de autosustento para atravesar momentos desfavorables.

Haciendo un breve recorrido etimológico de la palabra “resistencia”, encontramos distintas acepciones que nos ayudan a describir el sentido que le atribuimos a la expresión “economía de la resistencia”. La palabra resistencia proviene del latín “resistentia” que a su vez deriva del verbo “sistere”-“stare” que se traduce como “mantenerse o estar en pié”. El prefijo “re” representa una intensificación de la propia acción de sostenerse en contraposición a algo, fijando posición, sin variaciones, y ejerciendo oposición ante cualquier fuerza contraria. La Real Academia Española define a la palabra “resistencia” como la “*acción o efecto de resistir; resistirse*” (RAE, 2022; definición 1). También aparecen otras acepciones que la vinculan a la acción de “tolerar, aguantar o sufrir”. En síntesis, estamos frente a una acción que se opone a la influencia de una fuerza contraria que ejerce presión sobre sí misma, suponiendo una actitud defensiva.

A lo largo del tiempo, las distintas disciplinas del conocimiento fueron adoptando un sentido específico de la palabra. Por ejemplo, en física, la resistencia mide la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico, y es lo que permite que los sistemas no sufran sobrecargas. En el ámbito de la medicina, la palabra resistencia define el proceso por el cual los

microorganismos desarrollan mecanismos para neutralizar los efectos de los fármacos creados para destruirlos. En el deporte, por el contrario, la resistencia física indica la capacidad del cuerpo de continuar una actividad física, más allá del cansancio corporal y psíquico. Muy distinta es la acepción que utiliza el psicoanálisis, donde la resistencia describe el rechazo del paciente a analizar su inconsciente.

En ciencias sociales, los procesos de resistencia se refieren a las manifestaciones derivadas del ejercicio del poder y dominación que un grupo o sistema social ejerce sobre otro. Éste busca imponer sobre los otros sus propias condiciones, mientras que los otros rechazan ser doblegados y sometidos. Como vimos, siendo el capitalismo un sistema social basado en la explotación de quienes detentan el capital sobre un conjunto de “otros” (trabajadores, mujeres, regiones, naciones, territorios), los sistemas de dominación se organizan en función de las dinámicas de acumulación de capital que se dan en cada momento y contexto histórico. “*Donde hay poder, hay resistencia*”, es la célebre frase de Foucault (2008) en el texto *Historia de la Sexualidad*, que nos propone tirar del hilo de la esperanza, aún cuando los múltiples dispositivos a partir del cual el poder logra disciplinar y controlar a los cuerpos, encandilan con su enorme eficacia. “*La historia de todas las sociedades que existen hasta nuestro días, es la historia de la lucha de clases*” escribieron un siglo y medio antes Marx y Engels [1848] (2017) en el texto *Manifiesto Comunista*, para que no olvidemos que los pueblos oprimidos siempre darán batalla.

En ese sentido, el concepto de economías de la resistencia que desarrollamos aquí, refiere al desarrollo de prácticas económicas que permiten a las economías populares resistir ante la fuerza que opera para desarmar y dominar su existencia. Como vimos, el contexto actual supone la profundización de dinámicas neocoloniales, que avanzan mediante nuevos mecanismos de despojo y precarización de la vida de las mayorías. Ello trae aparejado el despliegue de nuevos mecanismos de poder que utilizan la violencia y el desarrollo de dispositivos de guerra contra las poblaciones, que identifican como enemigo a todo aquello que intente oponerse a sus objetivos. Un escenario pincelado con el avance del narcotráfico y las

ultraderechas como fenómenos que sobreestiman las grietas sociales y se oponen a todo lo que supone un horizonte colectivo.

Las economías populares ejercen entonces resistencia al avance de este escenario, ampliando sus capacidades para sostener su posición y evitar su desarme. Al mismo tiempo, buscan fortalecer aquello que desde ese lugar pueden seguir construyendo y ampliando. En ese sentido, tanto los procesos de producción y organización del trabajo, como la ocupación del espacio, cobran sentido, por un lado defensivo, ya que intenta no perder las conquistas y construcciones desarrolladas en los años de lucha, y por otro lado, ofensivo, experimentando nuevas formas de fortalecer el tejido comunitario, en este caso, recuperando las nociones y sentidos de “lo común”.

En cierto sentido, las prácticas económicas acordes a este momento de resistencia se vinculan más a la posibilidad de garantizar la subsistencia que a ampliar la escala de producción y participar en el mercado. La *subsistencia* en estos contextos puede formar parte de una estrategia política colectiva, que asume la complejidad de la época en la cual están insertos.

Con esto no pretendo cuestionar las perspectivas que analizan detenidamente la capacidad productiva de estas economías para generar valor, como un modo de posicionar su reconocimiento frente a discursos que históricamente la asumieron como improductiva. Lo que estoy señalando es la posibilidad de identificar los matices que se pueden presentar a la hora de valorar el devenir de estas experiencias, si tenemos en cuenta la capacidad de reacción que hoy asumen frente a la adversidad del contexto. La posibilidad de desarrollar estrategias de defensa de sus conquistas, al tiempo que profundizan relaciones de producción contrarias al mercado total y el capital, nos parece un aspecto importante a atender que pueden aportarnos las experiencias analizadas.

En síntesis, traemos estas categorías para poder pensar, por un lado -basándonos en trabajos previos (Gallardo Araya, 2016)- en qué medida la actividad hortícola urbana lejos de tener un sentido de “pasatiempo”, de “hobby”, “ocio recreativo” y “consumo verde”, podrían

estar cumpliendo un rol muy diferente en el contexto de las organizaciones colectivas de la economía popular. Y por otro, analizar hasta qué punto, la ampliación de la escala de producción como criterio por excelencia para valorar estas economías, podría no estar visualizando otras capacidades que se están desplegando en clave de la construcción de horizontes emancipadores.

*

A modo de conclusión, los conceptos presentados aquí no son más que una propuesta para interpretar los fenómenos que abordamos. Coincidimos con Beckmann y otros (2017), que existe una suerte de “inflación conceptual” en torno a las prácticas y resistencias de estos sujetos frente a la crisis civilizatoria:

“Las experiencias se han ido fragmentando progresivamente en múltiples identidades que destacan una idea central a pesar de compartir un núcleo común de ideas con múltiples enfoques analíticos y experiencias sociales. La fragmentación de proyectos reduce así el potencial político emancipatorio impidiendo tanto el reconocimiento mutuo de los actores, como la formulación de un concepto que sintetice el núcleo central de preocupaciones, ideas y proyectos” (Beckmann et al., 2017: 78).

Entendemos que el campo de “las otras economías” atraviesa esta misma problemática, por lo que encontrar conceptos que logren sintetizar lo disperso y articular las luchas, resulta fundamental para consolidar proyectos emancipatorios. Tal como señala uno de los entrevistados, *“no es momento de cerrar debates, son experiencias en desarrollo. Pueden significar varias cosas al mismo tiempo”* (entrevista a referente histórico del Movimiento Popular Los Pibes, entre 40 y 50 años, actualmente cumpliendo funciones de coordinación política y territorial).

En ese sentido, los conceptos puestos en debate aquí y desde el cual analizaremos los casos, requieren previamente ponerse en juego con las trayectorias históricas de los sujetos y sus luchas, más allá de la experiencia específica que nos convoca a su análisis (en este caso, las

prácticas agrícolas en las economías populares urbanas). Esto nos permitirá reconocer los antecedentes y evolución en el tiempo, para identificar las particularidades del presente y sus interpretaciones posibles. A continuación nos detendremos en ese objetivo.

3. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LAS ECONOMÍAS POPULARES EN LA URBANIDAD (1996-2023)

El propósito de incluir un capítulo que contextualice el recorrido histórico del universo de las economías populares urbanas, responde al objetivo de indagar acerca de la relación entre prácticas agrícolas en el territorio urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires y organizaciones de la economía popular en las últimas décadas. Implica volver sobre los antecedentes de este sujeto para identificar las particularidades del presente, y también, tal cual nos propone Gago (2015), recuperar su genealogía política.

Tomamos la caracterización de Coraggio y Loritz (2022: 113-164) quienes se refieren a los “procesos de movilización social en torno al trabajo” para describir el recorrido de las expresiones de resistencia, organización y lucha de todos los trabajadores que se vieron afectados por las políticas neoliberales y la reorganización del mercado de trabajo en aquellos años (desocupados devenidos en movimiento piquetero, sindicalismo crítico, trabajadores excluidos, empresas recuperadas, asambleas barriales). Analizaremos aquí su derrotero a lo largo de los años, que fue derivando en diversas experiencias organizativas, políticas y económico-productivas, pero que entendemos siguen representando procesos de movilización social en torno al trabajo. Los tres casos seleccionados para este estudio son parte de este universo, cuyo análisis describiremos en profundidad en el próximo capítulo¹⁸.

En ese sentido, el recorrido que proponemos en esta línea histórica recupera, por un lado, los procesos de organización y lucha que atravesó este sujeto social emergente de la crisis, teniendo en cuenta sus modalidades de acción, sus principales demandas, los modos de articulación política y la relación con la estatalidad. Y por otro, las características de sus prácticas económicas y experiencias de organización del trabajo, poniendo especial atención a los antecedentes existentes en relación a las iniciativas agrícolas desarrolladas en la urbanidad.

¹⁸ No profundizaremos sobre los movimientos en torno a la recuperación de fábricas y empresas y las asambleas barriales, ya que si bien son parte de este proceso de movilización social, no constituyen antecedentes directos de los 3 casos seleccionados.

Es preciso aclarar, como señalamos en la introducción, que las prácticas agrícolas en la urbanidad constituyen un campo de experiencias con identidad e historia específica, incluso anterior a la emergencia de los movimientos de trabajadores desocupados. Se trata de un universo variado de actores identificados con la práctica huertera (denominada “agricultura urbana”), a partir de la cual se problematizan cuestiones sociales vinculadas al ambiente, la alimentación, la agroecología y el espacio público, y que cobraron importante visibilidad también en la época de la crisis. No obstante, si bien incluye experiencias de organización colectiva de los sectores populares, se trata de una genealogía distinta a la que trazaremos aquí. Son trayectorias que transcurren en paralelo, encontrando momentos de confluencia, intercambio y dispersión.

Para ordenar el recorrido, definimos tres etapas distintas, caracterizadas por una particular configuración de escenarios políticos y económicos, que al mismo tiempo ordenaron el despliegue de la movilización social en torno al trabajo. Nos referimos a: i) la etapa de resistencia al neoliberalismo “desde arriba”¹⁹ (1996-2003), cuyo inicio marcamos con la primera pueblada piquetera en la provincia de Neuquén en el año 1996, hasta el inicio del gobierno de Néstor Kirchner en el 2003; ii) la etapa de reconfiguración nacional-popular del Estado (2003-2015), período que compone los mandatos de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; y iii) el período que denominamos de ajuste fiscal con endeudamiento externo (2015-2023), incluyendo allí tanto el gobierno liberal-conservador de Mauricio Macri que inició en 2015, como el siguiente gobierno de coalición peronista de Alberto Fernández, que si bien presentan diferencias sustanciales en lo político, presentan continuidades en términos de las restricciones económicas que moldean el escenario social.

Reconstruir esta trayectoria, nos va a permitir ampliar el espectro de interrogación posible en relación a los casos seleccionados.

¹⁹ Tomamos de Gago (2014) esta noción que refiere al dispositivo institucional y gubernamental que implantó el neoliberalismo en el país “de arriba hacia abajo”, para diferenciarlo de procesos que recrean el neoliberalismo desde las prácticas y procesos que se reproducen “desde abajo”. Es una distinción que permite visualizar la continuidad del dispositivo neoliberal, aún cuando esas instituciones dejan de hegemonizar el escenario político.

3.1. Ciclo de resistencia al “neoliberalismo desde arriba”(1996-2002)

Este período se caracterizó por la implementación de las reformas estructurales del Estado, que dieron inicio al ciclo neoliberal en el país. Tales medidas incluyeron el “achique” del Estado mediante el cierre y privatización de empresas públicas, la privatización del sistema previsional, medidas de ajuste fiscal, altos niveles de endeudamiento externo y una política monetaria de convertibilidad fija de la moneda nacional con el dólar estadounidense, entre otras reformas. Las consecuencias en el mercado de trabajo no tardaron en llegar: caída del empleo en el sector privado, cierre de empresas públicas, despidos masivos, fueron generando rápidamente un enorme sector de desempleados sin posibilidad de reinserción y con amplias dificultades para resolver la vida cotidiana (Svampa, 2008).

Ante este contexto, la respuesta de los sectores trabajadores se fue expresando de distintas maneras. Por un lado, el sindicalismo tradicional de la Confederación General del Trabajo (CGT), como órgano de representación del universo de trabajadores asalariados formales, mantuvo una actitud colaboracionista con el entonces gobierno de Carlos Menem, haciendo uso de concesiones y negociaciones para las cajas sindicales. Esto provocó rupturas, que llevaron a la creación de una nueva central, con una postura crítica tanto de las medidas de gobierno como de la pasividad de la principal confederación trabajadora. La nueva central llamada Central de Trabajadores Argentinos (CTA), conformada principalmente por trabajadores estatales y docentes, llevó adelante numerosas movilizaciones, desde paros generales a “marchas federales”, y mantuvo una posición solidaria respecto de aquellos trabajadores que, siendo expulsados del trabajo formal, tampoco tenían entonces un espacio de representación gremial (Coraggio y Loritz, 2022).

En paralelo, los trabajadores expulsados de sus empleos empezaron a irrumpir en la escena pública en 1996 con cortes de ruta²⁰ y puebladas en el interior del país, que tuvieron como epicentro a los pueblos petroleros Cutral-Có y Plaza Huincul de la provincia de Neuquén,

²⁰ También denominados “piquetes”.

donde la privatización de la empresa nacional de producción y provisión de petróleo (YPF -Yacimientos Petrolíferos Argentinos-) había provocado despidos masivos. La identidad del desocupado movilizado se fue forjando alrededor del “piquete” como símbolo de lucha, dando lugar a la emergencia del “movimiento piquetero” (Svampa y Pereyra, 2003).

Rápidamente esta forma de canalizar el descontento social se trasladó al Gran Buenos Aires, donde entre 1997 y 2001 se consolidaron los principales frentes del movimiento piquetero del Gran Buenos Aires. A partir de la confluencia de distintas agrupaciones políticas, se consolidaron las organizaciones más importantes: los Movimientos de Trabajadores de Desocupados (MTD), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV). Aquí es que situamos el origen de uno de los casos bajo análisis, el entonces “Comedor Los Pibes” (hoy Movimiento Popular Los Pibes), como expresión de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de La Boca.

Siguiendo a Svampa y Pereyra (2003), recuperado en Coraggio y Loritz (2022: 127) el movimiento piquetero además de tener al piquete como acción directa, se caracteriza por institucionalizar la asamblea como método deliberativo, las puebladas como horizonte insurreccional y el despliegue territorial como experiencia de autogestión. Es en este ámbito que emergen diversidad de experiencias productivas, entre las cuales también se encuentran prácticas agrícolas urbanas.

Otra vertiente del emergente de los años ‘90 es la organización de los llamados “cartoneros”. Se trataba de miles de personas que se desplazaban diariamente desde los distintos conurbos del Gran Buenos Aires en los “trenes blancos”²¹ hacia la Ciudad de Buenos Aires para recuperar alimentos y demás objetos de la basura, y así resolver la más mínima sobrevivencia. Sin dudas, una de las tantas imágenes desoladoras que quedaron grabadas de aquella época, que mostraban la llegada de la extrema pobreza al país. La explosión del

²¹ Trenes específicos que se disponían para el transporte de los cartoneros, fundamentalmente en horario de medianoche, y que eran de color blanco.

fenómeno cartonero se dio a partir del estallido de la crisis del 2001, y las experiencias organizativas se consolidarían luego mediante la acción de distintos grupos de jóvenes militantes. En este proceso se inscribe otro de los casos que analizaremos en esta investigación, la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste.

Cabe recordar el contexto regional e internacional, que daba cuenta del surgimiento de diversos movimientos de resistencia al neoliberalismo y a la globalización (los movimientos “antiglobalización” de Seattle, en el Norte Global, y el levantamiento zapatista en México, desde el Sur, por citar algunos ejemplos). Por su parte en Venezuela, se venía gestando el proceso bolivariano liderado por Hugo Chávez, que meses después irradiará un potente proceso de integración latinoamericana de izquierda nacional-popular. En 2001 todas estas expresiones convergen en el primer Foro Social Mundial.

Ahora bien, todos estos procesos de movilización, no sólo tuvieron como blanco de ataque el modelo económico, sino también, una muy fuerte deslegitimación del sistema político institucional. Habiendo surgido al margen de los partidos políticos tradicionales, la estatalidad era percibida como adversaria de los intereses de las mayorías y los políticos que ejercían sus roles en ella, una clase corrupta apartada de los intereses de la sociedad.

Con el “corralito” a los ahorros bancarios de los sectores medios, terminó de producirse el estallido social en diciembre del año 2001. Al grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, y “piquete y cacerola, la lucha es una sola”²², una gran movilización en Plaza de Mayo que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad, con un saldo de 6 muertos (y un total de 39 a nivel nacional), precipitó la renuncia del entonces Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa.

Le siguió una crisis institucional sin precedentes, que vio pasar cinco presidentes en tan sólo diez días, hasta que el dirigente del Partido Justicialista y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, logró asumir el cargo e intentar llevar adelante un proceso de

²² Los sectores medios y ahorristas adoptaron el “cacerolazo” como medida de protesta en el espacio público.

estabilización. La movilización social evidenció un aumento exponencial los meses siguientes, con fuerte presencia de sectores medios, en gran medida ahorristas, que no habían sido parte del paisaje de movilización social previo al estallido.

Durante la gestión de Duhalde, se implementan por primera vez de manera masiva subsidios directos a los desocupados, bajo un programa que se llamó en ese entonces “Plan Jefes y Jefas de Hogar”. La movilización de los trabajadores desocupados empezó a organizarse entonces en torno a la demanda de “planes sociales”, quedando la aspiración del retorno al trabajo formal en un segundo plano. En ese contexto, se produce la “masacre de Avellaneda” en la que la policía bonaerense asesina a dos jóvenes militantes que participaban de un piquete en el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de planes sociales. La conmoción social que causó este hecho, constituyó un punto de inflexión. Por un lado, significó un golpe muy duro al movimiento popular, y por otro, precipitó el llamado a elecciones, en las que asumiría Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.

En síntesis, estos años de fuertes movilizaciones de los trabajadores desde distintas expresiones contra el orden social impuesto, entrelazadas con una subjetividad y horizontes anticapitalistas, lograron destituir el llamado por Gago (2014) “neoliberalismo desde arriba”, precipitando un cambio de ciclo histórico. Este suceso, también denominado popularmente como “Argentinazo” y que tuvo al movimiento de los trabajadores desocupados a la vanguardia, constituye un hito fundacional de las economías populares presentes, que a lo largo de la historia y desde distintas miradas, ha intentado reescribirse.

3.1.1. Economías y prácticas agrícolas urbanas en contexto I

Tal como describen Svampa y Pereyra (2003), durante este período de auge del movimiento piquetero, así como la ruta se constituía en el espacio de despliegue de las acciones de protesta, el barrio se consolidaba como instancia comunitaria y territorial para contener la cotidianeidad y recuperar el tejido social fragmentado. El “trabajo territorial” contenía una cantidad de acciones que empezaron a ensayarse en torno al desarrollo de emprendimientos

productivos asociativos, redes de intercambio y consumo, autoconstrucción de la vivienda familiar y comunitaria, bachilleratos populares, entre otras experiencias. Es en esta etapa que cobran visibilidad los debates acerca de la construcción de “otra economía” y de la “economía social”, tal como desarrollamos en el apartado teórico.

Especialmente nos interesa recuperar los antecedentes del despliegue de prácticas agrícolas que se desarrollaron en este contexto para el Área Metropolitana de Buenos Aires, generalmente identificadas como “huertas comunitarias”, para comparar con las experiencias actuales analizadas en el presente estudio.

Si bien no existen trabajos académicos que recuperen la dimensión de la producción agrícola urbana como parte de la territorialidad desplegada por el movimiento piquetero, según distintas fuentes consultadas, existieron antecedentes fundamentalmente en el segundo cordón del conurbano del Gran Buenos Aires. Se trataba más bien de “una acción más” dentro de las múltiples estrategias de sobrevivencia desarrolladas por las organizaciones populares de entonces, con relativa continuidad y centrada sobre todo en revitalizar los lazos comunitarios y generar espacios de encuentro y participación.

Después de la entrada a la democracia ya empieza a haber antecedentes.

Varias organizaciones del ámbito popular, habían empezado a laburar estos temas. Me acuerdo de la Mesa de Tierras de los Movimientos Villeros de Morón. Yo empecé a laburar ahí en el año '88, que hacían huerta en los asentamientos. Años después la FTV [Federación Tierra y Vivienda] empieza a laburar en La Matanza, después la CCC [Corriente Clasista y Combativa]. La huerta era parte de sus estrategias, dentro de todo el conjunto de estrategia de sobrevivencia, de vida y demás, la huerta es parte. Y otros emprendimientos vinculados al tema agropecuario: cría de gallinas, elaboración de conservas. Sobre todo hablo de La Matanza, que es donde laburaba yo por esos años. Es cierto que hay muy poco escrito (entrevista a un técnico extensionista del Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria, con 30 años de trayectoria de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires).

En ese sentido creemos que no había por aquellos años -en los movimientos populares urbanos- una priorización del problema de la soberanía alimentaria como agenda de lucha. Recién por esos años empezaba a instaurarse el monocultivo de soja, la siembra directa y el paquete tecnológico transgénico, que impulsaba donaciones de soja para abastecer a los comedores como estrategia de legitimación. La cuestión alimentaria para estos sectores se circunscribía a la demanda de acceso a los alimentos. Tampoco la problemática ambiental formaba parte de la agenda de los movimientos piqueteros.

Por el contrario, las apuestas más fuertes de los movimientos de desocupados en el conurbano bonaerense se enfocaron en los emprendimientos productivos vinculados a la infraestructura comunitaria, como las bloqueras, emprendimientos de autoconstrucción, herrerías y carpinterías, y los vinculados al comercio local, como los emprendimientos textiles, panaderías y almacenes populares. La búsqueda se centraba en recuperar “la cultura del trabajo” de la fábrica y recomponer la subjetividad laboral fundamentalmente en los varones, cuyo rol en la sociedad atravesaba por una fuerte crisis. En ese contexto, las huertas no llegaban a visualizarse como “emprendimiento productivo”, por lo que no eran específicamente priorizadas.

Nuestra cercanía a la lucha por la tierra tenía que ver con que los compañeros no perdieran el techo en la ciudad, pero sí articulábamos, muy remotamente, con algunas experiencias en el conurbano. Nosotros empezábamos a ser la expresión de los piquetes en la ciudad de Buenos Aires. No teníamos las redes que hay hoy, el acceso a esa información siempre costaba más, pero algunas experiencias [de huerta] ya había en la zona de Villa Corina, lo que era en ese momento el Movimiento Resistir y Vencer que después fueron Movimiento Evita. Algunas cosas nos llegaban de lo que hoy es el [Frente Popular Darío]

Santillan, que en aquellos años era la Anibal Verón, con algunas huertas comunitarias, pero de hiper subsistencia estamos hablando... Nosotros nos poníamos a desarmar pallets, porque era lo que se conseguía en La Boca, y ellos se ponían en los terrenos del conurbano a tratar de tirar alguna semilla (entrevista a referente histórico del Movimiento Popular Los Pibes, entre 40 y 50 años, actualmente cumpliendo funciones de coordinación política y territorial).

En cierto sentido, la vinculación con la problemática de la soberanía alimentaria y la agroecología era una agenda que todavía se circunscribía a los productores rurales. En los movimientos urbanos aparecía vinculada a las acciones de solidaridad con los movimientos campesinos, que cobraron mayor visibilidad hacia el final de este ciclo. Van a pasar algunos años más para que sujetos campesinos y urbanos confluyeran en una misma identidad como trabajadores -de la economía popular-, unificando también la concepción de las luchas.

En paralelo, las experiencias que se fueron organizando en torno a las prácticas agrícolas en las ciudades y ámbitos urbanos, fueron dando forma a un sector mayormente identificado con la “agricultura urbana”. Éste se entreteje entre mundos de sectores populares y sectores medios, que encuentran en la huerta un dispositivo para vehiculizar una diversidad de aspectos que van desde el acceso a los alimentos sanos, el activismo ambiental y la disputa en torno a los espacios urbanos (Gallardo Araya, 2016).

En ese sentido, cabe señalar la referencia de un conjunto de iniciativas que a partir de su vinculación con universidades públicas, municipios y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, adquirieron relevancia pública. Muchas veces quienes participaron de estas experiencias eran los mismos sectores populares que formaban parte de los movimientos de desocupados y piqueteros de entonces, aunque generalmente lo hacían en carácter individual como “huerteros” y no desde una articulación institucional con las organizaciones. En el Área Metropolitana de Buenos Aires se destaca el caso del municipio de Moreno, con la creación del Programa de Agricultura Urbana, y fuera de ese ámbito, son significativos el Programa de

Agricultura Urbana de Rosario y el Programa de Autoproducción de Alimentos de Mar del Plata.

En relación a éstos últimos, cabe señalar que surgidos en los peores momentos de crisis (2001-2002), estuvieron inspirados en la experiencia de agricultura agroecológica desarrollada en Cuba, en el contexto de la crisis económica que trajo para ese país la caída de la Unión Soviética. El objetivo en estos casos era mejorar el acceso a los alimentos de las personas en situación de vulnerabilidad social. Incluso se avanzó en el acceso a suelo urbano ocioso con fines de cultivo (sobre todo en Rosario). El primero se desarrolló con el protagonismo de la gestión municipal local y el segundo con la del INTA y la universidad pública, articulados en ambos casos con el Programa ProHuerta, que llevaba varios años de existencia como uno de los primeros experimentos de políticas focalizadas para paliar la crisis ocasionada por las reformas estatales neoliberales.

En síntesis, más allá de las múltiples experiencias de agricultura urbana que se desarrollaron durante este período, si tomamos el recorte en las organizaciones que constituyeron los movimientos de trabajadores desocupados como expresión de la movilización social en torno al trabajo, no hubo una política específica de desarrollo de huertas. Podríamos decir, parafraseando a Coraggio (2004), que las experiencias de producción agrícola en la urbanidad, era para los movimientos sociales un dispositivo más ante la “emergencia”, que una “estrategia” propia de construcción política.

3.2. Ciclo de reconfiguración nacional-popular del Estado: de desocupados a trabajadores de la economía popular (2003-2015)

Durante este ciclo, el proceso de estabilización de la conflictividad social, fue configurando un nuevo mapa de las economías populares urbanas. Proveniente del mismo espectro de la política institucional fuertemente deslegitimada, Néstor Kirchner demostró rápidamente signos de ruptura con la tradición neoliberal anterior, y se constituyó como uno de los artífices de la conformación de gobiernos que se denominaron “progresistas” en la región

latinoamericana. Una serie de definiciones²³ generaron la simpatía de un gran espectro de los movimientos sociales, mientras que otros sostuvieron posiciones críticas²⁴.

La propuesta de gobierno del kirchnerismo, si bien con modificaciones a lo largo de sus tres mandatos, se caracterizó por la recuperación de la intervención estatal en el desarrollo de la economía desde una perspectiva de desarrollo nacional, con un discurso fuerte de regeneración del trabajo y una activa política de transferencia de ingresos a los sectores trabajadores y pobres.

Pero si bien se intentó evocar al primer peronismo, el mundo había cambiado: la industria nacional se encontraba desmantelada y el Estado había sido desguazado en sus principales capacidades regulatorias, por tanto el “desarrollo” posible se terminó sustentando sobre la exportación de materias primas y el financiamiento del consumo, sin posibilidad de transformar matrices estructurales. En ese marco, se terminó fomentando lo que diversos autores señalan como el “consenso de las commodities” y el extractivismo neodesarrollista (Svampa, 2016)²⁵.

Dentro de esas limitaciones, se dio lugar a un conjunto de transformaciones que significaron un cambio de época. El restablecimiento de las instituciones de regulación laboral (paritarias y convenios colectivos) y la reincorporación de puestos de trabajo en el Estado, le dieron un lugar importante al sindicalismo como actor privilegiado del mundo del trabajo, que acompañó homogéneamente los primeros años de gobierno, para luego presentar rupturas internas.²⁶

En cuanto al sector de los desocupados, las herramientas de política pública promovidas por el gobierno se ampliaron, pero se circunscribieron a medidas de tipo asistencial, con la

²³ Nos referimos a la reivindicación de los derechos humanos vulnerados durante la última dictadura militar, la renovación de la Corte Suprema, el rechazo al área de libre comercio de las Américas (ALCA) impulsado por Estados Unidos, el acercamiento al gobierno de Venezuela y Cuba, y los emergentes “progresismos” de la región, entre otros aspectos.

²⁴ Esto dio lugar a un fuerte debate entre las organizaciones populares -con gran resonancia en intelectuales y ámbitos universitarios-, acerca de cuál debía ser el posicionamiento en relación al Estado: los “autonomistas” y los otros, cuya identidad no tenía una simbología concreta aún, pero que se identificaba con la línea del gobierno.

²⁵ Hasta qué punto fue la estrategia elegida, y hasta dónde fue “lo posible” de hacer, es materia de debate.

²⁶ En el caso de los gremios estatales, en 2010 la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), se divide en la CTA de los Argentinos, afín a las políticas del gobierno, y la CTA Autónoma, con posición crítica.

expectativa (genuina o no), de que el pleno empleo no tardaría en llegar, pudiendo absorber finalmente a la masa de trabajadores informales y desocupados.

Luego de una primera etapa de mayor participación de diversos dirigentes en algunas áreas específicas de gestión (fundamentalmente vinculadas al hábitat, al fortalecimiento organizativo, la formación y alfabetización, y al desarrollo de emprendimientos productivos), el interlocutor principal de los movimientos piqueteros siguió siendo el Ministerio de Desarrollo Social. Se promovieron una diversidad de programas que fomentaban la “economía social” desde una mirada microeconómica y enfocada en el desarrollo de emprendimientos²⁷.

Si bien hubo una recuperación del empleo²⁸, que implicó una fase de reconfiguración de las bases de los movimientos debido a su reinserción laboral, no logró alcanzar los niveles de décadas anteriores y absorber al conjunto de los desocupados. En esa reconfiguración de los movimientos, se crea en el 2006 el Movimiento Evita, con la expectativa de reorganizar el frente de masas e introducir las demandas en el Estado, a partir de la apertura de la institucionalidad estatal que permitía esta etapa (Longa, 2019)

En ese contexto y ya en el mandato de Cristina Fernandez de Kirchner, se define en el 2009 apostar a la reconfiguración de los planes sociales creando el Programa Argentina Trabaja²⁹, como respuesta para aquellos sectores que el mercado de trabajo no lograba absorber. Se promueve el armado de “cooperativas” subsidiadas, con contraprestación laboral, que incluía principalmente el desarrollo de mejoras barriales, en lugar de estrategias de desarrollo socio-productivo para el sector (Hopp, 2016). Al mismo tiempo, se profundizan medidas de transferencia universales, como la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de jubilaciones y pensiones.

En síntesis, los modos de intervenir sobre la cuestión social y sobre la problemática de la

²⁷ El más importante fue el llamado Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”.

²⁸ Se estima entre 3,5 y 5 millones de puestos de trabajo declarados en el sistema de seguridad social (incluyendo los planes sociales).

²⁹ La denominación completa del programa es Programa de Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja (PRIST-AT)

desmantelación del mundo asalariado, si bien sostenemos que constituyeron indudables mejoras y acceso a ciertos derechos de las mayorías vulneradas, contribuyeron, tal como nos señalaban Gago y Mezzadra, en la consolidación de “modos precarios de inclusión social” (Gago, 2015; Gago y Mezzadra, 2015).

Precarios, porque por un lado se focalizaron en transferencias de recursos monetarios para financiar el consumo directo, sin modificaciones estructurales. Esto fortaleció un círculo vicioso entre el extractivismo de materias primas, el consumo de bienes no durables provistos por una industria y un mercado concentrados, y el extractivismo financiero (o extractivismo ampliado) como nuevo mecanismo de extracción de valor de las masas de trabajadores, ahora bancarizadas.

Por otro lado, tales mecanismos de inclusión, no estuvieron orientados a engordar los procesos organizativos, comunitarios y territoriales que habían sostenido la crisis, colaborando en reemplazar una subjetividad plebeya y colectiva, por otra subjetividad individual y enfocada en el consumo.

Tal como señalan Coraggio y Loritz (2022), tomado de Rodríguez (2020), el sujeto trabajador que evocaba el kirchnerismo, seguía siendo el obrero fabril del primer peronismo, aún cuando ese sujeto ya no expresaba la síntesis de la clase trabajadora argentina. Por el contrario, los excluidos, precarizados y trabajadores informales, que representaban su verdadera base social y quienes habían empujado al cambio de época en 2001, no fueron construidos como aliados. Las disputas con los movimientos en torno a la definición y gestión de la asistencia social resultó significativa en este aspecto, ya que contraponía en el imaginario la construcción territorial comunitaria como oposición al acceso individual de un derecho.

Ahora bien, pasada la mitad del ciclo aquí analizado, las resistencias del trabajo se vuelven a reconfigurar. La confirmación de que el pleno empleo no volvería a ser una realidad en la Argentina, llevó a distintos movimientos de trabajadores informales y excluidos a construir alianzas y apostar a la construcción de un mecanismo de representación más potente de este

sector.

En el 2011 se crea la ya citada Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), a partir de la confluencia de distintos movimientos sociales que provenían de las luchas piqueteras de los años ‘90, movimientos campesinos y trabajadores rurales, empresas recuperadas, nuevos movimientos de trabajadores migrantes, vendedores ambulantes, cartoneros, una diversidad de trabajadores denominados “excluidos”, y distintos movimientos territoriales³⁰.

Ubicándose por encima de los posicionamientos respecto del kirchnerismo y con el guiño del Vaticano del Papa Francisco, el objetivo fue construir un gremio que pudiese representar los intereses de estos trabajadores de nuevo tipo, identificados ya no como “desocupados”, sino como trabajadores sin patrón, quienes se habían tenido que “inventar un trabajo” para subsistir al margen del mercado de trabajo formal, en diversidad de tareas precarias y sin derechos. Definieron a esta nueva realidad de los trabajadores como “economía popular”, interpelando al Estado como interlocutor para resolver el acceso a estos derechos (Muñoz y Villa, 2019; Fernandez Alvarez, 2022, Maldovan Bonelli 2018).

Sin dudas, constituyó un acontecimiento muy relevante en esta genealogía política de las economías populares que intentamos sintetizar, ya que permitió reagrupar fuerzas, y recuperar iniciativa política. Frente a los “modos precarios de inclusión” que nos señalaba Gago (2015) que apelaban a un imaginario “ciudadano” -que si bien traía la idea de recuperación de derechos, al mismo tiempo los reducía al consumo de bienes-, la construcción de la CTEP devuelve a estos sectores su identidad como trabajadores, y conecta las luchas del presente con las pasadas, replanteando modos de organización y despliegue popular-comunitario de los sectores trabajadores en esta nueva etapa.

Ahora bien, y volviendo al mapa de movilización en torno al trabajo, la emergencia de la

³⁰ Las organizaciones que formaron parte de la CTEP en un primer momento fueron el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, La Alameda, entre otras.

CTEP, si bien su relevancia es indudable, no representa el mapa completo de la economía popular, ya que otros sectores se mantuvieron al margen de este armado, como sectores del cooperativismo, empresas recuperadas, organizaciones y emprendimientos identificados con la “economía social y solidaria”, así como el sindicalismo de la CTA de los Argentinos.

El cierre de este ciclo estuvo marcado por una reconfiguración del orden mundial alrededor del poder financiero global y la emergencia de nuevas derechas en distintas partes del planeta. La crisis económica que empezó a repercutir en las condiciones de vida del conjunto de la población, así como la pérdida de legitimidad y entusiasmo de un gobierno que ya llevaba tres mandatos, y la imposibilidad de reelección de su principal líder, Cristina Fernandez de Kirchner. En 2015 se generaron las condiciones para el ascenso de una nueva derecha reorganizada bajo una alianza de partidos (Cambiamos) que llevó al empresario Mauricio Macri al poder, marcando un nuevo ciclo histórico.

3.2.1. Economías y prácticas agrícolas urbanas en contexto II

Las experiencias y prácticas económicas desarrolladas durante este período por el universo que encarnó la organización de los trabajadores desocupados, fueron atravesando distintos momentos. Durante los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner, hubo un importante despliegue de experiencias que se volcaron en trabajar fuertemente la problemática de la vivienda y el hábitat³¹, así como también se desarrollaron importantes acciones vinculadas al trabajo de formación y educación (fortalecimiento organizativo, alfabetización, terminalidad educativa y formación política). Otro rubro importante de estrategias de estos primeros años, apuntaron al fortalecimiento de aquellas incipientes experiencias productivas mercantiles -con mayor o menor tinte autogestionario- iniciadas en la etapa anterior. Estas empezaron a estar acompañadas con financiamiento del Estado, sin dudas algo contrastante con la dinámica estatal del período anterior. No obstante, no existió una planificación específica en cuanto al desarrollo

³¹ Para dimensionar lo significativo del desarrollo de proyectos de hábitat de la época, vale la pena detenerse en las experiencias de la organización Tupac Amaru desde la CTA de Jujuy, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos - MOI también de la CTA, el proyecto Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo, entre otros muchos otros.

de entramados de producción, distribución y consumo, sino que se acotaron a una mirada microeconómica de la unidad productiva, dejando a los emprendimientos librados a la lógica del mismo mercado que los había excluído (Coraggio y Loritz, 2022).

En relación a la producción de alimentos en la urbanidad dentro de este universo, se mantuvo una priorización similar a la realizada durante el período anterior. Existieron algunos movimientos que desarrollaron experiencias de producción de alimentos durante estos primeros años, que también contaron con diversos apoyos de programas y políticas estatales. Un antecedente significativo de ello es la experiencia de un programa impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en los primeros años de los 2000, que apoyaba la creación de almacenes populares a partir de una oferta de alimentos diversos, a bajo costo y provenientes de emprendimientos populares. En ese contexto, hubo movimientos que desarrollaron experiencias de producción agrícola urbana para abastecer a esos almacenes, por ejemplo, en el municipio de La Matanza.

“En la Matanza hubo algo interesante, un acuerdo entre la FTV y el INTI, yo no recuerdo si le llamaban almacenes populares, fue interesante porque fueron almacenes en los barrios, que vendían a precios populares alimentos y otras cosas, y la idea era producir parte de esos alimentos en los barrios. Se laburaba con huerta, con gallinas, con panificados y demás. Y se articulaba con nosotros, con el INTA. Fue una linda experiencia” (entrevista a un técnico extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con 30 años de trayectoria de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires).

Ahora bien, se trató de experiencias puntuales y no de una línea de trabajo generalizada, como sí lo constituía el hábitat y el desarrollo de microemprendimientos mercantiles.

En relación al universo de experiencias identificadas con la agricultura urbana, se presentaron dos situaciones. Por un lado, la actividad de huertas urbanas (familiares y comunitarias) acompañadas por el Programa ProHuerta, habían presentado una disminución en

relación al período más crudo de la crisis, que se explicaba por el retorno de la actividad laboral que había modificado la disponibilidad de tiempo de huerteros y huerteras³². Por otro lado, durante los primeros años del ciclo kirchnerista, se produjo un crecimiento y visibilidad de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, que empezaba a constituirse como sector específico, y que presionaron para la creación de áreas de intervención dentro del Estado (Craviotti, 2014; Mosse, 2017). Allí se nuclearon también un conjunto de experiencias de agricultura urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires, que como señalamos, habían emergido desde los barrios en torno a la creación de huertas comunitarias y sociales y que habían logrado promover procesos de organización colectiva. El crecimiento que asumen durante este período estuvo asociado a la vinculación con programas y políticas públicas (fundamentalmente el mencionado Programa Prohuerta, el INTA y las áreas del Ministerio de Agricultura de entonces, que abordaban la problemática de la agricultura familiar y campesina). Fue un período con mayor oferta de financiamiento estatal para el desarrollo de proyectos.

En síntesis, el despliegue de experiencias productivas durante los primeros años, se fue reconfigurando al ritmo del repliegue y recomposición de los propios movimientos de trabajadores desocupados, que de a poco fueron abandonando su identidad en torno al “no trabajo”. En el 2009 y con la creación del Programa Argentina Trabaja, si bien en lo discursivo significó un reconocimiento acerca de la persistencia de un enorme conjunto de trabajadores que el mercado de trabajo no lograba absorber, acompañado de una propuesta para la generación de trabajo desde el Estado, también es cierto que no contemplaba instrumentos específicos para el desarrollo productivo de este sector. Por lo tanto, la transformación del “plan social” en “trabajo” resultaba deficiente. El diseño del programa implicaba la definición centralizada de los planes de trabajo, que como decíamos, se reducían a los sumo a actividades de mejora de limpieza en los barrios (Hopp, 2016), y se propugnaba que las “unidades ejecutoras” desde

³² Para ver la evolución de huertas acompañadas por el Programa ProHuerta, ver Gallardo Araya (2016). Nótese que según los registros, las huertas comunitarias tuvieron su pico histórico de crecimiento interanual durante el año 2002, para luego decrecer, mientras que las huertas familiares, dicho pico se inició previamente en el año 1999, para luego estabilizarse y finalmente decrecer a mediados de década.

donde se coordinaban las cooperativas de trabajo, mayormente estén bajo el control del Estado, o bien nacional o local, generando fuertes tensiones con los movimientos sociales (Longa, 2019). Más allá de procesos interesantes de formación (en alianza con universidades públicas, y con enfoques en la economía social y solidaria, el cooperativismo, la soberanía alimentaria, entre otras perspectivas), resultan pocas las experiencias que lograron concretar procesos de trabajo y producción real en los territorios a partir de este Programa.

Mientras tanto, los procesos de organización de los trabajadores que habían quedado al margen del trabajo formal continúan avanzando en instancias de reivindicación. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nace al calor de la organización del sector cartonero de la Ciudad de Buenos Aires, demuestra otra vía para la mejora de las condiciones de estos trabajadores, que no implicaba *per sé* la puesta en marcha de “nuevas” actividades productivas y de trabajo (como representaban los microemprendimientos asociativos mercantiles), sino que partía de las propias actividades “inventadas” por los excluidos como estrategia de supervivencia ante la crisis, para iniciar un camino de organización, dignificación y conquista de derechos.

Así es como con la creación de la ya mencionada CTEP en 2011, se empiezan a visibilizar una diversidad de actividades productivas de los sectores populares, en ámbitos urbanos y rurales, que existían al margen de la formalidad, y que sin embargo presentaban niveles importantes de generación de trabajo, de circulación de dinero, una dimensión importantísima en cuanto a cantidad de personas, y que cumplía un rol fundamental en la reproducción de la vida de millones de argentinos. Bajo la consigna “tierra, techo y trabajo”, vendedores ambulantes, cartoneros, costureros de talleres textiles, productores rurales, ladrilleros, trabajadores de comedores, etc. empiezan a formar parte de un mismo sector de “economía popular”, pugnando por mayor protagonismo en el diseño de políticas públicas orientadas a su desarrollo.

En síntesis, es durante este contexto, que la confluencia de organizaciones urbanas y

rurales en un mismo frente reivindicativo, empieza a vehicular también un intercambio de miradas, problemáticas y agendas de lucha. Hacia el final de este ciclo, ahora sí, la soberanía alimentaria y la agroecología empiezan a incorporarse como tema estratégico en las organizaciones sociales de trayectoria urbana. Un elemento significativo fue la irrupción de los trabajadores migrantes de los cinturones hortícolas periurbanos en la escena pública, que empiezan a desplegar mayor visibilidad a partir de este momento. Estos sectores, responsables de abastecer de verduras frescas a las grandes ciudades, habían permanecido invisibilizados en etapas anteriores. Los reclamos frente a sus precarias condiciones de producción, derivaron en un importante movimiento reivindicatorio, que tendrá gran protagonismo en los primeros años del siguiente ciclo.

3.3. Ciclo del modelo de ajuste fiscal con endeudamiento externo (2015-2023)

Como primer aclaración, este período tiene la complejidad de comprender dos mandatos de gobierno de signo político opuesto: por un lado, la alianza de partidos (Cambiamos) que algunos llaman de “centro derecha” o “neoliberalismo tardío” o “nueva derecha populista” (Muñoz y Villar, 2017), que llevó al empresario Mauricio Macri a la presidencia de la nación entre 2015 y 2019. Por otro lado, incluye al frente de alianzas del peronismo (Frente de Todos), de tinte “progresista”, que permitió a Alberto Fernández llegar a la presidencia en 2019 y cuyo mandato sigue hasta el presente. A riesgo de caer en simplificaciones, incluimos ambos gobiernos dentro de un mismo período histórico, fundamentalmente por las continuidades que se presentaron en las matrices que moldearon las principales variables de la economía. O dicho de otra manera, tales continuidades se expresan en las dificultades presentadas en la administración del Frente de Todos para revertir las reformas estructurales que el gobierno anterior había implementado en la economía. A saber, una política regresiva en términos del lugar que ocupa el salario en la distribución del ingreso (la pérdida de su poder adquisitivo), y el endeudamiento externo asumido por Mauricio Macri ante el Fondo Monetario Internacional, como dos aspectos centrales, cuyos condicionamientos políticos y económicos, especialmente se expresaron en la

gestión de Fernandez.

En ese sentido, encontramos que la línea histórica de las economías populares analizadas aquí y sus trayectorias de organización, no varían de manera sustancial durante este período, sino más bien, presentan un proceso de crecimiento relativamente constante y en un mismo sentido.

Empezando por la primer etapa, el gobierno de Macri significó el desarme de la impronta nacional popular de los años anteriores y una suerte de re-instauración (o restauración) del proyecto neoliberal: política de ajuste, despidos y achicamiento del Estado, liberalización de la economía, caída de la industria y el empleo, persecución y represión de trabajadores y movimientos sociales y endeudamiento externo. Éste había sido un rasgo importante de las políticas neoliberales de los años '90, que se había discontinuado durante los gobiernos kirchneristas mediante políticas de desendeudamiento externo. En esta ocasión, el Fondo Monetario Internacional define desembolsar un préstamo de casi 57.000 millones de dólares, el más grande otorgado por la propia entidad en toda su historia, que en lugar de utilizarse en inversión productiva, se orientó a la acumulación financiera y fuga de capitales (Zanotti, et al 2019), sumado a la aceptación de todo tipo de condicionantes y supervisión del organismo en la política económica local. Este programa de gobierno se desarrolla sin dudas en sintonía con la nueva geopolítica del capital desplegada desde 2008, que venimos describiendo en distintos pasajes de este trabajo, que coloca al sector financiero en el comando de los movimientos de capital globales. En ese contexto, se profundiza aún más la reprimarización de la economía que tenía en los diversos extractivismos de recursos naturales, materias primas y la deuda, una fuente importante de recursos.

Ahora bien, recuperando el mapa de la movilización social en torno al trabajo, la creación de la ya mencionada CTEP, cuya personería social había sido aprobada el último día de gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, termina de consolidarse en esta etapa, cobrando un dinamismo disruptivo en el ordenamiento del conflicto social. La reconfiguración de la

subjetividad de los trabajadores precarizados y excluidos en torno a la identidad como “trabajadores de la economía popular”, sumado a un gobierno totalmente opuesto en términos políticos, les permite ingresar en una nueva fase de resistencias.

Ya en los primeros meses del gobierno de Macri, se produce la confluencia de la CTEP con otros movimientos sociales de origen similar y gran masividad territorial, que representan al mismo sector excluido³³. Mediante el despliegue de masivas movilizaciones que podían congregarse a 200.000 personas con relativa facilidad, estos sectores encontraron la oportunidad de imponer demandas históricas referidas al reconocimiento del sector, así como también, recursos específicos para contener la situación social ante las consecuencias que el programa de ajuste generó en los sectores populares (Fernandez Alvarez, 2022). Así fue como se logró la sanción por unanimidad de la Ley de Emergencia Social en 2016, que reconoce a los trabajadores de la Economía Popular como tal mediante la creación de un registro y asigna una transferencia de ingreso para estos trabajadores, denominada “salario social complementario”. A diferencia del otrora “plan social”, este subsidio se concebía como complemento de ingresos para un universo de beneficiarios que se consideraban trabajadores, pero que por sus precarias condiciones y falta de derechos, el excedente que generaban sus actividades laborales, no eran suficientes para el desarrollo de una vida digna. También se logra la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, financiando a comedores y merenderos, que se multiplicaron rápidamente frente a la crisis, y en 2018, la Ley de Integración Socio Urbana, que habilita el registro de los “barrios populares” para su regularización e inversión en mejoras³⁴.

Otro aspecto que resulta importante destacar de este período, tiene que ver con los enfoques y doctrinas que se fueron desplegando en torno a las políticas de seguridad. Apelando a un discurso punitivista, se impulsa una propaganda de “mano dura” frente al delito, al tiempo

³³ Nos referimos a la confluencia de la CTEP con el Movimiento Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (conocida como el “triumvirato cayetano”, en alusión a las marchas realizadas desde la parroquia San Cayetano, el santo “patrono” del trabajo) y el Frente Popular Darío Santillán.

³⁴ La lectura de estos hechos, ya sea como conquista de la lucha, o como concesión de gobernabilidad al macrismo, forman parte de los sentidos que están en disputa sobre las economías populares.

que se busca reposicionar la imagen de las fuerzas de seguridad en el conjunto de la sociedad, abriendo el camino a miradas negacionistas, entre otras, respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Como parte de estos movimientos, se introduce lo que se denomina en la jerga doctrinaria militar el “factor del enemigo interno” como principal problema de la defensa nacional (Schmitt, 2019; Tokatlian, 2018). Esta interpretación, impulsada por los Estados Unidos y su nueva geopolítica continental (“Paradigma de las Nuevas Amenazas”), implicaba un realineamiento en función de los intereses norteamericanos y significaba la incorporación de las variables “terrorismo” y “narcotráfico” como fundamento de todo tipo de delito y/o protesta social. Así es como un conjunto amplio de sectores sociales, desde integrantes de los pueblos originarios, militantes de organizaciones sociales, participantes de protestas sociales y partidos políticos, empiezan a ser considerados “enemigos internos”, sospechosos de atentar contra la seguridad nacional, justificando el despliegue de múltiples y ostentosos operativos represivos.

Así es como se inicia un período de intimidación a militantes, desalojos de espacios comunitarios, persecución a dirigentes sociales y políticos, y represión de la protesta social, combinado al desarrollo de dispositivos de propaganda de agitación para legitimar estas acciones en la población. Esta escalada de violencia impulsada desde las Fuerzas de Seguridad del Estado (CORREPI, 2019) alcanzó niveles dramáticos, sucesos entre los que se destacan los asesinatos de Santiago Maldonado y luego Rafael Nahuel, por la causa mapuche³⁵.

Como veremos más adelante, el escenario que se abre en esta etapa fuertemente represivo sobre el constructo del “enemigo interno” y la *securitización* del Estado, nos acerca a la definición que trabajamos de Alliez y Lazzarato (2022) sobre el paradigma de la *guerra contra las poblaciones*, y que observaremos a través de los casos analizados.

Ahora bien y volviendo a las organizaciones de trabajadores de la economía popular, la

³⁵ Ambos se producen en el marco de operativos de las fuerzas de seguridad para desarticular medidas de protesta por el reclamo de tierras mapuches. En el marco de dudosos procesos judiciales, la Justicia determinó que Maldonado “se ahogó” en el Río Limay, mientras que el caso de Nahuel al día de hoy permanece impune.

respuesta que éstos generaron ante este escenario, se tradujo en la consolidación de los procesos de unidad y el despliegue de acciones de resistencia, que tenían la movilización masiva como principal herramienta de lucha, al tiempo que se produjo una importante inventiva y acumulación de experiencias de articulación territorial.

Concretamente desde la CTEP, movimientos afines y trabajadores de distintas ramas, distritos y provincias se encontraron en una agenda común de luchas, problematizando sus realidades y construyendo encadenamientos productivos, trascendiendo la escala micro (Muñoz y Villar, 2017). Se armaron comisiones de trabajo desde el sindicato para avanzar en cada una de las problemáticas principales, como por ejemplo la producción y comercialización, a partir de la creación de redes de intercambio de productos, acercando alimentos de la agricultura familiar y campesina, de las empresas recuperadas y cooperativas, a los comedores y ferias de las organizaciones urbanas, mejorando los precios percibidos por ambos extremos.

Desde la CTEP se producen también acercamientos concretos a la CGT, buscando un lugar en la Confederación y articulando en movilizaciones, las cuales presentaron una periodicidad y masividad cada vez mayor.

El punto más alto de la resistencia de aquellos años, se produce en diciembre de 2017, con las movilizaciones a propósito de la reforma del sistema previsional que impulsaba el macrismo, que recordaron a aquella revuelta de 2001, y que terminó con una fuerte represión, cantidad de personas heridas y detenidas. El significado de estas jornadas de lucha fue y sigue siendo objeto de debate en torno a las situaciones de violencia que se vivieron (¿fue un grupo de infiltrados violentos o fue el pueblo organizado dispuesto a frenar el ajuste, a como dé lugar?). Lo cierto es que para los movimientos significó un punto de inflexión en el gobierno de Macri, que a partir de ese desborde, vio disgregar su poder y legitimidad, hasta su derrota electoral en 2019.

La unidad de lucha lograda a partir de la confluencia en el nuevo sector de “los trabajadores de la economía popular”, permitieron una negociación conjunta de cara al siguiente

gobierno peronista, que en una nueva alianza amplia, con Alberto Fernandez como cabeza de fórmula y Cristina Fernandez de Kirchner como vicepresidenta, asumió el gobierno en diciembre de 2019. A días de la asunción, se formaliza la creación de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), como fusión de la anterior CTEP, con otros movimientos sociales, como la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, lo que constituye un paso más en su crecimiento e institucionalización (Página 12, 22/12/19).

Muchos de los movimientos de la UTEP acceden a cargos en el Estado, en línea con el propósito de institucionalizar al sector de la economía popular, mediante la creación de políticas públicas. La creación del programa Potenciar Trabajo³⁶, como nuevo dispositivo de plan social orientado a la organización del trabajo, genera nuevas posibilidades para el despliegue de estas economías. Durante la pandemia provocada por el COVID19 estas funciones ligadas al fortalecimiento del cuidado, y los “servicios socio-comunitarios”, cobraron mayor visibilidad en la sociedad, debido al rol de primera línea que ocuparon en acompañamiento de los más vulnerados y que estos programas permitieron fortalecer. Ante una retracción de la territorialidad estatal que promulgaba el aislamiento y al mismo tiempo dejaba a la vista las fracturas sociales como nunca antes, el rol que cumplió el tejido organizativo y comunitario desplegado por las movimientos de la economía popular, permitió legitimar sus acciones y silenciar -al menos por un tiempo- los discursos estigmatizantes respecto de ellas, representando un momento de acumulación de legitimidad para el conjunto de organizaciones de la economía popular (Ferrari Mango, 2019).

El gobierno del Frente de Todos, debido a los diversos problemas externos e internos, no profundizó en cambios estructurales que modifiquen la relación de fuerzas en favor de las mayorías y la redistribución del ingreso. Por el contrario, los niveles de pobreza aumentaron. El posicionamiento de las organizaciones de la economía popular en este contexto, insertas en el

³⁶ El Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Estado, respondió a fortalecer lo más posible los procesos organizativos, avizorando los escenarios adversos por venir.

3.3.1. Economías y prácticas agrícolas urbanas en contexto III

Los procesos de unidad generados en lo político gremial durante este período, tuvieron su correlato en las prácticas de trabajo y el desarrollo de circuitos productivos del sector de trabajadores.

Durante los años de macrismo, las distintas “ramas de producción” que ahora compartían un mismo espacio de representación en la CTEP, empezaron a debatir propuestas productivas y a intercambiar experiencias, al mismo tiempo que delinearon las demandas en clave de la dignificación del trabajo en cada caso.

Más allá de las actividades propias de cada “rama”, los entramados productivos que se propiciaron durante esta etapa, estuvieron signadas fuertemente por la crisis alimentaria provocada por el modelo de ajuste económico. Las protestas del nuevo sujeto campesino de los cinturones hortícolas periurbanos, irrumpen con los “verdurazos” en la Plaza de Mayo como acción de protesta, promoviendo el acercamiento de experiencias urbanas en el debate de la soberanía alimentaria y la agroecología, las cuales empezaron a estar en boca de referentes barriales de los sectores populares del Gran Buenos Aires, así como también en el de la opinión pública en general.

Al mismo tiempo, los recursos provenientes del Estado se focalizaron en mayor medida en la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, por lo que se dio una confluencia de circunstancias que favorecieron el despliegue de estrategias de articulación entre organizaciones urbanas y rurales a partir de la cuestión del abastecimiento popular. Desde la mirada de las organizaciones urbanas, la asistencia alimentaria promovida por el Estado empezó a ponerse en cuestión, generando mayor concientización respecto a la calidad de los alimentos que se destinan a la asistencia, la procedencia de los mismos, el tipo de alimentación que esto promueve, y en definitiva, el modelo productivo relacionado a la producción de alimentos que

subyace. Si en las demandas de alimentos de los años '90 y 2000, lo que se negociaban eran cantidades, en estos años se empieza a visibilizar el derecho a una alimentación sana, que priorice el trabajo de los trabajadores de la economía popular (tanto rurales, como de cooperativas y fábricas recuperadas) . Los bolsones de verdura de los horticultores familiares y los productos de las cooperativas empezaron a circular por las organizaciones de base, así como también, diversidad de circuitos de comercialización para que los productos lleguen a los barrios (ferias, almacenes populares, nodos de consumo), no sin dificultades³⁷.

En este contexto, resulta relevante volver a señalar la influencia del Papa Francisco en las ideas y discursos que empiezan a formar parte de las organizaciones nucleadas en la CTEP. En la Carta Encíclica *Laudato Si'*, *Sobre el cuidado de la Casa Común* difundido en 2015, Francisco no sólo advierte acerca de la crisis climática, sino que la relaciona directamente con el sistema económico capitalista y su crítica a los “adoradores del Dios dinero”. Esto contribuye y habilita a un posicionamiento de los sectores populares en una agenda ambiental, que empezaba a instalarse con más fuerza al interior de toda la sociedad, pero que como dijimos, no había formado parte de las demandas y luchas de los sectores desocupados que reclamaban por trabajo en las etapas anteriores. En ese marco, se amplía el espectro de las actividades y proyectos de trabajo que tienen “lo ambiental” como eje, desde un sentido crítico y popular y anclado a su vez en la urbanidad más cruda y profunda. El sector de los cartoneros, devenidos en recicladores urbanos, se involucraron a la agenda ambiental, posicionándose como “promotores ambientales” que recuperan el descarte material de la sociedad que tiene acceso al consumo, reutilizando ese material y mitigando la contaminación. La “economía circular” como discurso se suma a las demandas de dignificación del trabajo de los cartoneros.

Otro emergente fundamental que incide de manera notable en el despliegue de experiencias productivas y de trabajo del universo de experiencias analizado aquí, es la nueva

³⁷ Todos estos mecanismos ya existían en otros ámbitos. Lo que señalamos es que empiezan a desarrollarse con más fuerza en los sectores de la economía popular organizada de los barrios pobres del Área Metropolitana de Buenos Aires.

oleada feminista que irrumpe con las movilizaciones de 2015 contra los femicidios, y que siguieron movilizándose en relación a la legalización del aborto. La visibilización de las desigualdades entre géneros y los consensos patriarcales que históricamente vulneran a las mujeres, se ponen en cuestión transversalmente en la sociedad, repercutiendo también en las dinámicas de organización de los sectores y economías populares. En los emprendimientos productivos y de trabajo, empieza a ponerse en valor el rol innegable que tienen las mujeres en estas economías, tanto desde el sostén de las actividades laborales, así como en relación al cuidado doméstico dentro de sus familias, y también en el cuidado comunitario en los barrios. Así es como se empiezan a valorar las tareas vinculadas a la atención de comedores y merenderos y se inicia un debate en torno a qué se considera “trabajo”, qué se entiende como “proceso productivo”, o bien, cuál es el “trabajo socialmente reconocido”.

Como señalamos anteriormente, en los años ‘90, el “trabajo” a recrear y reconstruir emulaba a un trabajo fabril, manufacturero, que producía bienes y servicios para un mercado; un trabajo masculinizado. El trabajo de cuidados comunitarios existía, pero por ese entonces no tenía entidad como tal. Formaba parte del ámbito de la reproducción. Al mismo tiempo, se produce un cuestionamiento a la masculinidad de las conducciones y dirigencias políticas, dando lugar a la emergencia de nuevas referentes mujeres que empezaron a ocupar lugares de liderazgo. En síntesis, la confluencia entre feminismo y economía popular, cobra visibilidad durante este período y marca sin dudas el espectro de posibilidades para el desarrollo de experiencias (Campana y Rossi Lashayas, 2020).

Luego de lo que implicó la gestión de la alianza Cambiemos finalizada en 2019, el suceso inesperado que significó la pandemia por el virus COVID19 (apenas dos meses después de la asunción de Alberto Fernández) marcará un nuevo elemento relevante en la historización de las economías populares que proponemos aquí.

Las medidas de aislamiento social obligatorio que dispusieron la mayoría de Estados en el mundo para evitar la propagación del virus, constituyó sin dudas un “estado de excepción”.

La multiplicidad de cuestiones sociales que se visibilizaron a partir de allí, han dado un campo inagotable de discusiones sociales y políticas que siguen impactando en la actualidad y que no podremos retomar aquí en profundidad. Sí es preciso mencionar, como señalamos líneas arriba, la visibilidad de la fractura social que se venía produciendo al interior de la sociedad argentina. Así como para algunos el “quedarse en casa” cumpliendo el aislamiento social, significaba adecuarse a las restricciones de circulación desde el confort del hogar, para otros, se tornaba prácticamente imposible, dadas las condiciones de precariedad y hacinamiento de sus viviendas. Y lo que aún era peor, significaba la interrupción abrupta de las actividades laborales de todo un sector de la economía, cuyas relaciones laborales transcurren por fuera de la formalidad salarial (nuestras retratadas “economías populares”). Las medidas de salvataje implementadas por el gobierno con el subsidio IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), demostraron la subvaloración que la burocracia estatal tenía de este sector, ya que se estimaba en alrededor de 3 millones de personas, a lo que finalmente terminaron siendo casi 9 millones de personas que efectivamente cumplían con los requisitos (Página 12, 08/06/20).

En ese contexto, la presencia de las organizaciones de trabajadores de la economía popular, así como todo el conjunto de formas comunitarias y organizativas con presencia territorial, jugaron un papel clave en el transcurso de la pandemia. No sólo en términos de cubrir la presencia estatal en los territorios, cuyas plantas de trabajadores se encontraban mayoritariamente en sus hogares, sino también en la profundización de relaciones comunitarias que demostraban cierta autonomía en su despliegue. El parate de actividades habituales y la evidencia de la necesidad de la interdependencia (o dicho de otra manera, la evidencia de que la unidad doméstica en los barrios, no era la familia sino el barrio mismo, la comunidad misma, la organización), le dio un impulso particular al despliegue de actividades de trabajo en clave comunitaria y colectiva, o retomando lo desarrollado en el capítulo 2 a partir de Gutierrez Aguilar, como entramados “populares comunitarios”.

Todos los elementos señalados aquí como claves de este período (crisis alimentaria,

visibilidad de la cuestión ambiental, la emergencia del feminismo y la pandemia), fueron condimentos que sumados al proceso de resistencia y crecimiento del sector de la economía popular, fueron moldeando nuevas características del despliegue de experiencias de trabajo. La proliferación y fortalecimiento de espacios colectivos desde donde organizar la producción, el trabajo, y en definitiva, la reproducción colectiva de la vida, fueron moldeando nuevos mecanismos institucionales en las políticas sociales, que durante los últimos años contaron con la participación de cuadros políticos de las propias organizaciones. Se empezaron a incluir un conjunto de nuevas actividades, como los “servicios sociocomunitarios” (atención de merenderos y comedores, tareas de cuidado, entre otros), así como también, la puesta en práctica de experiencias de huerta en distintos espacios urbanos durante todos estos años. Mediante diversas estrategias, se multiplicaron y fortalecieron espacios como “polos productivos”, “polos agroecológicos”, “unidades de producción”, “colonias agroecológicas”, que recuperan predios, toman terrenos, o refuncionalizan espacios propios y/o ya recuperados, los cuales son gestionados por los propios emprendimientos y movimientos sociales.

Así es como llegamos a nuestro tema central de investigación: en estos contextos, las prácticas agrícolas empezaron a formar parte de la agenda de las organizaciones de trabajadores de la economía popular de los grandes centros urbanos, ya no como una actividad secundaria, sino ahora sí, como parte de una estrategia mayor de construcción tanto política, como económico-productiva. Nuestra intención es interpretar los sentidos en torno a estas prácticas en las economías populares, y en qué medida nos dan pistas para interpretar los procesos de resistencia involucrados.

3.4. A modo de síntesis

El recorrido retomado en el presente capítulo, supuso el recorte de un conjunto de dimensiones que se fueron entretejiendo en el tiempo, con el objetivo de contextualizar tanto la emergencia y devenir del sujeto que analizamos en esta investigación, así como también, el despliegue de sus trayectorias vinculadas a la “re-articulación” del trabajo como actividad

central en el ordenamiento de la reproducción de la vida. Encontramos que más allá de los detalles relativos a la historización específica que podamos hacer en relación a las organizaciones, sus posicionamientos relativos en cada coyuntura, las diferencias políticas entre organizaciones y dirigentes, etc., es posible trazar una línea evolutiva que las encuentra en el tiempo reciente en un momento particular del desarrollo de sus procesos económicos (en el sentido amplio del término), donde es posible visualizar un despliegue de estrategias de reproducción colectiva de la vida. Las prácticas agrícolas nos permitieron observar esa evolución (que entendemos de manera dialéctica y no lineal), cuestión que profundizaremos en el próximo capítulo.

4. ECONOMÍA, TERRITORIO Y RESISTENCIAS EN ECONOMÍAS POPULARES URBANAS A TRAVÉS DE SUS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LOS AÑOS RECIENTES (2015-2023)

En este capítulo nos introduciremos en el análisis de los casos seleccionados durante el período de referencia (2015-2023).

Como señalamos en el apartado metodológico, estos tres casos son interpretados como parte de un mismo universo, delimitado por aquellas economías populares urbanas que se organizan en ámbitos colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y que comparten un origen en común en los procesos de movilización social que surgieron en los '90 a partir de la crisis del trabajo en Argentina y que derivaron en el estallido social de diciembre de 2001 (“emergente 2001”). Si bien cada caso presenta particularidades entre sí, los tres comparten la característica de haber impulsado en los años recientes proyectos agrícolas en la urbanidad en la cual se insertan, como parte de sus líneas de acción prioritarias.

En ese sentido, no pretendemos realizar una indagación comparativa entre casos, sino más bien poder captar -a partir de lo que cada una nos permita ver- las dinámicas principales del problema general que intentamos abordar: cuál es el rol que cumplen las prácticas agrícolas urbanas en las estrategias de organización y resistencia de las economías populares urbanas en los años recientes, particularmente en relación a los procesos económico-productivos. Partimos de las prácticas agrícolas urbanas como “ventana de observación” de los fenómenos sociales (Gallardo Araya, 2016), para interiorizarnos en los modos en que se resignifican los sentidos sobre el trabajo, los procesos económico-productivos y los horizontes políticos de estos sujetos sociales en el escenario actual.

En el primer apartado describiremos el perfil de cada organización, contemplando la identidad política, cuál es su vinculación con la estatalidad, cuál ha sido el despliegue de prácticas económicas en general y por último, los distintos dispositivos agrícolas urbanos que desarrollaron en los años recientes. Luego desarrollaremos un análisis de las entrevistas,

aportando una interpretación de lo que pueden significar estas instancias para el despliegue de acciones de las economías populares organizadas en esta etapa, dialogando con el marco teórico propuesto en el capítulo 2.

4.1 Presentación de casos

4.1.1. El Movimiento Popular Los Pibes

Esta organización nace en los años ‘90 como “Comedor Los Pibes”³⁸ en el marco de las protestas que se multiplicaron a lo largo y ancho del país frente a la crisis, con foco en el barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires³⁹. Sus principales impulsores fueron parte de la militancia de los años ‘70, y provenían de una experiencia de lucha previa en la toma de las ex Bodegas Giol en el barrio de Palermo de la misma ciudad. Sus actividades en el origen se centraron en promover la participación comunitaria de las familias para resolver sus necesidades más apremiantes, como el acceso a la alimentación, la vivienda, el trabajo, ubicando al Estado como foco de los reclamos. Su identidad política combina elementos de la tradición nacional-popular latinoamericana con ideas de izquierda, que por aquellos años encontró en el proceso bolivariano de Venezuela y la propuesta del “socialismo del siglo XXI” una fuente de identificación.

No es una organización de gran masividad. Prioriza construir experiencias de organización popular que sean viables y replicables dentro del movimiento popular (“demostrar que es posible”).

Entre los años 2001 y 2004 formaron parte de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), uno de los principales movimientos de trabajadores desocupados con fuerte incidencia en el Gran Buenos Aires, constituyéndose como la expresión del movimiento piquetero en la Ciudad de Buenos Aires. El asesinato de uno de sus dirigentes -Martín “El Oso” Cisneros- en el 2004, en connivencia con la policía, desembocó en la toma de la Comisaría 24 del barrio de La Boca,

³⁸ A lo largo de los años su denominación fue mutando: de Comedor Los Pibes, a Organización Social Los Pibes, luego Organización Social y Política Los Pibes, y por último, Movimiento Popular Los Pibes.

³⁹ Para profundizar sobre la trayectoria de esta organización, ver Señorans (2018).

sucesos que tuvieron gran repercusión nacional, y forjaron una identidad combativa, intransigente y fuertemente centrada en las bases.

En relación a su posicionamiento respecto del Estado, no hay un rechazo de plano, pero sí el convencimiento de la necesidad de transformarlo para que exprese el mandato popular. En ese sentido e inspirados en la experiencia de las comunas bolivarianas en Venezuela, entienden la necesidad de construir una “nueva geometría del poder” que organice el Estado de abajo hacia arriba, otorgando participación y decisión a la “comunidad organizada”.

“A diferencia de otras épocas, entendemos que el camino hacia “otro mundo posible”, hacia la liberación, no es tomando el poder, porque en realidad el poder, ya no es el poder de las institucionalidades, sino el poder es el poder fáctico que actúa de hecho a través de los innumerables modos que tiene el poder global, donde las democracias son una gran parodia, en donde nos permiten cantar el himno, izar la bandera, votar cada cuatro años, pero cada vez más es un poder vacío, porque el poder está en otro lado, no en las instituciones”, (entrevista realizada en mayo de 2023 a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de alrededor de 60 años).

Acompañaron al gobierno de Néstor Kirchner en el inicio, sintiéndose representados por las políticas iniciales que se llevaron a cabo. En 2006 tuvieron un paso por la gestión en la Ciudad de Buenos Aires (en ese momento alineada con el gobierno nacional), que rápidamente entró en tensión con las formas tradicionales de la institucionalidad estatal.

Hay una fuerte crítica al diseño de las políticas de “este” Estado para los sectores excluidos. En ese sentido, cada política, programa o proyecto financiado por el Estado para satisfacer las demandas del sector, es interpretado como conquista de la lucha, y busca generar un sentido propio de implementación en función de la construcción colectiva, confrontando la subjetividad asistencialista que -entienden- propone la estatalidad frente a una subjetividad militante.

La necesidad de construir “otra economía” impulsó inicialmente, como en todos los movimientos sociales de entonces, una multiplicidad de emprendimientos productivos con el objetivo de recuperar el trabajo, desde un taller textil, una carpintería, una panadería, un taller de serigrafía, entre otros. “Ninguno funcionó”, expresan.

Esto fue fortaleciendo la mirada acerca de la necesidad de ampliar la escala de las iniciativas, al mismo tiempo de tomar las propias necesidades del colectivo como el motor de los emprendimientos productivos. En ese sentido, conformaron una radio comunitaria en 2011, sumándose al emergente abierto con la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“Ley de Medios”) y una cooperativa de vivienda, con la que lograron la construcción de un edificio para 33 familias mediante la subejecutada Ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires⁴⁰, que otorga crédito para la construcción de vivienda colectiva mediante la autogestión.

La activa incorporación del Movimiento Popular Los Pibes a la entonces Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en el 2013, reorganiza el sentido de las experiencias productivas, que dejan de verse como emprendimientos sueltos y cobran un sentido de integralidad bajo la forma de *economía popular*, no sólo entre sí, sino también con el conjunto de movimientos y experiencias que empezaron a identificarse como trabajadores de nuevo tipo.

Esta confluencia con trabajadores de las distintas ramas de la economía popular, y la finalización de la construcción de las 33 viviendas en el año 2014, promovieron la creación del Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros (en adelante, el “Paseo”) en el terreno lindante al flamante edificio, como espacio de comercialización de productos de las organizaciones de la agricultura familiar y campesina, de las empresas recuperadas y cooperativas de artesanos, bajo el lema “de la mano del productor, a la mesa del trabajador”. Se buscaba que los destinatarios del consumo sean los propios compañeros, y no los sectores

⁴⁰ Esta Ley había sido promovida por un conjunto de movimientos sociales por la vivienda y el hábitat de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000, de la cual el Movimiento Popular Los Pibes fue parte.

medios movilizados por la “alimentación sana”. Esta experiencia pasó a conformar una nueva “unidad político territorial”, tal como define el movimiento a sus espacios internos de organización.

Aquel terreno, propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había sido cedido en comodato a la Cooperativa de Vivienda para que funcionase de obrador de la construcción, quedando vacío al finalizar la obra. La organización logró refuncionalizar el espacio, conseguir un nuevo comodato de préstamo y así no perder la posibilidad de su uso. En 2015 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprueba en 2015 un nuevo comodato de uso por 20 años más (FARCO, 22/22/15). Es en ese mismo predio donde a mediados de 2019 se decide llevar adelante la Huerta Popular Martín “Oso” Cisneros.

4.1.1.1 La Huerta Popular Martín “Oso” Cisneros (La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

A partir de la llegada del macrismo a la presidencia en 2015 y debido al rápido deterioro de las condiciones económicas que afectaron fuertemente a los sectores más humildes, se inicia en la organización un debate acerca de la necesidad de generar capacidades para el autoabastecimiento de los elementos esenciales, principalmente el alimento. No en un sentido inmediato, sino como horizonte a futuro. Por aquellos años, Venezuela atravesaba una fuerte crisis provocada por los bloqueos de Estado Unidos -también llamada “guerra económica”-, que generaba desabastecimiento de bienes básicos y medicamentos. La interpretación acerca de la reorganización del tablero regional y global, pronosticaban momentos de profundas adversidades para los sectores populares en los tiempos venideros. En esta etapa se produce una afinidad con los discursos del Papa Francisco, y se empieza a tomar con fuerza la idea de “crisis civilizatoria” como característica de la época, incluyendo la mirada ambiental.

Esta lectura, trajo por primera vez la necesidad de cultivar alimentos como una estrategia de acción priorizada, en clave de generar condiciones que permitieran desarrollar experiencias para achicar la dependencia a bienes y servicios externos, es decir, lograr mayor autonomía, en

particular, del alimento. El armado de una huerta en el predio donde funcionaba el “Paseo” podía ofrecer un espacio de formación a los militantes de la organización, para proyectar experiencias de producción de alimentos en otros lugares, algo que nunca antes se había planteado como alternativa. En palabras de uno de sus dirigentes, esto tuvo que ver con el momento de crecimiento en los niveles de organización y conciencia de los movimientos populares.

“Ese sujeto empezó a entender en algún momento que tenía que recorrer determinados ejes: la lucha medioambiental, la construcción de una agricultura familiar, de una experiencia que nos permitiera garantizar una mejor alimentación, pero también la autonomía para que los nuestros puedan comer. Que no tengan que padecer lo que en los ‘90 era el mate dulce, porque el azúcar te tapaba el hambre; la pasta y la harina porque eso te llenaba. Las comidas muy aceitosas. Que no tenía que ver con nuestra historia, donde se comía mejor hace tiempo atrás. Que tenía que ver con sobrevivir, como papear en los tiempos de crisis. Esas experiencias nos fueron haciendo entender que teníamos que recorrer otra economía que la que nos proponían. No sé si tanto intelectualizado, pero casi como sentido común. Como autonomías del sentido común muy ligado a esa tripa de nuestra base, esa tripa que tiene el subsuelo de la patria sublevada, del amor, lo comunitario no tanto desde la intelectualización, sino desde las mejores vísceras de los trabajadores y de los humildes”, (entrevista realizada en mayo de 2023, a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de entre alrededor de 60 años de edad).

Por otra parte, el intercambio con organizaciones campesinas que permitió la participación dentro de la CTEP, fortaleció la solidaridad entre ambas ramas de trabajadores y amplificó la conciencia de las militantes del Paseo -la mayoría mujeres- en relación al problema de la soberanía alimentaria y el modelo productivo.

Antes no sabíamos lo que significaba Bayer, más que el remedio que íbamos a comprar. Había una empresa que estaba manipulando todo, Monsanto. Íbamos contra todo, esa cosa de la agroecología, el agua, la tierra, la semilla, viste? Pero era todo: ir, ir, ir y apoyar la lucha, pero sólo sabíamos lo que nos decían. Y entonces todo eso que uno va aprendiendo, la teoría, ¿por qué no acá? Hasta que un día decidimos poner en práctica todo lo que hablamos... Era demostrar que se puede hacer también. Éramos como 20 compañeros, todos pilas arriba (entrevista realizada en octubre del 2022 a militante de la Huerta Martín Oso Cisneros, mujer de aproximadamente 50 años y encargada de las tareas cotidianas de la huerta).



Fuente: Fotografías de la Huerta Popular Martín “Oso Cisneros” tomadas en marzo de 2021.

En ese contexto, es que en 2019 se define avanzar con el proyecto de huerta. El predio está ubicado en la esquina de las calles Ministro Brin y Pedro de Mendoza, frente al Riachuelo, en una zona marginal del barrio de La Boca con altos índices de contaminación ambiental. Se encuentra a apenas cuatro cuadras de Caminito, un punto neurálgico del turismo internacional.

En el armado de la misma participó un grupo de 20 militantes aproximadamente. Se construyeron canteros en altura con madera de pallets y neumáticos sobre el cemento en una superficie de aproximadamente 20 por 20 metros. Se los rellenoó con tierra abonada con “bocacci” -una técnica para realizar abonos- que proveyó una de las organizaciones de productores hortícolas con las que se articulaba dentro de la CTEP y que proveía de verduras frescas en la feria semanal que se realizaba en el predio⁴¹. Se recibió asistencia técnica de organismos públicos⁴² y se inició un proceso de formación en agroecología. Luego de dos o tres meses se cosecharon los primeros cultivos.

Huerta Popular Martín Oso Cisneros



Fuente: Elaboración propia en base a imágenes tomadas de Google Earth

Durante las medidas de aislamiento social durante la pandemia, la feria del “Paseo” debió discontinuar su funcionamiento, pero la Huerta siguió activa, con algunos pocos militantes a cargo que realizaban turnos. Allí se armó una olla popular, y la huerta se convirtió en un “refugio verde” para militantes y vecinos que continuaron cuidándola.

⁴¹ Nos referimos a la Unión de Trabajadores de la Tierra, que emerge a partir de representar a los trabajadores rurales hortícolas de los cinturones verdes del Área Metropolitana de Buenos Aires, y que encontraron en los “verdurazos” una metodología efectiva de protesta. Actualmente es una organización nacional, que involucra a distintas ramas de productores de la agricultura familiar y campesina de todo el país.

⁴² Se articuló con el Programa ProHuerta y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

También durante la pandemia, la organización amplió su influencia en el interior del país, consolidando espacios productivos diversos, muchos de los cuales consolidaron cultivos de huerta y granja.

En síntesis, la huerta en esta organización refleja un momento en los ensayos de construcción política, aggiornado a la particular interpretación de la crisis del capitalismo en esta etapa.

“Tenemos que defender lo que construimos, porque el enemigo ya sabe que cuando armamos una huerta comunitaria, no nos quedamos en el simple hecho de la soberanía alimentaria, o de tener una alimentación sin agrotóxicos, sino que todas estas experiencias son vehículos hacia la construcción de otro mundo posible” (entrevista realizada en mayo de 2023, a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de alrededor de 60 años de edad).

4.1.2 El Movimiento Evita de San Isidro

El Movimiento Evita por su parte nace como tal en 2006, de la convergencia de vertientes de la militancia de los años ‘70, del peronismo justicialista y del movimiento piquetero de los años ‘90, con el objetivo de conformar una base de sustentación del gobierno de Néstor Kirchner, o bien “ser la espada de Néstor”, según Longa (2019). Su nombre recupera el símbolo de Eva Duarte de Perón, como “abanderada de los pobres” y artífice de los derechos del pueblo trabajador. Dentro de una tradición ideológica nacional-popular con una fuerte identidad peronista y vocación frentista, aquellas vertientes originarias del Movimiento traían distintas miradas en relación a la articulación con el Estado para avanzar en las conquistas. Entre ellas, terminó prevaleciendo la mirada que interpreta la importancia de la “inserción en el Estado” como estrategia de construcción política, lo que significó la participación de muchos de sus dirigentes en cargos ejecutivos y legislativos a lo largo y ancho del país (Longa, 2019). Éste es un rasgo que lo diferencia del caso presentado anteriormente.

Es una organización masiva de carácter nacional, con gran capilaridad territorial y alta capacidad de movilización, fundamentalmente en las barriadas del Gran Buenos Aires, cuyo objetivo es representar a “los últimos de la fila”. Inicialmente la modalidad de trabajo territorial implicaba la inserción en los barrios mediante la apertura de Unidades Básicas, desde donde se brindaba distinto tipo de asistencia a las necesidades del barrio, como la entrega de alimentos, la organización de talleres educativos, de formación en oficios, espacios de formación política, entre otros.

Los militantes se nuclean en función de su pertenencia al colectivo de jóvenes (Juventud Peronista Evita), mujeres (Frente de Mujeres Evita), estudiantes secundarios, diversos frentes de profesionales (Mesa de Economía, Centro de Estudios Laborales) y trabajadores de la economía popular, entre otros. Éste último, resultó ser una instancia fundamental de la organización, que -como se relató anteriormente- derivó en el armado de la CTEP en 2011, junto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y otro conjunto de movimientos populares. Su base social más importante se ubica en las barriadas de los distritos del conurbano bonaerense.

A diferencia del Movimiento Popular Los Pibes, su despliegue de experiencias de organización del trabajo y desarrollo de prácticas económico-productivas, se desarrolló de manera más vinculada a las políticas que se iban “bajando” desde la gestión, de la cual formaron parte durante los gobiernos kirchneristas, principalmente en la cartera de Desarrollo Social del gobierno nacional. La experiencia en la gestión del Programa Argentina Trabaja -que como señalamos en el capítulo anterior, se trataba de un plan social con contraprestación laboral mediante la formación de cooperativas de trabajo-, significó un crecimiento importante en su presencia territorial, al mismo tiempo que presentó dificultades en el desarrollo de procesos productivos reales, en particular, por las tensiones locales que implicó su implementación (particularmente con los municipios). Ésto había impedido contar con herramientas de trabajo y espacios donde desarrollar sus actividades⁴³.

⁴³ Para un análisis más profundo de la experiencia de gestión del Movimiento Evita en el Programa Argentina Trabaja, así como una caracterización del recorrido del Movimiento Evita, ver Longa (2019).

Tales dificultades brindaron lecciones que se pusieron en práctica en las siguientes experiencias. Con el cambio de gobierno en el año 2019, el Movimiento Evita vuelve a formar parte de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, esta vez en la Secretaría de Economía Social, desde donde promueven un nuevo programa de asistencia al trabajo, que como se anticipó en capítulo 3, se denomina “Potenciar Trabajo”. Éste fusiona distintos dispositivos similares existentes hasta ese momento. También le imprime un sentido más productivo a la política social, que contempla además del complemento salarial para cada trabajador, la inversión en insumos, maquinarias e infraestructura para el desarrollo de procesos productivos de la economía popular (Ferrari Marengo, 2020). Una de las estrategias desarrollada por el Movimiento Evita para desplegar estos procesos, fue el fortalecimiento de “Polos Productivos” en predios de grandes dimensiones. El Polo Productivo Arenaza, en la localidad de Boulogne, San Isidro, es reflejo de ello.

4.1.2.1. La huerta, la chacra y el gallinero del Polo Productivo Arenaza (Boulogne, Municipio de San Isidro, Provincia de Buenos Aires)

San Isidro es uno de los municipios del conurbano norte del Gran Buenos Aires, característico por su enorme brecha social, dado que alberga a los sectores de poder adquisitivo más alto de país (los barrios de Lomas de San Isidro, Acassuso, Martinez), con barriadas populares muy humildes, como La Cava y el Bajo Boulogne.

El predio donde funciona el Polo Productivo Arenaza se ubica en la intersección de las calles Lamadrid y Gorriti, cercano al cruce entre la Avenida Rolón y la Panamericana, a pocas cuadras del límite con el municipio de San Martín. Su historia resulta significativa en relación a las disputas por el espacio que se vienen dando en el territorio urbano del AMBA.

Se trata de un predio de 15 has. que antiguamente fuera la “Quinta” de la familia Rolón, una de las familias pioneras de la zona en el siglo XIX. En 1937 el predio fue rematado y comprado por el Estado Nacional (lo que entonces fuera la cartera de Desarrollo Social) para construir allí un Hogar de huérfanos, que funcionó durante varias décadas, gestionado por

diversas instituciones. En 2006 el Hogar cierra, quedando el predio prácticamente en estado de abandono. Luego de un derrotero de tensiones entre el gobierno nacional, el municipio, hasta incluso la Ciudad de Buenos Aires, una parte del predio se transformó en parque público y otra parte siguió en estado de abandono, generando problemas de inseguridad y contaminación en el barrio.

Ya en el 2016 el Movimiento Evita empieza a utilizar un sector del predio, pero con grupos pertenecientes al vecino municipio de San Fernando, para el desarrollo de proyectos sociales. Hasta que en 2017 se define un despliegue mayor, con el protagonismo del Movimiento Evita de San Isidro, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de esa zona, que en articulación conformaban, junto a otros espacios, la “CTEP Zona Norte”. Recordemos que por aquellos años la CTEP como experiencia de organización atravesaba un momento de gran crecimiento y confluencia de experiencias, en contexto de emergencia de la resistencia al macrismo. A partir de allí se inicia un trabajo para acondicionar las instalaciones del predio y organizar el trabajo de nuevas unidades productivas. Cada organización desarrolla sus propios emprendimientos por separado, compartiendo el espacio (Qué Pasa Web, 13/11/17).

Desde ese momento hasta la actualidad, el Movimiento Evita de San Isidro puso en funcionamiento distintas unidades de trabajo orientadas a la producción de alimentos: la huerta-vivero, la chacra y el gallinero. Las restantes son el Espacio de Primera Infancia (EPI), como espacio de cuidado para las niñeces de quienes trabajan en el predio; la cocina-comedor, que elabora comidas también para quienes trabajan en el predio; el grupo de mantenimiento; un espacio educativo de finalización de estudios secundarios; una cooperativa textil y una panadería. También funciona una vez por semana un puesto de venta directa de la producción primaria del predio, en tanto se está retomando el armado de una feria de la economía popular con productos de otras unidades productivas y organizaciones, que supo tener mayor regularidad antes de la pandemia. Se proyecta crear un almacén popular, y un laboratorio de cosmética

natural, como nuevos emprendimientos. Actualmente trabajan todas las semanas en el predio alrededor de 1100 personas, divididas en diversos turnos, la mayoría de ellas, mujeres⁴⁴.

Polo Productivo Arenaza



Fuente: Elaboración propia en base a imagen tomada de Google Earth

Según las entrevistas realizadas, la posibilidad de hacer uso de un predio adquiere un sentido vital para el desarrollo del trabajo en la economía popular, y en particular, en la dinámica que ofrece la generación de trabajo desde los programas sociales. Genera las condiciones para desarrollar diversos emprendimientos y sumar la mayor cantidad de compañeros posibles.

“Armar un espacio para que los programas pudieran tener un espacio verdadero y real para que esos compañeros pudiesen percibir un salario [social complementario]. El trabajo ordena un montón a los programas sociales. Si no tenés un lugar donde prestar el servicio, es más difícil” (entrevista realizada en febrero 2023 a una referente del Movimiento Evita de San Isidro, mujer de entre 30 y 40 años, responsable política en el territorio).

Tal como señalamos, la implementación del Programa Argentina Trabaja, había significado una mala experiencia que no se quería reeditar. No se habían podido desarrollar

⁴⁴ Para un análisis de los procesos de subjetivación laboral de los trabajadores del Polo Productivo Arenaza desde una mirada de la economía social y solidaria, ver la tesis de maestría de García (2022).

experiencias productivas, lo que terminó en una desmoralización y desmovilización de los compañeros (Longa, 2019). *“Tener un lugar físico es muy importante para nosotros, porque si no tendríamos que andar por todos lados (...). No queremos estar a la deriva”* (entrevista realizada en marzo de 2023 a una referente del Movimiento Evita de San Isidro, responsable de las actividades de todo el predio, mujer de aproximadamente 30 años).

En relación a eso, señalan la importancia de que allí las compañeras puedan tener un espacio de cuidado para sus hijos, trabajar tranquilas, almorzar todos los días en el trabajo, e irse con dos comidas “ya resueltas” a continuar la jornada. Estos cambios son percibidos como una mejora sustancial en las condiciones de trabajo y de vida logradas en esta etapa.

La “chacra” y la “huerta-vivero” fueron una de las primeras actividades que se inician, a modo de consolidar el trabajo dentro del predio. Se diferencian por las dimensiones que ocupan, la disposición de los canteros y por el tipo de especies que se cultivan. La primera tiene una dimensión de aproximadamente 0,5 ha. trabajada con surcos a campo, mientras que la huerta es más pequeña, tiene canteros elevados con madera y se encuentra al lado del vivero, un invernadero de aproximadamente 5 x 10 m. En el primero se cultivan de todo tipo de especies hortícolas, mientras que en el vivero se cultivan plantas aromáticas, medicinales y plantines de diverso tipo.

Chacra y gallinero del Polo Productivo Arenaza



Fuente: Facebook del Polo Productivo Arenaza, 2022

El “gallinero” por su parte, se especializa en la producción de huevos de campo, funcionando como centro de cría del componente de granja del Programa ProHuerta, es decir, se reciben pollitas de gallinas ponedoras de un día, se realiza la “recrea” hasta el mes de vida, y luego se devuelven para ser distribuidas a los beneficiarios del Programa. Como contraprestación por el trabajo realizado, un 20% de esos animales pueden quedar a disposición del lugar. En ocasiones, se han criado pollos camperos para obtener carne, pero generalmente se orientan a la cría de gallinas ponedoras para la producción de huevos.

En todos estos emprendimientos, los productos obtenidos se destinan, por un lado, a la cocina del Polo Productivo, también a los propios trabajadores y si hubiese excedentes, se comercializan en la feria de los días viernes. En el horizonte, siempre existe la proyección de ampliar la producción para “hacer un puchito más” que complementa el ingreso de base.

En las entrevistas realizadas, se notó una gran valoración acerca de las posibilidades de aprender y formarse que brinda cada unidad productiva en el predio, dando lugar a que los compañeros “progresen” o aprovechen nuevas oportunidades (*“nunca sabés para dónde puede derivar”*).

Tal como señala García (2022) a partir del estudio de las subjetividades laborales presentes en los trabajadores del Polo Productivo Arenaza, se comprueba la emergencia de sentidos del trabajo que confrontan con la mirada hegemónica sobre estos sujetos, en tanto “planeros”, “vagos” y demás adjetivos denigrantes: *“se vislumbran acontecimientos de horizontes colectivos de lucha y de satisfacción de necesidades a partir del trabajo cooperativo popular como forma legítima de vida”* (García, 2022: 134).

4.1.3 La Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste

Como señalamos en el capítulo 3, esta tercera experiencia da cuenta de otro de los recorridos realizados por los trabajadores expulsados del mercado de trabajo durante los años ‘90: los llamados “cartoneros”. El derrotero de la organización de este sector, se fue dando al calor de diversas regulaciones estatales sobre la gestión de residuos urbanos en la Ciudad de

Buenos Aires, fruto de los procesos de lucha, que de manera más o menos organizada, fueron dando visibilidad a la cuestión. Se abrió así un camino de reconocimiento y formalización del trabajo de los cartoneros como “recicladores” y luego “recuperadores” urbanos, dentro de las políticas de higiene urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires⁴⁵.

Las tres organizaciones más importantes que representaron al sector, fueron por un lado el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que como señalamos, emerge de la experiencia cartonera; la Cooperativa El Ceibo, por otro lado, y la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste, vinculado al Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires.

Recordemos que este sindicato había sido uno de los integrantes principales de la central de trabajadores crítica a las políticas neoliberales impulsada en los años ‘90 (la Central de los Trabajadores Argentinos) y que se había mantenido solidario en relación al reclamo de los desocupados. Cuando en 2007 Mauricio Macri llega al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se producen distintas reformas estatales, entre ellas, despidos masivos, que movilizan ampliamente a la militancia sindical de los trabajadores estatales de la Ciudad. Ese proceso, sumado al impulso que los cambios en las normativas respecto a la recolección de la basura generaron en relación a la conformación de cooperativas de recicladores, confluyeron en la articulación de acciones entre recicladores y trabajadores estatales -fundamentalmente aquellos trabajadores de las áreas de higiene urbano de aquel entonces-. Así es como se consolida la organización del sector cartonero de la rama oeste, conformando la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste. Muchos de estos trabajadores estatales eran estudiantes o jóvenes

⁴⁵ Se trata de la Ley 992 de 2003, que incorpora a los recuperadores urbanos en el sistema de recolección, creando un registro. Luego con la sanción de la Ley denominada “Basura Cero” en 2005, se promueve la participación de cooperativas de reciclado en la gestión de residuos, incorporando líneas de financiamiento específicas. Años más tarde se divide la gestión de residuos húmedos y secos, conveniando con las cooperativas de recuperadores urbanos la gestión de estos últimos, política que recién se efectiviza en 2013 (Tagliafico et. al, 2015). Según las entrevistas realizadas, se reconoce la política de la ciudad en la materia, como “una política modelo”, basada en la co-gestión de una política pública entre el Estado y las organizaciones sociales.

profesionales con trayectoria militante estudiantil, marcados por la experiencia de militancia durante las revueltas del 2001.

A diferencia del camino desarrollado por el MTE, orientado en la conformación de un sindicato nuevo para estos trabajadores reconocidos ahora dentro del sector de “economía popular”, la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste promovió el reconocimiento de la identidad de los recicladores como trabajadores estatales, a medida que se fue formalizando su función, y de esa manera la representación sindical se vehiculizó a través del gremio ATE. No hay una identificación en este caso con la “economía popular” como nuevo sector del trabajo. En las entrevistas realizadas se manifestó una mirada sobre todo enfocada en el desarrollo de la mejor manera posible del proceso que les toca representar y organizar (la Cooperativa). No obstante, creemos que estos matices se deben a circunstancias coyunturales, que no invalidan a su inclusión dentro del universo de análisis.

Las particularidades de la organización del trabajo de reciclado y sus diversas etapas, presentan una complejidad y una especificidad muy importante, que sin embargo no desarrollaremos aquí⁴⁶. A diferencia de los procesos relatados anteriormente, el trabajo de reciclado es originalmente un trabajo individual que realiza cada cartonero “en calle” y que tiene la venta en el mercado un componente importante. Es decir, el material reciclado tiene un valor de mercado, y forma parte de una cadena productiva encargada de procesarlo para su reutilización. Actualmente se procesan mensualmente 700 toneladas de material que son vendidos a la industria para su reciclado (Perfil, 27/5/2023). A medida que pasaron los años, se fue promoviendo una lógica cada vez más cooperativa. La ocupación de galpones y predios, desde donde procesar los materiales, hacer base, guardar los carros⁴⁷, y el tener un lugar donde compartir, fue significando cada vez mejores condiciones de trabajo.

⁴⁶ Para ampliar sobre el tema, ver Maldovan Bonelli (2014) y Tagliafico et al. (2015).

⁴⁷ Los “carros” son el artefacto principal mediante el cual el reciclador junta el material. Es traccionado a sangre por el propio reciclador, quien circula a pie por la calle.

En 2013 y como parte de esa búsqueda, la Cooperativa toma un terreno lindero a las vías del ferrocarril Sarmiento en el barrio residencial de Caballito, al 1400 de la calle Yerbal, el cual se encontraba baldío. El objetivo era desarrollar un centro de acopio alternativo al que ya poseía la Cooperativa en otro barrio ubicado en una zona más periférica de la Ciudad (Villa Soldati), que les permitiese hacer base en la zona donde se realizaba la recolección propiamente, con mejor ubicación para el acceso de los trabajadores provenientes del oeste del conurbano. El terreno es parte de la traza del ferrocarril, y en consecuencia, propiedad del Estado nacional.

Inicialmente el predio funcionó como base para guardar los carros y pesar el material. A partir de 2015 con el cambio de gobierno nacional, la tenencia del predio empieza a verse amenazada, generando esto un cambio de escenario. Con el pretexto del supuesto inicio de las obras que llevarían a cabo el soterramiento de las vías del ferrocarril, el gobierno de la Ciudad en acuerdo con el gobierno nacional, desplegaron distintas iniciativas para desalojar a la Cooperativa. Como la obra finalmente no pudo realizarse, también cesaron los intentos de desalojo.

Vista satelital del terreno del Eco-Parque antes de su armado



Fuente: elaboración propia en base a imágenes tomadas de Google Earth

Cabe aclarar, que el barrio de Caballito en particular, tiene antecedentes de fuertes conflictos en torno al uso de los espacios urbanos, como el caso del movimiento “no a las torres”, en donde vecinos agrupados lograron frenar la construcción de grandes edificios de lujo emplazados en medio de zonas residenciales. En ese sentido, frente al predio de la Cooperativa, ubicado en la traza lindera al otro costado del ferrocarril, se encuentra otro predio también en disputa, en este caso entre vecinos organizados y un holding inmobiliario, que pretende construir allí un shopping.

En este contexto de disputas por el espacio urbano, los intentos de desalojo fueron un puntapié inicial para impulsar un proceso de revisión, no sólo de la utilidad y funcionalidad del predio de Caballito, sino también, de organización de todo el sistema de recolección de los recicladores “en calle”, procesos que empiezan a tomar forma al calor del aislamiento social obligatoria durante la pandemia.

4.1.3.1. El Eco-Parque de Caballito (Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

El “parate” que significó la pandemia en el 2020, al margen de lo difícil y traumático que fue para muchos trabajadores, permitió dar un salto cualitativo en relación al uso del predio de Caballito. Se dio un debate en relación a la necesidad de diversificar las áreas de influencia de la Cooperativa, sumando nuevos emprendimientos que ofrecieran formación de oficios en distintos rubros (carpintería, confección textil, serigrafía, sublimado, terminalidad educativa, etc.), así como poder diversificar el trabajo y no quedarse sólo con la recolección de residuos. Era una preocupación no poder integrar de alguna manera a aquellos trabajadores que por la edad y estado de salud, no podían continuar con la tarea de recolección en calle.

En ese contexto, finalmente, se apuesta -por primera vez en la historia de la organización- en el armado de una huerta modelo, un centro de compostado, un vivero y -a diferencia de los dos casos presentados anteriormente- un parque verde abierto al público. Una actividad completamente nueva para ellos, pero que -interpretaron- podía permitir reforzar la posesión del predio, al tiempo que contribuir con la aceptación del vecino de Caballito respecto

de su presencia en el barrio, posicionándose desde un nuevo rol social como protagonistas de la política ambiental.

La inversión para el desarrollo de este Eco-Parque fue cubierta con fondos propios de la Cooperativa y asistencia técnica propia. En una instancia posterior, se realizó la articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Las dimensiones del proyecto son muy superiores al promedio de experiencias de agricultura urbana en la Ciudad de Buenos Aires, sin dudas algo que llama la atención. Así como también, el diseño “vistoso” que le imprimieron. Desde un punto de vista de política ambiental, el proyecto permite construir desde la práctica el ejercicio de la “economía circular”, destinando residuos tanto para la fabricación de compost y plantines, como para el armado de canteros.



Fuente: fotos tomadas en visita técnica en diciembre de 2022

Para el funcionamiento de cada área se convocó, por un lado, a los trabajadores exceptuados del trabajo “en calle” por motivos de salud y por otro lado, a un conjunto de trabajadores que tienen experiencia en la producción de alimentos (cuestión que se empezó a visibilizarse a partir de esta experiencia). El Eco-Parque cuenta con una laguna artificial, un monte de árboles nativos y

corredores de especies autóctonas, todo construido por la propia Cooperativa. Se abrió al público recientemente, siendo los propios recicladores y recicladoras quienes ejercen de guía para recorrer las instalaciones del predio, y transmitir desde su experiencia, una mirada propia y popular, del ambientalismo en la ciudad.



Fuente: fotos tomadas en visita técnica en diciembre de 2022

Hasta aquí, el relato de tres casos distintos de organizaciones del universo de las economías populares, que en lo que definimos como territorio urbano del AMBA, despliegan en los años recientes apuestas importantes de producción agrícola en predios que utilizan hace un tiempo no muy lejano. Experiencias que en todos los casos resulta una iniciativa nueva en sus trayectorias y que entendemos, significan mucho más que “producción de alimentos en la ciudad”, sino más bien, representan una nueva etapa de las estrategias de construcción y resistencia de las economías populares urbanas en el actual contexto. Entendemos que son significativas, en tanto las ciudades representan un recorte amplificado de las dinámicas y conflictos sociales puestos en juego en el presente.

4.2 Estrategias de resistencia y horizontes comunitarios en las economías populares

A continuación compartiremos elementos que entendemos resultan particulares, sino novedosos, del despliegue de estrategias de organización y resistencia de las economías populares organizadas en los años recientes. Especialmente nos enfocamos en identificar los

“modos de hacer economía”, los sentidos que se ponen en juego y las dinámicas particulares que allí se configuran.

No pretendemos realizar una lectura “esencialista” de las experiencias, ni romantizar lo que en definitiva representa una “fase superior” del despojo del capital contra las mayorías populares, como lo es el contexto actual. Tal como expresan Mazzeo y Strata (2021), idealizar los procesos de lucha de la economía popular, puede llevarnos a invisibilizar los problemas estructurales que existen para el desarrollo de estas economías (el problema de la concentración de la propiedad de la tierra, el control del comercio exterior, la reformulación del Estado, entre otros factores, sin los cuales no hay economía popular que pueda avanzar hacia un camino de emancipación).

No obstante, nuestro esfuerzo se centró en identificar las particularidades de las experiencias desarrolladas, a partir de interpretar el rol que cumplen las prácticas agrícolas en ellas, y dilucidar en qué medida se trata del despliegue de formas específicas de resistencia.

En ese sentido, el análisis de toda la información recolectada, nos llevó a identificar tres dinámicas particulares, a partir de las cuales pudimos encontrar las respuestas a nuestra hipótesis, aportando elementos a la comprensión de nuestro problema.

Nos referimos, por un lado, a **las dinámicas de restitución de lo común** visibles en el papel clave de lo *popular comunitario* como relación social presente en estas economías y que resulta relevante durante esta etapa. Estas dinámicas -nunca en estado puro y en tensión permanente- están presentes tanto en la recuperación de capacidades para usufructuar espacios y bienes comunes, como en la valorización presente del trabajo asociado a la reproducción de la vida colectiva, el despliegue de nuevas formas de autonomía y la desmercantilización de necesidades.

Por otro lado, analizaremos los casos en función de los procesos de ocupación del espacio como **territorialidades de la defensa**. Se trata de dar cuenta en qué medida las economías populares pueden estar interpretando, vivenciando, encarnando, padeciendo un

escenario de aumento de diversas formas de violencia, que impulsa el desarrollo de dinámicas de autodefensa y en ese sentido, los modos en que las prácticas agrícolas contribuyen en una suerte de construcción de trincheras. Se trata de defender no sólo el territorio para la reproducción común, sino también las conquistas logradas en 25 años de lucha.

Por último, señalaremos en qué medida los testimonios recogidos nos permiten identificar las experiencias desplegadas, como **economías de la resistencia**, y qué implica esta conceptualización en términos de la caracterización de experiencias de construcción de “otras economías”.

4.2.1 Prácticas agrícolas urbanas como dinámicas de restitución de lo común en las economías populares

Como señalamos en el capítulo 2, durante las sucesivas etapas de esta investigación, tanto en la revisión bibliográfica y teórica, como en el trabajo de campo y el análisis de discursos en medios y documentos, la resonancia particular de “lo comunitario” como atributo característico y significativo de las prácticas y discursos presentes en este universo de organizaciones en los años recientes, resultó llamativo.

Buscando elementos teóricos que me permitieran vincular lo “comunitario” con el proceso de lucha de las economías populares, justamente en una etapa de ofensiva de las formas extractivas del capital y del extractivismo ampliado, los debates en torno a la “producción de lo común” resultaron un modo de abordaje adecuado que permite expresar las búsquedas que éstas vienen ensayando -o bien, un modo de interpretar lo que allí se expresa-, y caracterizar su posible “horizonte político”, como propone Gutierrez Aguilar (2017).

Ahora bien, ¿en qué medida los casos analizados nos pueden mostrar la revalorización de lo comunitario como horizonte político?

4.2.1.1 Restitución del saber cultivar la tierra

En primer lugar, una constante en la composición del sujeto de la economía popular en el Área Metropolitana de Buenos Aires, es su origen migrante de ámbitos rurales de distintas

provincias del país, así como también de países limítrofes, como Paraguay, Bolivia y Perú, principalmente. A partir de los relatos recogidos, encontramos una relación entre la puesta en marcha de prácticas agrícolas en los predios recuperados y la memoria de un saber latente vinculado a la “tierra”.

Yo empecé a trabajar acá y dije “yo acá me quedo”. ¡Me encantó el lugar! Todo, todo. Me encantan las gallinas, lo primero que hago a la mañana ahí me meto, estoy ahí con ellas, como quién diría “la loca”, hablándole a las gallinas. No tenía experiencia... El recuerdo nomás de mi abuela cuando era chica, que tenía gallinero, y me metía en el gallinero con mi abuela. Las gallinas ponían huevos y teníamos que ir a la mañana a recolectar todo... Entonces ese recuerdo me quedó, y el estar acá me lo devuelve... (entrevista realizada en marzo de 2023 a quien es la encargada responsable del “gallinero” del Polo Productivo Arenaza, mujer de aproximadamente 40 años).

En esa línea, en un taller de formación que realizamos junto a trabajadores recicladores de la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste, que vienen llevando adelante la huerta y el Eco-Parque, al mapear en conjunto sus orígenes vinculados a la tierra, la mayoría de ellos compartió sus recuerdos de la infancia en alguna provincia de los distintos territorios del país, en donde padres o abuelos producían alimentos, en algunos casos orientados al autoconsumo y en otros, vinculados a las economías regionales. Hay un saber latente que aparece de modo perplejo, cuyo origen oscila entre fuente de orgullo y estigma. La capacidad de autosustento en términos de vivencia, como algo que no estuvo mercantilizado alguna vez, se encuentra presente en la memoria.

[La huerta] nos permitió entender que había compañeros que tenían huerta en su casa. Y que tienen una práctica en su terreno, en la provincia, que generaban alimento. Y compañeros que habían hecho cursos en el INTA. Y compañeros que habían hecho cursos en [el sindicato de] Gastronómicos y

armamos talleres de gastronomía, dulce y salado. Los talleres de salado, se nutrían de productos de la huerta. Los estudiantes cosechaban de la huerta y elaboraban productos (entrevista realizada en febrero del 2023 a quien es referente y coordinador de la Cooperativa, hombre de aproximadamente entre 40 y 50 años).

Retomando a Federici (2022) estos saberes pueden ser entendidos como parte del patrimonio expropiado a los pueblos en los procesos de despojo que el capital requiere implementar para dar lugar a sus procesos de acumulación. Como sostiene la autora, los procesos de cercamientos sobre los “comunes” desplegados durante el neoliberalismo, se orientaron a limitar las condiciones de reproducción de la vida de las mayorías, reduciendo el acceso a la tierra, la vivienda y el trabajo, como elementos principales. De igual modo que en los históricos cercamientos de los siglos XVIII y XIX, el efecto que producen en el contexto actual es similar: empujar a una mayor cantidad de personas (ahora a escala global) a la necesidad de ofrecer su capacidad de trabajo a otros para poder subsistir, y de ese modo disminuir aún más los costos de esa fuerza de trabajo (Op. Cit.: 43)⁴⁸. La capacidad de producir alimentos es en este sentido un elemento esencial de la reproducción de la vida, que brinda elementos de autonomía respecto del capital, que ha sido desarticulada.

En ese sentido, se trata de un tipo de saber que a partir de estas iniciativas, es de algún modo recuperado. Si bien este proceso se podría adjudicar a cualquier experiencia de cultivo en la urbanidad, entendemos que el contexto colectivo y organizativo que encuadra estas prácticas, es fundamental en la conexión de ellas con una lógica de producción de lo común. Esto refuerza la idea de que además de restituirse un saber útil, lo que se restituye también es la posibilidad de lo comunitario como alternativa al capitalismo:

⁴⁸ “(...) hay una nueva lógica que impulsa las nuevas formas de acumulación originaria: formar mano de obra que se limite al trabajo abstracto, pura fuerza de trabajo, sin garantías, sin protección, lista para que la desplacen de un sitio a otro, de un trabajo al siguiente, empleados sobre todo con contratos temporales de corta duración y con el salario más bajo posible”, (Federici, 2022).

La huerta nos permite recuperar la memoria de la tierra, que está muy presente en nuestros compañeros. No es que vamos a hackear al mercado por la planta de tomate que construyamos en la huerta comunitaria. Lo que vamos a hacer es transformar en nuestra subjetividad el “se puede” de conseguir una alternativa diferente a este capitalismo de muerte (entrevista a referente histórico del Movimiento Popular Los Pibes, entre 40 y 50 años, actualmente cumpliendo funciones de coordinación política y territorial).

4.2.1.2. Espacios comunes, su usufructo colectivo y la posibilidad de autonomía

Vinculamos esa memoria histórica no solamente a un conocimiento, a un saber-hacer con la tierra, sino también, al ejercicio de un usufructo común sobre el espacio y sus recursos, una forma de territorialidad de lo común, que puede remitirnos a la “tierra no cercada”, o más bien, no cercada por el Estado o el mercado, pero delimitada como una trinchera propia, y que el despliegue de las prácticas agrícolas urbanas en los predios recuperados contribuyen en consolidar.

El predio tiene un montón de hectáreas, nosotros estamos en 5. Después lo demás que está cercado, es municipal. (...) Fuimos recuperando el espacio y poniéndolo a disposición de la comunidad y en función de las unidades productivas. Hay una casa grande que la arreglamos entre las dos organizaciones que hoy es un espacio educativo. Tenemos un espacio FinES⁴⁹, primaria de adultos, y el comedor donde se cocina para todos compañeras y compañeros todos los días. Después fuimos arreglando otros espacios, los acondicionamos para que puedan ser espacios productivos (entrevista realizada en febrero 2023 a una referente del Movimiento Evita de San Isidro, mujer de entre 30 y 40 años, responsable política en el territorio).

⁴⁹ Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios

Especial mención merece el modo en que el aislamiento obligatorio durante la pandemia del COVID19 operó en la producción y usufructo de estos espacios, en clave de lo que podríamos llamar su “comunalización”. Mientras el Estado perdía territorialidad, o bien se reducía al despliegue de sus fuerzas de seguridad y control territorial, se dio un proceso de refuncionalización de espacios, orientado a la revisión de sus propias lógicas de trabajo y a tender lazos con la comunidad⁵⁰:

[Durante la pandemia] acá también sosteníamos la olla [en la huerta].

Porque había muchísima gente que quedó encerrada, sin poder trabajar; no tenían para comer y a parte de tener la olla, lo que hacíamos, venían los vecinos acá, se traían su mate cada uno, nosotras le poníamos una mesita, otros se ponían en el sol. Se tomaban su mate, uno traía un libro, otro se iba a ver la huerta y algunos, bueno ‘me llevo un poquito de esto, de esto, de esto’ y así la fuimos piloteando (entrevista realizada en octubre del 2022 a militante de la Huerta Martín Oso Cisneros, mujer de aproximadamente 55 años y encargada de las tareas cotidianas de la huerta)

(...) la pandemia nos permitió hacer un parate y repensar todo el sistema. Esto era una guardería de carros gigantes. Nos permitió resignificar todo, el trabajo de los operadores en calle, para qué queremos este predio, como qué tenerlo, qué utilidad le queremos dar. Ahí empezó la huerta, el proceso de transformar un basural a cielo abierto, que era aquello, en un espacio verde. Empezamos pensando en una plaza, por ejemplo, pero la plaza carece de sentido por sí sola, por más que haya necesidad de espacios verdes. Tiene que estar vinculada al trabajo de la cooperativa y a la impronta que tiene en el barrio.

⁵⁰ Dentro de las medidas de aislamiento social obligatorio, se definieron actividades que estaban exentas de la prohibición de circulación, por considerarse “actividades esenciales”. Las organizaciones sociales que realizaban actividades vinculadas a la atención de servicios alimentarios, como comedores y merenderos, o bien, como la producción de alimentos, contaban con el permiso de circulación. La recolección de residuos reciclables no se consideró esencial en un comienzo, y luego se fue habilitando de manera gradual, pudiendo dar continuidad a sus actividades en los lugares de trabajo.

Tiene que tener y ser algo que transmita lo que hace la cooperativa, y la esencia de la cooperativa. Tiene que ser un parque temático. No podemos poner plantas africanas, o árboles mexicanos, tiene que tener plantas nativas... Entonces, se le da un significado y conceptualmente algo diferente a lo que veníamos trabajando (entrevista realizada en febrero del 2023 a quien es referente y coordinador de la Cooperativa, varón de entre 40 y 50 años).

Retomando a Gago, podemos visualizar una suerte de “autonomía de facto” (Gago, 2015: 185) que se desplegó, o bien gracias al estado de excepción que significaron las medidas de aislamiento, o bien a la necesidad de dar respuesta a la resolución cotidiana de la vida. Como sea, entendemos que esa apertura permitió consolidar algo que ya se venía desarrollando, y que no declinó al momento de retorno a la normalidad.

Resulta interesante detenerse en la adjetivación “de facto” de estas autonomías, para distinguirlo de los debates que los movimientos habían atravesado al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, alrededor del posicionamiento “autónomo” o no respecto del Estado. En el proceso relatado, sin que sea parte de un debate político, esas autonomías demostraron desplegarse en la práctica.

Esto nos lleva a reflexionar, que siendo distinto el posicionamiento y la relación con la estatalidad en cada caso, luego de 25 años de emergencia de este “nuevo sujeto”, el despliegue de los procesos territoriales, productivos y organizativos presenta similitudes. Más allá del carácter dinámico de los procesos, el ejercicio de la autonomía para delinear estrategias de uso de los espacios, de resolución de las dinámicas cotidianas, de resolución de las necesidades, es un recurso con el que las organizaciones hoy cuentan.

“Hoy vivimos un momento de crisis de representatividad como nunca habíamos vivido. Mucho más grande aún que la del 2001, pero que nos encuentra con un universo muchísimo más rico de organizaciones populares. Que en toda la región nos permite ir construyendo autonomías, que no son zonas

liberadas, que tienen que ver con la capacidad de preservar la vida de los nuestros en determinados territorios, que cada construcción va determinado. Pero en donde esa manera de garantizar la vida, tiene que ver con otro modo de fraternidad, otro modo de producción, otro modo de consumo, con otro modo que está muy lejos de la selva que nos propone el capitalismo”, (entrevista realizada en mayo de 2023 a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de aproximadamente 60 años).

Y en ese sentido de construcción de autonomía, la “huerta” tomó un rol particular más, por permitir desplegar la identidad propia de estos trabajadores y sus trayectorias de lucha, en la vinculación con el entorno. No es “una plaza más”, o “un espacio verde más” el que se busca ofrecer, sino que lo que se pretende es compartir con el barrio un sentido particular de organización de lo social; transmitir una trayectoria de lucha colectiva y popular, que resiste al destino de descarte que el sistema tiene para ellos; mostrar cómo desde el descarte, se transforma, se recicla y se recuperan formas de vivir con dignidad.

4.2.1.3. Entre la producción y la reproducción: el trabajo comunitario

Otro elemento para analizar, son los sentidos que intervienen sobre la categoría “trabajo” en las experiencias, así como también la idea misma de “lo productivo”. Recuperando los aportes de Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman (2019) señalados en el Capítulo 2 respecto de las formas de producción de lo común, resulta pertinente retomar las nociones de “trabajo concreto” y “trabajo abstracto” de Marx ([1867], 2000). Según el autor, el trabajo en el capitalismo adquiere un carácter abstracto, que lo reduce a una valoración social como mera “sustancia de valor” o “puro trabajo”, que produce valores de cambio, y el cual se presenta escindido de la vida del trabajador. Esta se invisibiliza en el ámbito privado del hogar, y su reproducción es posible gracias al trabajo (concreto) no reconocido de las mujeres sometidas a la división sexual del trabajo. Lo “productivo” aparece aquí como atributo exclusivo del trabajo organizado por el

capital, diferenciándose del trabajo doméstico. Éste queda invisibilizado como trabajo e invalidado en cuanto a su función social.

Por el contrario, el trabajo en el marco de un sistema de producción de lo común, no está escindido de las condiciones de reproducción de la comunidad. Se asemeja a la noción de “trabajo concreto”, como aquel que produce cosas para su uso. Los bienes que producen forman parte de la riqueza social que es aprovechada por la comunidad, y mediante la cual se realiza la reproducción de la vida. También estos bienes producidos pueden ser aprovechados por otras personas, a través de mecanismos de intercambio, pero no subordinados a la lógica del mercado, sino bajo criterios definidos por la propia comunidad, tema que retomaremos en el siguiente apartado.

Siguiendo el hilo de esta caracterización de Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman, podemos identificar que los tiempos que organizan el trabajo y la producción, tampoco son los tiempos del capital, sino el ritmo de las necesidades de la comunidad. No hay una presión por la disminución del tiempo de trabajo, o por el aumento de productividad, ni la ampliación de la generación de valor, como sí lo establece la cadena de montaje. De lo que se trata, por el contrario, es de realizar la capacidad productiva del trabajo en una tarea que resulte útil a la comunidad, que resuelva alguna necesidad o propósito definido como prioritario por el conjunto.

Estos elementos pueden encontrarse en la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste, a partir del replanteo que realizan durante la pandemia sobre la organización del trabajo. Según relatan, tales debates se originan en cierta medida, a partir del interrogante que empiezan a compartir acerca del horizonte de la cooperativa: *“uno puede caer en amesetarse. Tengo la cooperativa, laburamos, y lo que hacemos es juntar material. Podemos vender cartón toda la vida, pero no es la idea”* (entrevista realizada en febrero del 2023 a quien es referente y coordinador de la Cooperativa, varón de entre 40 y 50 años aproximadamente).

Esto da lugar a que la Cooperativa revise estrategias para integrar a aquellos trabajadores que por diversos motivos, ya no se encuentran en condiciones de asumir el desgaste que implica la recolección de residuos en calle. La huerta y el Eco-Parque están dentro de ese propósito. Por otro lado, implica preocuparse por la formación y capacitación de los integrantes de la cooperativa, no en relación al sistema productivo de recolección en sí, sino en un conjunto de saberes y capacidades que hacen a la dignificación de los trabajadores (como la posibilidad de alfabetizarse, formarse en otros oficios) y que esos esfuerzos se vuelquen en beneficios también hacia el colectivo.

“Armamos un sistema más benigno para los propios compañeros. Incorporamos un taller textil; un taller de eco-arte, donde las compañeras aprovechan materiales que se descartan para hacer objetos de arte; tenemos un taller de sublimación, sublimamos remeras para la cooperativa, gorras de la cooperativa, donde un compañero se puede llevar un mate con el logo de la cooperativa. Tiene esto de fomentar que hay muchas cosas que se pueden hacer y todos suman a un proyecto en común”, (entrevista realizada en febrero del 2023 a quien es referente y coordinador de la Cooperativa, varón de entre 40 y 50 años aproximadamente).

Si observamos el caso del Polo Productivo Arenaza, la discusión sobre el trabajo se orienta más en función de repensar la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo. Se recupera una mirada feminista en clave de jerarquizar el trabajo vinculado a los “cuidados” y asumirlo como parte del trabajo de la economía popular en el ámbito comunitario:

“Venimos de un debate en la organización de que el cuidado sea más colectivo. Y un poco eso también le da otro marco a la organización. El [Movimiento] Evita viene dando un salto al feminismo hace ya años. No es lo mismo ser parte de una fuerza que no respeta a las compañeras. Y eso también nos da a las mujeres un sentido de pertenencia. Queremos terminar de armar la

rama de cuidados, y ahí estamos con la discusión si los cuidados van de la mano de la educación o no” (entrevista realizada en febrero 2023 a una referente del Movimiento Evita de San Isidro, mujer de entre 30 y 40 años, responsable política en el territorio).

El debate en torno a la definición de los trabajos reproductivos está en pleno desarrollo, pero por el momento se los caracteriza en función del tipo de trabajo (espacios de primera infancia, servicios alimentarios en comedores y merenderos, mantenimiento). Otros trabajos, como lo que aquí definimos como prácticas agrícolas urbanas (en este caso, representadas en las unidades productivas de la chacra, la huerta-vivero y la granja), que podrían pensarse como actividades reproductivas comunitarias, son definidos como trabajos “productivos”. Lo que entendemos es que más allá de estas distinciones semánticas, en ninguno de los dos casos aparece la relación con el mercado como característica principal para definir estos espacios (lo productivo en relación al mercado, y lo reproductivo aquello que se circunscribe a lo doméstico/comunitario), sino que producción y reproducción se funden en un trabajo para lo común, implique este el aprovechamiento que sea (el cuidado del niño, el consumo de alimentos, el abastecimiento de comedores, o bien la venta en el mercado de algún excedente).

Si lo relacionamos con la noción de “trabajo comunitario”, tal cual nos lo planteaban Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman (2019), se asemeja con la producción de “bienes comunitarios” para el uso común. Se trata de valores de uso comunitario, que pueden constituirse en valores de cambio para el intercambio con otros, en función de criterios definidos políticamente y no por la ley del valor. En ese sentido, podríamos pensar que el sujeto trabajador empieza a tomar conciencia y a identificarse con un sentido más amplio del trabajo.

Aquí resulta interesante recuperar la noción de “fondo de trabajo” que desarrolla Coraggio (2010: 84) para describir el funcionamiento de las unidades domésticas familiares, aunque es utilizable también para pensar agregaciones más amplias, como las “comunidades”. Recordemos que el fondo de trabajo es la “cuenta” que permite reconocer los distintos trabajos

(reproductivos y mercantiles -asalariados o no-) como parte de las estrategias de reproducción de las unidades domésticas. Éstos trabajos se desarrollan en el marco de un sistema de intercambios con las economías estatales (a través de impuestos y subsidios por bienes y servicios públicos) y la economía empresarial (mediante operaciones de compras y ventas de bienes y servicios), que también intervienen en la reproducción social.

Lo que podríamos agregar desde esta perspectiva, es la creciente concientización de estos colectivos acerca de la relevancia del trabajo reproductivo en los ámbitos comunes, en relación al conjunto de estrategias productivas que manejan. Creemos que el despliegue de procesos de trabajo y producción orientados al autoconsumo colectivo, cobran una presencia y valoración creciente, respecto de las actividades de trabajo orientadas al mercado, cuestión que como vimos, habían estado muy presente en la etapa en la que todos los movimientos ensayaron estrategias productivas vinculadas al desarrollo de “microemprendimientos mercantiles”. En algunos casos, esto se da porque existe una historia que se origina en ese resolver en común las necesidades (como el Movimiento Evita o el Movimiento Popular Los Pibes). En el caso de la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste, cuyo origen colectivo se encuentra en la mejora de las condiciones de un trabajo determinado, como la recolección de materiales reciclables, esta valoración de “otras actividades” se da por una búsqueda de ampliar sus horizontes políticos.

No es posible no vincular este fortalecimiento de lo reproductivo en los ámbitos colectivos, sin establecer un correlato con el desmantelamiento del trabajo asalariado como forma principal de organizar “lo productivo” en la sociedad, y con la ampliación de la crítica que las luchas feministas instalaron en relación a las formas patriarcales que sostienen tal dispositivo de división entre “lo productivo” y lo “reproductivo”.

En ese sentido, recordemos el modo en que aparecía “lo productivo” en las tres perspectivas teóricas analizadas, que confrontaban con la mirada neoliberal de la informalidad que las consideraba “improductivas”. Por un lado, en la perspectiva clásica, se buscaba demostrar la capacidad y potencial productivo de estas economías, y la necesidad de ampliar su

influencia, más allá de las estrategias de sobrevivencias o la “economía de la pobreza”. Por su parte, desde la perspectiva de la economía popular impulsada por los movimientos sociales, el argumento se centraba en demostrar la capacidad de generar valor de este sector, el cual es apropiado por sectores rentísticos, por lo que es preciso romper esas relaciones de subordinación para que el valor quede dentro del sector popular. Respecto a la mirada de las economías populares, también se hace énfasis en la capacidad de generación de valor de cambio de este sector y los mecanismos de extracción de valor que el capital ejerce sobre él. Pero al mismo tiempo observa cómo el despliegue de esa capacidad productiva exhibe la persistencia de lógicas neoliberales, adaptadas a las formas populares, o bien, una forma popular, “abigarrada”, de producir lógicas neoliberales.

Ahora bien, y a la luz de lo que nos demuestran las experiencias analizadas, podemos pensar que el despliegue de estrategias económicas desarrolladas en los años recientes, más que una “ampliación del canon de la producción”⁵¹, lo que se amplía es el “canon de la reproducción”. Si comparamos con los procesos económicos que se desplegaban en los años ‘90 y 2000, las condiciones de vida que permiten resolver y garantizar estas organizaciones desde sus estrategia económico-productivas, es considerablemente más elevada. Esto no sólo tiene que ver con las transferencias monetarias de la economía estatal que se han logrado volcar al sector, sino con la orientación que tienen las mismas hacia el fortalecimiento de los entramados comunitarios, que de algún modo nos revelan cierta reapropiación de la riqueza social para “el común”, desmercantilizando una cantidad de necesidades para la reproducción de la vida.

En ese sentido, sostenemos que lo significativo de estas particularidades encontradas en el desarrollo de un trabajo que identificamos como “trabajo comunitario”, visible en estas experiencias, es el sentido político que lo comunitario adquiere en este contexto, asociado a la reproducción colectiva, a diferencia de lo que ocurría en los años ‘90, donde lo comunitario se circunscribía a los límites de “lo social”. Se trata de un trabajo que produce bienes y servicios

⁵¹ Retomando la tesis del trabajo de Santos, B., & Rodríguez, C. (2011).

para el usufructo colectivo. En ese sentido, el rol de los subsidios del Estado sobre estos mecanismos comunitarios de reproducción (inversión en infraestructura comunitaria, en el desarrollo de unidades productivas colectivas), lejos de interpretarse como funcionales a la consolidación de “economías de la subsistencia”, podrían estar contribuyendo el despliegue de “horizontes populares comunitarios”, al tiempo que ejercen un rol de redistribución sobre aquello que el capital expropia al trabajo.

No está claro en qué lugar queda el mercado y las diversas formas de intercambio en las estrategias de trabajo de estas experiencias, y si acaso no estamos ante formas incipientes de “desmercantilización” de necesidades, que ahora logran y buscan resolverse en el ámbito comunitario.

4.2.1.4. ¿Otros mercados posibles o posible desmercantilización?

Habiendo puesto gran centralidad en la búsqueda de elementos que reflejen “lo comunitario” de los procesos económicos, las dinámicas de intercambio no aparecieron problematizadas particularmente en los distintos relatos. No obstante, algunos señalamientos.

La Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste es de las tres experiencias la que históricamente lleva adelante actividades comerciales relevantes a partir de la venta del material recuperado, aunque siempre en el marco de un programa de co-gestión con el Estado que sostiene parte de los ingresos. Aún así, han señalado, por ejemplo, la ausencia de mecanismos estatales que regulen el precio de esas transacciones, perdiendo importantes sumas de excedentes.

Los proyectos productivos de las economías populares presentan problemas cuando se someten al mecanismo de mercado, dado que sus condiciones desventajosas en términos relativos las ubican por arriba de la media de precios, teniendo que recurrir a distintas estrategias para lograr realizar sus productos en el intercambio: generar circuitos comerciales más cortos que eliminen costos, posicionarse en nichos de mercado para consumidores con alto poder adquisitivo (productos artesanales, agroecológicos), recurrir a la autoexplotación del trabajo,

abaratar la calidad de insumos utilizados, etc. Es una sábana que siempre queda corta, y lograr un circuito que beneficie tanto al trabajador que produce como al trabajador que consume, pareciera ser más un lema que una posibilidad en las condiciones actuales. De allí la necesidad de pensar el rol del Estado, que intervenga de manera estratégica y no aislada.

Como señalan Gutierrez Aguilar y Salazar Lohman (2019) en las lógicas de producción de lo común, el intercambio existe pero los términos y acuerdos de los mismos no están definidos por el valor de cambio equivalente que se define en el mercado capitalista. El intercambio es un ámbito de la política; requiere acuerdos, relaciones, definiciones.

En términos de Polanyi ([1944] 2007), podríamos decir que el mercado se construye socialmente. Es uno de los tres principios de institucionalización de lo económico⁵², que bajo el libre mercado se absolutiza y termina regulando la totalidad de relaciones sociales. Si de lo que se trata es de “re-institucionalizar el mercado” para que se oriente en función de la reproducción de la vida, identificarlo como un ámbito de la política le introduce un conjunto de variables que entendemos clave para no reproducir la lógica de la ley del valor. Allí aparecen las relaciones de poder, el desarrollo de estrategias colectivas para intervenir sobre ellas, la construcción de procesos en donde lo económico contribuya al fortalecimiento de un horizonte político particular, son variables clave que se ponen en juego. No se trata sólo de ver en conjunto de qué manera organizar una transacción, un intercambio, sino de ampliar la mirada más allá de ello.

Algo de esto se pone en evidencia, a partir de una experiencia relatada en las entrevistas a referentes del Movimiento Popular Los Pibes. Como describimos anteriormente, la huerta de este Movimiento se desarrolló en el marco de un debate iniciado en 2014, mediante el cual definen abordar la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento como eje de trabajo. Siendo una organización históricamente ligada a las políticas alimentarias estatales (y a los esmeros siempre presentes de convertir el asistencialismo que propone el Estado, en organización popular), se inició un proceso que buscó orientar los subsidios alimentarios que habitualmente

⁵² Los otros dos principios que desarrolla Polanyi ([1944] 2007) son la autarquía y la reciprocidad .

se recibían para la gestión de comedores y merenderos, a la compra de alimentos de la agricultura familiar a organizaciones con quienes ahora compartían un mismo espacio de representación en la CTEP. En lugar de abastecerse en los mayoristas de las cadenas de supermercados, como ocurre habitualmente en los miles de comedores y merenderos que asiste el Estado, se empezó a comprar a cooperativas y unidades productivas populares, como decisión política, más allá de la evaluación de precios.

Las familias integrantes de la organización empezaron a recibir pollos de campo, verduras agroecológicas, quesos, productos de empresas recuperadas, y emprendimientos de la agricultura familiar. Una suerte de “compra pública” a la agricultura familiar, instrumentalizada por decisión de la propia organización beneficiaria de los subsidios, que podría verse como una estrategia de comercialización popular. Los resultados señalados fueron muy positivos. Con un mismo subsidio se beneficiaba no sólo al consumo, aumentando la calidad, sino también a los emprendimientos populares de la agricultura familiar. Por supuesto, toda esta implementación requería permanentes discusiones con la contraparte estatal, en relación al precio y cantidad de raciones que se involucraban en el subsidio. Para sorpresa, sin embargo, señalan la poca replicabilidad impulsada por el Estado de experiencias de este tipo, predominando una mirada cuantitativa del subsidio, que visualiza cantidad de beneficiarios y no el entramado social que produce y se promueve.

En paralelo, cuentan que al intentar ubicarse en el rol de “comercializadores” de estos productos para llegar a más familias del barrio, y resolver allí el resto del consumo alimentario (sin el subsidio estatal para la compra), resultó en un proceso dificultoso. Tanto en la feria semanal del Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, que recordemos, funcionaba en el mismo predio que la huerta, como en nuevos almacenes populares organizados para tal fin, la tendencia siempre presente era que los consumidores de estos productos terminaban siendo de los barrios de clase media aledaños, motivados por un consumo alternativo, y no de los propios compañeros. Los precios a los que se podía ofrecer la mercadería, aún sin ganancia y sólo

cubriendo los costos, no lograban ser inferiores a los de las cadenas de hipermercados, al tiempo que la variedad de productos era limitada. El dispositivo no servía para ofrecer a la propia comunidad una solución a su necesidad, y la iniciativa se convertía en un microemprendimiento mercantil de comercialización que no aportaba a la construcción territorial. Aparecía el debate acerca de la dificultad de que el alimento fuese un bien mercantilizado y no un derecho que debiera ser garantizado, por lo que se volvía necesario quitarlo del ámbito del mercado. Así como la educación es un servicio público, la alimentación podría llegar a serlo también, y en ese camino, el rol del Estado en articulación con las organizaciones sociales podría ser una estrategia válida para la construcción de una verdadera soberanía alimentaria.

Mencionan la excepción (y lo que consideran una referencia a replicar) lograda a partir de la compra conjunta de pescado para Semana Santa a pescadores artesanales por parte de varias de las organizaciones integrantes de la CTEP en aquel tiempo (“Pescado para el Pueblo”). Una compra coordinada en escala que permitió mejorar el precio de venta a los pescadores, a la vez que permitió llegar con un precio al consumidor por debajo del mercado, logrando efectivamente que el intercambio se de “de las manos del productor a la mesa del trabajador”. Ahora bien, se trató de una experiencia más de organización política que comercial (Marcha, 1/4/15), y que se repitió contadas veces. Nos referimos a que el objeto de la articulación o relación entre las distintas partes, se dio a partir de compartir un mismo horizonte político, que fue el fortalecimiento de las condiciones del conjunto de trabajadores del sector, tanto quienes producen como quienes consumen. Se trató de desdibujar los límites entre lo económico y lo político, evitando reproducir la lógica de la ley del valor al interior de las transacciones económicas. En ese sentido, se vincula con la definición de Gutierrez Aguilar (2017: 12) respecto de lo político como “la organización de los modos en que se produce y aprovecha el usufructo común” . Los “otros mercados” podrán ser solidarios, en la medida en que incorporen la dimensión política en sus estrategias económicas.

En síntesis, lo relatado expresa la paradoja de la “sábana corta” del mercado y la necesaria intervención del Estado y los acuerdos entre organizaciones, como condición para el desarrollo de lógicas de intercambio a nivel meso en el marco de la producción de lo común, más allá de la centralidad de los precios como referencia para los intercambios y el acceso a nichos de mercado, como posibilidad para la ampliación de la producción.

Frente a estas dificultades, no pareciera ser una opción poco razonable que las economías populares orienten esfuerzos a fortalecer lo propio a través del trabajo de autoabastecimiento, sin abandonar en el horizonte la construcción política de otro mercado con la necesaria intervención del Estado (Mazzeo y Stratta, 2021).

Se pensó en vender alimentos, pero al ser baja la escala, es para el consumo interno. Los primeros que consumen son los que trabajan en la huerta, y después se lleva una vez por semana cajones a la planta de Varela para que con esa verdura se cocine al resto de los compañeros. Que el compañero que viene a trabajar que solamente labura en calle, puede venir y si hay mercadería, se la lleva, (entrevista realizada en febrero del 2023 a quien es referente y coordinador de la Cooperativa, varón de entre 40 y 50 años aproximadamente).

En ese sentido, las experiencias analizadas reflejan un despliegue significativo en sus estrategias de desmercantilización de necesidades.

4.2.1.5. De inventar trabajo a “producir trabajo”

Un último aspecto a analizar, es la cuestión de cómo interpretan que se origina el trabajo. En el marco de la descripción de todas las unidades productivas que hoy forman parte del Polo Productivo Arenaza, una de las entrevistadas señala: *“Nosotros no sólo producimos cosas materiales, sino también producimos trabajo”* (entrevista realizada en febrero 2023 a una referente del Movimiento Evita de San Isidro, mujer de entre 30 y 40 años, responsable política en el territorio). En ese relato se refiere a la cantidad de personas que diariamente circulan por el

predio, realizando distintos tipos de tareas para que todo se mantenga en funcionamiento, significando este hecho como un logro.

Frente al desguace del trabajo que propone el mercado, la economía popular pareciera desoír ese mandato y se propone por el contrario, crearlo. Y esa posibilidad de crearlo se encuentra íntimamente ligada al hecho de contar con un predio donde estar, permanecer, desarrollarse. *“Tener un lugar nos permite no estar a la deriva”*. El predio propio ordena la tarea, así como también, permite cobijar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras de ese mundo exterior salvaje que no ofrece oportunidades. Y además, representa un refugio para momentos de crisis. Las unidades productivas asociadas a las prácticas agrícolas urbanas contribuyen en la consolidación de estos “predios-refugios”⁵³.

Ahora bien, el tipo de trabajo que se crea en estas condiciones, siguiendo la conceptualización de unidad doméstica, es mayormente un trabajo reproductivo, destinado al autoconsumo, y en menor medida un trabajo de producción de bienes o servicios para el mercado. Sostener un espacio común conlleva mucho trabajo y el producto de ese trabajo, se usufructúa en común. De manera que una vez más hay un “trabajo que se inventa”, que el mercado no organiza, pero que resulta útil. Produce valor, en este caso, valor de uso.

En este sentido, nuevamente se pone en cuestión el sentido de estas actividades o bien como trabajo improductivo, de baja complejidad, o bien como trabajo comunitario que produce riqueza común para el usufructo común. La convergencia de intereses y mutua complementariedad entre la economía feminista y la economía popular aparece aquí muy evidente.

Por todo lo expuesto en este apartado, entendemos que las prácticas agrícolas urbanas desplegadas en los tres casos analizados se inscriben en un proceso mayor de revalorización y

⁵³ Hasta dónde poder sumar compañeros, es un tema en debate, sobre todo presente en la Cooperativa RUO, desde donde entienden que el sistema de reciclado como lo tienen armado tiene un techo de aproximadamente 1000 familias, límite que si se quisiera ampliar, pondría en riesgo la sostenibilidad del mismo.

restitución de lo común que las economías populares vienen desarrollando desde las distintas identidades, recorridos políticos y formas organizativas, a partir de los escenarios de derechización y retroceso de los proyectos nacional populares que empezaron a vislumbrarse en los años recientes.

4.2.2. Prácticas agrícolas urbanas como territorialidades de la defensa

El segundo núcleo de aspectos a analizar se refiere a las dinámicas del conflicto social que pueden estar desarrollándose en estas experiencias. Y en ese sentido, entendemos que los procesos de “territorialización” son un modo en que se expresan y producen tales procesos de conflictividad social.

Tomamos de la noción de territorialidad de Sack (1986), que la entiende como la estrategia de un individuo o un grupo, para controlar recursos o personas, mediante la delimitación de áreas geográficas específicas, llamadas “territorios”. Recuperando los aportes de Manzano Fernandes (2008), entendemos que esas territorialidades están en disputa, y representan intereses divergentes entre distintos actores (en el caso de Manzano Fernandes, observa la territorialidades en disputa en los ámbitos rurales).

La cuestión del desarrollo de espacios productivos comunitarios en predios urbanos, nos llevó a indagar acerca de la relación de estos procesos con las disputas en torno a los espacios urbanos. Las dinámicas de extractivismo urbano⁵⁴ fueron configurando en los últimos años nuevos conflictos en torno al acceso de la ciudad, generando amplios procesos de despojo y corrimientos poblacionales para liberar terrenos que sean aprovechables para los negocios inmobiliarios. Esta dinámica se encuentra presente en las entrevistas realizadas:

Obviamente en los lugares del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires la disputa por el acceso a la tierra es la disputa central. En el barrio de La Boca, la política de desalojo que venimos conociendo desde que entramos al barrio,

⁵⁴ De igual modo que los procesos extractivos analizados sobre los recursos naturales y el consumo, el extractivismo urbano se refiere a la lógica de acumulación que se da en las ciudades en base a la apropiación de espacios verdes, terrenos y edificios públicos, para la especulación inmobiliaria.

que después le pusimos el nombre de extractivismo urbano, de gentrificación -o le pusieron los intelectuales, a lo que nosotros veníamos conociendo como experiencia empírica-... En esas experiencias, uno va viendo de qué forma de generar pequeños bastiones de resistencia (Entrevista realizada en mayo de 2023, a referente del Movimiento Popular Los Pibes, responsable de la coordinación nacional, varón de entre 40 y 50 años de edad).

Tal como fue caracterizado por Gallardo Araya en el trabajo ya citado (2016), las huertas urbanas comunitarias expresan “modos de habitar la ciudad” que entran en conflicto con propuestas antagónicas sobre el uso del espacio, llevando en ocasiones al desalojo de las mismas por la fuerza pública.

Ahora bien, entendemos que las disputas en juego en los casos analizados no se explican específicamente por la defensa de un “modo de vida” (aunque lo incluye), sino que contienen además una amenaza más profunda.

Volviendo a Federici y su caracterización de la dinámica de despojo del capital sobre el trabajo en la era globalizada, lo que pareciera estar en juego es la subsistencia misma. Cuando ya no hay más que expropiar, lo que va quedando, es la propia vida. Esa sensación de límite que puede estar jugando un rol en los procesos analizados, nos llevó entonces a preguntarnos por las dinámicas de conflicto subyacentes en la ocupación y defensa de estos espacios colectivos. ¿Por qué es tan importante para las organizaciones ocupar y mantener estos predios? ¿Por qué los defienden? ¿De qué se están defendiendo?

4.2.2.1 Fortaleciendo trincheras

Como señalamos en el capítulo 3, el cambio de ciclo político de 2015 en nuestro país, significó un rápido alineamiento con las dinámicas de dominación globales, que significaron una fuerte embestida contra los sectores populares (caída del empleo, de salarios, endeudamiento extraordinario con el Fondo Monetario Internacional, etc.). No obstante, muchas de estas reformas permanecieron en el tiempo, aún con el cambio de signo político en 2019.

Recordemos que durante el gobierno de Cambiemos se profundizó particularmente la criminalización de la protesta social, la represión y violencia policial, la persecución política. Se produjo un aumento en la inversión del Estado en armamento y tecnología para equipar a las fuerzas de seguridad, que se volcó al servicio de la represión de la protesta social.

A la luz de los trabajos de Eric Alliez y Maurizio Lazzarato desarrollados en el Capítulo 2, este contexto bien puede relacionarse con los cambios en los dispositivos de guerra que la etapa actual del desarrollo del capitalismo está desplegando. Recordemos que los autores identifican la noción de la guerra, no como una excepcionalidad histórica, sino como un dispositivo constitutivo del desarrollo del capitalismo, que sirve para ordenar los territorios, naciones y poblaciones a los fines de la acumulación que cada etapa histórica requiere.

Ahora bien, en la etapa actual de financiarización del capital, la hegemonía en disputa tiene un carácter global y se instrumenta a través del dinero y la deuda. Este tipo de imperialismo es distinto al del siglo XIX, dado que no se trata de controlar Estados en pos de conquistar territorios sino de controlar directamente a las poblaciones:

“En la mundialización contemporánea, el espacio de acumulación es transnacional. Por consiguiente, las modalidades de incursión y de continuación del conflicto serán menos redefinidas en función de los Estados que respecto a las poblaciones globalizadas que deben ser sometidas a su lógica” (Lazzarato y Allier, 2022: 349).

Si el proceso de acumulación requiere someter a las poblaciones para llevar adelante los procesos de despojo y extracción de valor (de sus territorios, de sus condiciones de vida y reproducción), y ésto no es un proceso que pueda llevarse adelante de manera pacífica, es preciso que el poder despliegue mecanismos de guerra adaptados a estas condiciones.

Este tipo de *guerra contra las poblaciones* parte de una concepción de enemigo irregular, mezclado dentro de la población, al que se controla a través de controlar el medio en el que se encuentra. Por eso, este tipo de “máquina de guerra”, como llaman Alliez y Lazzarato a

estos dispositivos, retomando a Deleuze y Guattari, va de la mano de esquemas sofisticados de *securitización*, es decir, del empoderamiento de las fuerzas de seguridad estatal y el uso de la violencia policial como mecanismo de control del entorno. No sólo más fuerzas de seguridad, sino también, organizadas bajo un enfoque que traslada la mirada de defensa exterior, hacia la defensa interior. Los suburbios se convierten en los campos de batalla, combinado con dispositivos de propaganda que legitiman la violencia frente al enemigo oculto, el pobre, el negro, el disidente.

En una de las entrevistas realizadas, el escenario de guerra contra las poblaciones aparece también identificado en el narcotráfico como dispositivo específico desde donde el poder opera para dominar los territorios y las construcciones:

“(...) las experiencias organizadas permiten generar una reflexión más ordenada. Permiten dar saltos cualitativos en lo ideológico, que son los que van permitiendo construir otro paradigma. Ya no se trata sólomente de la construcción de las huertas, de otras economías en sí mismas, para el mientras tanto, sino para construir en lo que todavía no terminó de morir, lo nuevo. Para construir hasta una manera de sobrevivir a la agresión permanente que hoy tiene el capitalismo sobre los nuestros, donde te rompe el tejido social, te fragmenta la sociedad, te rompe las organizaciones comunitarias, las organizaciones libres del pueblo, y donde ha sofisticado hasta la aplicación de la violencia explícita. Ya no son solo las policías y las fuerzas armadas las que reprimen, sino que hay un entramado del narcotráfico y delincuencia organizada, que en definitiva, en la medida en que van convirtiendo a nuestros Estados en Estado fallidos, van erosionando y robándole el futuro a nuestro pibes y pibas” (Entrevista realizada en mayo de 2023, a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de alrededor de 60 años de edad).

La ocupación y despliegue sobre estos predios, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar instancias de producción y reproducción colectiva (o como elegimos denominarlo en este trabajo, como procesos de “producción de lo común”), que al mismo tiempo, funcionan como trincheras. Trincheras desde donde resistir y defender lo construido, desde donde resistir la embestida del poder sobre las poblaciones humildes y desde donde fortalecer el tejido social comunitario.

Las prácticas agrícolas urbanas en ese sentido, han sido una herramienta útil en clave de esta estrategia, ya que permiten plantar bandera de manera ágil sobre terrenos de dimensiones importantes.

“[La huerta] te permite tomar posición y posesión. Lo que pasa acá en Caballito, este predio está tomado. La cooperativa tomó este predio, somos “intrusores” del predio. El predio es de los Ferrocarriles, de Nación. En su momento la veña la dio el gobierno de la nación, que era oposición al gobierno de la ciudad. Cuando Macri asumió la presidencia tuvimos 4 años de mucha tensión, a punto de ser desalojados por la fuerza. Eso también nos hizo preguntar qué uso le vamos a dar al predio, porque tenemos que resignificar el espacio para que sea más difícil expulsarnos, entonces la creación del parque temático, la huerta... Además estaba toda la presión del barrio por el espacio verde, el holding inmobiliario para obtener los terrenos, había mucha presión por fuera. No podemos quedarnos tranquilos con esto”, (entrevista realizada en febrero del 2023 a quien es referente y coordinador de la Cooperativa, varón de entre 40 y 50 años aproximadamente).

El cultivo hortícola de pequeña escala, requiere pocos insumos para llevarse adelante. En primer lugar, el espacio. Si el terreno tiene cemento en lugar de suelo (tierra), es cuestión de armar canteros con neumáticos o madera reciclada (pallets), conseguir tierra (que resulta ser el insumo más difícil de obtener) y semillas. Éstas se consiguen a través de distintos programas

estatales, como el mencionado ProHuerta, o bien, hay muchas hortalizas que consumimos habitualmente de las que se pueden obtener las semillas, o propagar de la misma planta. También del intercambio entre huerteros que recolectan sus semillas. Si se precisa acelerar el proceso, se pueden comprar plantines para trasplantar. En síntesis, el armado de una huerta puede demorar entre unos días a unas pocas semanas en armarse. Por lo tanto, si se trata de defender un espacio, es una estrategia a considerar.

Existen referencias de huertas comunitarias en la Ciudad de Buenos Aires, que en el despliegue de estas territorialidades en disputa, terminaron siendo desalojadas por el gobierno de turno, y otras que permitieron a grupos de vecinos defender los espacios, como por ejemplo, lograr que un determinado parque no sea enrejado.

No queremos señalar que nunca haya habido despliegue de estrategias de defensa desde los sectores populares frente a las violencias ejercidas desde el poder (recordemos la represión institucional sobre el movimiento piquetero en los orígenes). Lo que recuperamos con Alliez y Lazzarato, es el cambio de estrategia desde el poder global sobre los dispositivos de violencia desplegados en la etapa actual.

Ahora bien, no se trata de una defensa en sentido de retroceso, sino justamente, defender las conquistas, construyendo nuevas experiencias y despliegues. Dentro de unas limitaciones dadas, adecuarse a lo posible y explotar al máximo esa posibilidad.

“(...) transitamos un proceso de resistencia que no habla de una lectura pesimista. Tiene que ver con el desgaste del enemigo. Una resistencia que acumula fuerzas hasta tanto podamos entrar en una etapa de ofensiva, que desde el punto de vista político está muy lejos de ser lo que podemos, sino que en todo caso articula una ecuación de tres términos, que es: al mismo tiempo que resistimos la embestida, construimos alternativa, y al mismo tiempo, defendemos lo que vamos construyendo”, (entrevista realizada en mayo de 2023, a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de entre alrededor de 60 años de edad).

En ese contexto, la identificación de los predios colectivos y los procesos de trabajo cobran mayor sentido en tanto construcción de “trincheras”. Urge equiparse lo más posible, desarrollar las unidades de producción, y así estar mejor preparados para los momentos de crisis aún más adversos que -se percibe- no demorarán en llegar.

“Yo lo único que veo de cara a futuro, o venimos pensando desde El [Movimiento] Evita de San Isidro, es fortalecer los espacios productivos, fortalecerlos, enfierrarnos como decimos nosotros, con fierros, herramientas y todo lo mejor que podamos estar para que eso sea un colchón para el año que viene y los años que vengan. Porque se cae el Programa [Potenciar Trabajo], por ejemplo, pero tenemos un lugar a donde ir a producir. Y eso en cierta forma, también es tratar de tener lo mejor posible, un lugar donde los compañeros puedan trabajar”, (entrevista realizada en febrero 2023 a una referente del Movimiento Evita de San Isidro, mujer de entre 30 y 40 años, responsable política en el territorio).

Como sostienen Gago y Mezzadra (Gago y Mezzadra, 2015: 15), las nuevas formas de operativizar la cooperación social desde el despliegue de lo común como forma renovada de lo “étnico” y “pretérito” de la noción usual del término “comunidad”, implican la reversión de nuevas normas e instituciones, incluidas la autodefensa.

4.2.3 Economías de la resistencia

En este último punto, nos proponemos desarrollar una caracterización particular de estas economías, como economías de la resistencia. Esta categoría engloba las dos dimensiones desarrolladas en los apartados anteriores (las dinámicas de restitución de lo común y las territorialidades de la defensa). Retomando lo desarrollado en el Capítulo 2, recordemos que con el término economías de la resistencia nos referimos al desarrollo de prácticas que permiten a las economías populares resistir ante la fuerza que opera para desarmar y dominar su existencia. Es en ese sentido que entendemos que se puede estar configurando un nuevo escenario de

trincheras, en donde la autogestión y el autoabastecimiento cobran sentido en clave de defensa. No se trata sólo de desarrollar encadenados productivos populares para avanzar posiciones frente al mercado, sino sobre todo significan la posibilidad de contar con elementos de sobrevivencia ante los mecanismos de dominación actuales. Incluso, en uno de los testimonios esto aparece asociado a un escenario en donde no es posible tampoco imaginar políticas públicas que contribuyan en su crecimiento:

“(…) frente a una guerra que va a durar un par de décadas, en la que los poderes globales están decididos a librarla a bombazos y poner en riesgo el planeta, mientras tanto, nosotros tenemos que ir construyendo condiciones, y condiciones no esperando que haya políticas públicas que promuevan eso. Ya no va a haber gobiernos, excepto contadísimas excepciones, en donde nosotros podamos incluir políticas públicas para que promuevan economías populares, que aunque sea convivan en una economía mixta, en donde sin dejar de existir la economía capitalista, permitan porciones de otra economía. No va a estar. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar modos autónomos de poder desarrollar estas experiencias”, (entrevista realizada en mayo de 2023, a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de alrededor de 60 años de edad)

La dimensión de la guerra no invalida las definiciones que sostienen que la economía popular no es -ni debiera ser- una economía de la sobrevivencia, de la pobreza. Sino que lo que permite es, por un lado, identificar las acciones de sobrevivencia desde un sentido estratégico de defensa ante un escenario mucho más adverso para las mayorías que en tiempos pasados, por lo tanto, estas estrategias se vuelven estrategias políticas. Significan la posibilidad de estar lo mejor posible, organizados y con recursos básicos para atravesar las dificultades, cuando incluso, se advierte la imposibilidad a futuro de contar con la institucionalidad estatal para desarrollar estas experiencias. Volviendo al mismo testimonio, y aclarando que no necesariamente es un discurso

compartido ni aprehendido por el conjunto de experiencias analizadas, creemos que puede ser significativo en términos prospectivos:

“Y esto es todo un cambio de paradigma, porque hubo un tiempo en el cual creíamos [las organizaciones de la economía popular] que podíamos lograr darle otro perfil al Estado. Y hubo experiencias también muy esforzadas pero que se han quedado a mitad de camino. No hay tiempo ya para maquillaje. No hay tiempo ya para medidas parciales. Hay que ir a fondo de cambios estructurales. Y esos cambios por ahora, no los vemos, que vayan a venir de la institucionalidad vigente. Va a venir desde la fuerza desde abajo”, (entrevista realizada en mayo de 2023, a dirigente del Movimiento Popular Los Pibes, varón de alrededor de 60 años de edad).

En este sentido, las dinámicas de restitución de lo común analizadas, que configuran formas que conceptualmente ubicamos como formas de “producción de lo común”, se ajustan pues, al desarrollo de economías de la resistencia. Ese retomar *“las mejores vísceras de los trabajadores y humildes”*, si bien no aparece en estado puro, existe como un criterio organizador, un horizonte que guía el camino, en el despliegue de estas experiencias.

“[Esta experiencia] es la trinchera. Yo creo que los compañeros y compañeras en general, cuando pasan por una organización social que los contiene, que los abraza, que los quiere, cosas chiquitas, no? Eso los cambia. (...) La pandemia nos unió y nos humanizó de acá a la China. Y nos dejó un montón de enseñanzas. Me pasa en el Espacio de Primera Infancia, inculcamos cosas en los pibes y en las pibas que no tienen idea por el contexto en el que viven (...). Esas son las cosas que nos marcan a los militantes, de pensar que todo lo que hacemos, no lo hacemos en vano”, (entrevista realizada en febrero 2023 a una referente del Movimiento Evita de San Isidro, mujer de entre 30 y 40 años, responsable política en el territorio).

La posibilidad de contar con estos espacios de uso común y en poder de las organizaciones, donde desarrollar distintas estrategias de producción y resolución de necesidades, resultan claves en esta etapa del desarrollo de las economías populares. En el marco de la profundización de los procesos de despojo y de los diversos extractivismos promovidos por el capital, el acceso a estos predios se produce necesariamente mediante distintos mecanismos de comodatos, posesión y ocupación de predios. Las prácticas agrícolas abonan a esta estrategia y permiten el despliegue de estas modalidades de resistencia que asumen estas economías. Entendemos que esto nos permite ampliar el registro sobre las alternativas que ensayan estas economías, que ya no sólo intervienen sobre la crisis respecto del trabajo, sino también, sobre una crisis más profunda y epocal.

5. CONCLUSIONES

A continuación, presentaremos las conclusiones a las que arribamos a partir de la presente investigación. El elemento central a destacar, es que encontramos una relación entre el desarrollo de prácticas agrícolas en organizaciones de la economía popular urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires, con las dinámicas de organización y resistencia que expresan las mismas en los años recientes. Visualizamos que la realización de una huerta tiene hoy para los actores estudiados un sentido particular, que torna esta actividad relevante para el desarrollo de sus estrategias y horizontes políticos en el presente.

A continuación, organizaremos los aportes de la presente investigación, en función de cada objetivo propuesto.

5.1. Los debates teóricos en torno a “las otras economías”

En relación al primer objetivo, la indagación teórica de las lecturas que desde Argentina están abordando la cuestión de lo que llamamos “las otras economías”, nos llevó al análisis de tres perspectivas principales: la de la economía social y solidaria, expresada en los trabajos de José Luis Coraggio, la de la economía popular, representada en los trabajos de Alexandre Roig, Pablo Chena y las elaboraciones de las propias organizaciones de la llamada economía popular, y el enfoque de las economías populares propuesto por Verónica Gago. En ella encontramos que el desarrollo conceptual de cada propuesta “camina en paralelo” o dicho de otra manera, resulta complejo identificar los acuerdos y desacuerdos de las distintas lecturas. Entendemos que ello se debe en parte a que cada perspectiva parte de un punto de vista y una epistemología particular, lo que implica que en una cantidad de aspectos se llegan a las mismas conclusiones, en otros, no necesariamente, y en otros, se explicitan diferencias sobre las que pareciera haber distintas fundamentaciones. Cada perspectiva enfatiza en aspectos distintos del fenómeno, lo que requiere de una explicitación de los puntos de vista cada vez que utilizamos una categoría. Esto no ocurre, por ejemplo, al comparar estas tres miradas, con la propuesta de las economías informales, en donde se encuentran los contrapuntos teóricos de manera contundente. Si bien la

diversidad de miradas siempre enriquece, creemos que un diálogo mayor abonaría al mutuo reconocimiento de experiencias y ampliaría el alcance de las mismas⁵⁵.

No obstante, hay elementos que confluyen en los tres enfoques, y que al mismo tiempo, encontramos también resonancia de ello tanto en otros autores, como en las experiencias analizadas: nos referimos a la certeza de la relevancia de las lógicas comunitarias (y solidarias) que forman parte de las experiencias y despliegues de estos sujetos, ya no como un atributo de las sociedades del pasado, sino actualizadas y producidas de manera propia en la realidad presente de los sectores populares de nuestras metrópolis. Prácticas que en la etapa actual empiezan a emerger como condición de su propio despliegue político. En un contexto de crisis profunda como la que atravesamos, que algunos se atreven a describirla como crisis civilizatoria, es decir, una crisis de la forma de organizar la vida humana en el planeta desde hace 500 años, se hace evidente que el antagonismo frente a las lógicas destructivas del capital, se le contraponen la lógica de la vida de los pueblos. De allí que “lo popular-comunitario” aparece ya no sólo como un rasgo cultural o social de los sectores subalternos, sino que resulta una llave para el desarrollo de sus estrategias de lucha política.

Asociado a ello, se desprende de las tres perspectivas (con mayor claridad en Gago), una identificación entre las economías feministas y sus luchas, con las luchas de las economías populares, en tanto que en ambas se trata de romper la explotación que se ejerce sobre ellas, al haber sido recluidas en funciones de reproducción de la vida (familiar y comunitaria). Esta confluencia contribuye en reconocer desde allí su antagonismo con los modos de acumulación del capital, tanto en la sociedad salarial, como en la era post salarial financiarizada y construir su potencial político, permitiendo reorganizar los horizontes de lucha del conjunto de las economías populares.

⁵⁵ Al momento del cierre de este trabajo, se llevó adelante un encuentro de debate que reunió en una misma mesa a Coraggio, Roig, Chena y Pésico, entre otros, organizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (<https://www.youtube.com/watch?v=nCyewq9WPxY>) y días antes, a Grabois y Coraggio, entre otros, organizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento (<https://www.youtube.com/watch?v=8WXO26Y6-yQ>) en donde se repasan muchos de los puntos retratados aquí, lo que demuestra avances considerables en este proceso de diálogo.

A partir de este punto, nuestra indagación conceptual incorporó elementos de otras corrientes teóricas, que nos permitieron ampliar el foco de análisis sobre la relevancia de estas lógicas comunitarias en clave de los horizontes políticos de las economías populares. La perspectiva de la “producción de lo común” como el despliegue de formas anticapitalistas de organizar la reproducción de la vida de los sectores populares en el presente, que trabajamos a través de Raquel Gutierrez Aguilar, Silvia Federici, Huascar Salazar Lohman, y también Verónica Gago, nos ofrecieron una mirada sobre los posibles procesos de “restitución de lo común” que podíamos encontrar en las experiencias. Por otro lado, los trabajos de Alliez y Lazzarato, y también de Silvia Federici, quienes analizan la relación entre guerra y capitalismo, nos permitieron comprender las estrategias de defensa y resistencia que observamos en los casos analizados.

5.2. Los antecedentes históricos de las economías populares en la urbanidad (1996-2023)

Ahora bien, en nuestro segundo objetivo nos propusimos contrastar nuestra hipótesis, no sólo con los casos analizados, sino también, recuperando su genealogía histórica, a modo de recuperar continuidades y diferencias con los antecedentes previos. En ese sentido, realizamos una línea histórica del emergente de las economías populares, particularmente del Gran Buenos Aires, desde mediados de los ‘90 hasta la actualidad, diferenciándolo del sector de la agricultura urbana propiamente dicho. Allí observamos, por un lado los procesos de organización y lucha, sus principales demandas, sus modos de articulación política relación con la estatalidad, y por otro, las características de sus prácticas económicas y de trabajo, especialmente a partir de las prácticas agrícolas urbanas.

En ese sentido, identificamos que durante el primer período definido (1996-2003), si bien existieron experiencias agrícolas urbanas en organizaciones de trabajadores desocupados y excluidos, éstas tenían que ver con las estrategias de sobrevivencia que emergieron por aquellos años para atravesar la crisis. Se trató de experiencias que resultaron ser “una acción más” dentro

del conjunto de acciones de sobrevivencia desplegada por aquellos años, pero no resultaron centrales en el despliegue de estrategias desarrolladas por los movimientos, que apostaron más bien a recuperar el trabajo perdido mediante emprendimientos productivos autogestivos (bloqueras, carpinterías, herrerías, etc.).

Durante el período de gobiernos kirchneristas (2003-2015), muchas de las experiencias económicas desarrolladas por estos actores, tuvieron que ver en una primer etapa, con fortalecer los proyectos productivos mercantiles iniciados en el período anterior, así como también con el desarrollo de iniciativas de hábitat popular y fortalecimiento organizativo (alfabetización, educación popular). En una segunda etapa, una parte importante de este universo se orientó en la implementación de nuevos programas sociales de ingreso social con contraprestación laboral. Se fomentó el armado de “cooperativas de trabajo”, las cuales tuvieron dificultades para el desarrollo de procesos productivos reales. En relación a las prácticas agrícolas urbanas que se habían desarrollado en algunos movimientos, se mantuvo una priorización similar. Existieron experiencias, incluso ahora con financiamiento estatal para su desarrollo, pero no resultó en un eje particularmente desarrollado. Se trató de un ciclo en donde los propios movimientos de desocupados atravesaron un proceso de reconfiguración, que luego de un período de reflujo organizativo, vuelven a emerger, ahora con la identidad de trabajadores de la economía popular, dando lugar a la conformación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular como espacio de representación y construcción política.

En el último período analizado (2015-2023), se produjo un importante crecimiento de las organizaciones ahora identificadas como “economía popular”, que frente a la crisis de los primeros años de macrismo, retomaron la agenda de la emergencia social. Se volvió a ubicar la cuestión alimentaria en el centro, pero esta vez con una mayor elaboración política respecto de esta problemática, y con mayor articulación entre los productores rurales y los trabajadores de la economía popular urbana. La soberanía alimentaria y la agroecología empiezan a formar parte de los discursos y prácticas de las organizaciones urbanas.

En ese contexto, fue significativo el impacto que tuvo en las organizaciones el paradigma de seguridad implementado durante el macrismo, orientado al punitivismo y la criminalización de la protesta social. También fue relevante la irrupción de la nueva ola feminista y la problemática ambiental en la escena política. Se redefinieron los sentidos del trabajo y de lo productivo, permitiendo revalorizar actividades históricamente invisibilizadas, identificadas como “domésticas” o “reproductivas” y asignadas a las mujeres, así como también, el rol político que les cabe en estos movimientos. Por otra parte, se incorpora lo ambiental como un eje de lucha y trabajo. Las medidas de aislamiento social a propósito de la pandemia del coronavirus aportaron elementos para que se profundizaran estas redefiniciones.

Con las nuevas posibilidades de articulación estatal a partir del cambio de gobierno en el 2019, es que advertimos un acento en el fortalecimiento de “polos productivos” y predios comunitarios, como dispositivos de organización del trabajo en este sector de la economía popular. Bajo ese formato las organizaciones fortalecieron unidades productivas en las que se incluyeron desde proyectos productivos, hasta el trabajo de cuidados, la prestación de servicios comunitarios y ambientales, el desarrollo de espacios de formación, y ahora sí, un importante despliegue de experiencias de producción agrícola urbana. Éstas empezaron a formar parte de la agenda priorizada de las economías populares que se organizan en ámbitos colectivos de los grandes centros urbanos.

En síntesis, durante este período, los alcances de los emprendimientos económicos de las economías populares urbanas organizadas en ámbitos colectivos, superan lo desplegado en etapas anteriores, dando lugar a la aparición de ciertas percepciones sobre la necesidad de defender los proyectos y conquistas alcanzados.

5.3. Las estrategias de organización y resistencia de las economías populares a la luz de las prácticas agrícolas urbanas

Así llegamos al tercer y último objetivo de esta investigación, que se propuso indagar con mayor profundidad la relación entre las prácticas agrícolas urbanas desplegadas en esta

etapa y las estrategias de organización y resistencia de las economías populares urbanas del Área Metropolitana de Buenos Aires en los años recientes.

Al indagar al respecto, identificamos dos tendencias que constituyeron el núcleo principal del análisis de la presente investigación: (i) la apuesta por organizar procesos de trabajo que fortalezcan las tramas populares comunitarias y la restitución de “lo común”, como horizonte político de estas economías y (ii) el desarrollo de territorialidades que llamamos “de la defensa”, que pretenden preservar las construcciones y conquistas logradas a lo largo de los años, en el contexto de emergencia de nuevos dispositivos y paradigmas de violencia asociados a los mecanismos de acumulación de capital actual. Estas características vistas en perspectiva, me permitieron identificar una tercer tendencia general: (iii) ambas dinámicas forman parte de lo que definimos como “economías de la resistencia”, en tanto desarrollo de procesos de sobrevivencia frente al advenimiento de contextos adversos. Una sobrevivencia que no resulta funcional a la reproducción de la pobreza, sino que aparece en clave positiva como estrategia política: poder preservarse, mientras se sigue construyendo y defendiendo.

A continuación, presentamos con mayor detalle estos elementos.

5.3.1. Dinámicas de restitución de lo común

En primer lugar, observamos en las experiencias analizadas un despliegue de dinámicas que recuperan la noción de “lo común”, como formas colectivas de “hacer economía”, que actualizan en el presente una lógica anticapitalista de resolver la reproducción de la vida apelando al colectivo. Para esto, las experiencias tuvieron que poner en marcha procesos de reapropiación de la riqueza social, mediante la recuperación de espacios, saberes y recursos, que se vuelcan a la gestión y usufructo en común. Las prácticas agrícolas contribuyeron en la ocupación y restitución de espacios comunes en ámbitos de extrema disputa como el ámbito urbano, así como también permiten recuperar saberes ligados al cultivo de alimentos y las prácticas autónomas de autosustento.

Relacionado a ello, las experiencias analizadas mostraron un modo particular de

redefinir el sentido del trabajo, así como también lo que se considera productivo o improductivo. Superando el sentido asalariado del trabajo como el socialmente reconocido y “genuino”, aparecieron un conjunto de actividades que ahora se consideran trabajo y que generan valor, contribuyendo a la reproducción de la vida. En ese sentido, cobra un rol muy importante el trabajo socio-comunitario, que ofrece distintas herramientas al colectivo (acceso a cuidados, acceso a una mejor alimentación, posibilidad de formación, etc.). Encontramos que la división entre lo productivo y lo reproductivo empieza a desdibujarse, y se convierte en un mismo proceso de trabajo que produce bienes y servicios para el usufructo común. Actividades que el mercado indica como no productivas, que no resultan en un emprendimiento que brinda bienes y servicios para la venta, y que sin embargo aportan en gran medida a la reproducción de la vida, incluyendo a la comunidad que lo rodea. Las prácticas agrícolas urbanas contribuyen en esta estrategia, en la medida en que producen bienes para el usufructo común, mejoran y embellecen los espacios comunes, resignifican los estigmas sociales, facilitando la integración social.

Siendo que el reconocimiento de la capacidad productiva de estas economías es algo que desde las distintas corrientes teóricas se esfuerzan en demostrar, frente a los discursos que las definían como improductivas, y de allí la necesidad de “ampliar el canon de producción” para el desarrollo de su potencial, lo que vimos en las experiencias -particularmente en el despliegue observado a partir de las prácticas agrícolas urbanas- es que lo que se se amplió en los años recientes, son sus capacidades de reproducción colectiva. Allí es donde la noción de “producción de lo común” encuentra asidero en las prácticas.

En ese sentido, encontramos que se verifica la afinidad planteada por algunas autoras y autores entre las luchas feministas y las luchas de las economías populares. No obstante, es un aspecto aún no del todo visualizado por sus protagonistas.

Si bien compartimos con las lecturas que advierten acerca de los riesgos de relegar a las economías populares a una función meramente reproductiva (*ahorrándole* ese costo tanto al capital como al Estado) (Mazzeo y Stratta, 2021), creemos que estas experiencias justamente

demuestran que han podido traccionar recursos del Estado para sostener sus tramas comunitarias y acomodarlas a las necesidades de sus comunidades. Hemos observado que existen en estas experiencias un despliegue organizativo y deliberativo que contiene elementos de autonomía para la definición de sus acciones, independientemente de la posición que se asume en relación al Estado (asumir o no cargos de gestión, simpatizar más o menos con la gestión de gobierno que se encuentre al frente de la institucionalidad estatal). Autonomía que no estamos evaluando en función de sus dinámicas internas (formas de participación, roles y mecanismos de tomas de decisión; más o menos horizontalidad interna), sino en relación a su capacidad de disputar recursos en la correlación de fuerzas al interior de la sociedad.

En las experiencias analizadas pudimos ver ciertas maneras de cuestionar las prácticas *reparatorias* estatales que Gago (2015) nos mostró como “modos precarios de inclusión social” que apelaban al consumo individual. Ese cuestionamiento creemos que se refleja en la apuesta de traccionar políticas públicas que apuesten al desarrollo de procesos colectivos y comunitarios, y no sólo el acceso al consumo. Entendemos que se produce una resignificación del sentido de la política social como medida “asistencial”. Para las organizaciones, los recursos transferidos por el Estado existen como conquista de las luchas previas que pudieron dar. Y por lo tanto, se disponen a organizar esa “asistencia” estatal en clave de sus intereses y a partir de mecanismos que consideren más convenientes.

Creemos que la irrupción de la “economía popular” como sector organizado, logró revitalizar esa capacidad política de correr los límites del lugar asignado a los “informales” en la sociedad y en la política estatal, dando un nuevo “aire” para el despliegue de inventivas productivas y económicas.

En relación al desarrollo de prácticas de intercambio que refuncionalicen la institución mercado bajo otras lógicas, aparecieron relatos en relación a la dificultad de llevar experiencias en ese sentido. Por un lado, por encontrar “la sábana siempre corta”, que dificulta mejorar al mismo tiempo tanto las condiciones de quienes participan en el circuito como productores y

quienes lo hacen como consumidores, dentro del sector de la economía popular. Por más buenas intenciones, las experiencias o bien terminan resolviendo la venta en sectores con mayor poder adquisitivo (lo que no es un problema en sí mismo, pero sí resulta excluyente para los propios compañeros consumidores), o bien, si se atiende a las necesidades de consumo, resulta difícil pagar un precio justo a los productores. En ese sentido, aparece la idea de iniciar un camino de “desmercantilización” de las necesidades, como por ejemplo la alimentación, que supone tanto la disputa por mayores recursos del Estado, así como también, la ampliación de las capacidades de autosustentación. Por otro lado, se manifiesta la importancia de que el desarrollo de estrategias de intercambio formen parte del ámbito de la política, y no de meras transacciones económicas entre organizaciones. Esto lo relacionamos con lo que Gutierrez Aguilar señala como los “modos en que se produce y aprovecha el usufructo común”, en relación a la definición y despliegue de lo político en los sistemas de producción de “lo común”.

En síntesis y por todo lo expuesto, la relación de las prácticas agrícolas con el desarrollo de estrategias de las economías populares urbanas analizadas, nos muestran una contribución en el desarrollo de una suerte de ensayos, intentos y despliegues de formas económicas que se acercan a la noción de la “producción de lo común”, como modos anticapitalistas de resolver la reproducción de la vida.

5.3.2. Territorialidades de la defensa

La segunda tendencia identificada se refiere a la territorialidad particular presente en los procesos de recuperación de espacios para el uso colectivo, los cuales no tuvieron inicialmente el objetivo de implementar estos dispositivos agrícolas. En algunos casos, ya se hacía uso del predio bastante tiempo antes, y sin embargo en determinado momento, se revisaron esos usos y se volcaron importantes esfuerzos en su refuncionalización.

Creemos que los mecanismos de despojo crecientes sobre los sectores populares y la emergencia de paradigmas de *securitización* del Estados, que con Alliez y Lazzarato (2022) identificamos como nuevos dispositivos de guerra, dejaron huellas y reacciones, respecto de

algo que puede representar una amenaza latente. Amenazas que pueden no haberse desactivado con el cambio de gobierno nacional en 2019.

Identificamos que esas territorialidades apelan tanto a la defensa de las conquistas realizadas en 25 años de organización, al tiempo que permiten que las mismas se sigan desarrollando. La necesidad de contar con trincheras propias, para estar, compartir, aguantar, organizarse, planificar, producir, trabajar, capacitarse, resultan en este contexto una posibilidad vital para estas experiencias. Son espacios donde desplegar instancias de autonomía.

También representan un modo de confrontar los discursos de odio cada vez más presentes en la sociedad, respecto de los trabajadores de la economía popular como “vagos”, “planeros”, “sucios”. Es mostrarle a la sociedad el orgullo de haber transformado el descarte social en una nueva alternativa. Los predios son espacios a defender, ocupar, no regalar, y las huertas contribuyen en esa estrategia.

5.3.3. Economías de la resistencia

Por último, encontramos que ambas tendencias (la lógica de restitución de lo común y la territorialidad de la defensa), configuran lo que definimos llamar economías de la resistencia, como aquellos procesos económicos que se orientan al sustento de la vida en contextos crecientemente adversos, pero desde una base organizada y colectiva, con capacidad de planificar estrategias para sobrellevar la contingencia. Lo comunitario cobra así un sentido político, y las prácticas de subsistencia, en lugar de economías de la pobreza, se tornan en capacidades para la defensa. Estas experiencias no sólo están enfrentando el desafío de desarrollar “otra economía”, organizar las prácticas económicas bajo nuevos valores, y ampliando la escala. Estas experiencias se enfrentan a dinámicas de dominación que buscan su desarticulación. Y en ese sentido, a partir de lo observado, entendemos que existe una resistencia a esa posibilidad.

Para concluir, las prácticas agrícolas urbanas como “ventanas de observación” tal como nos propone Gallardo Araya (2016), nos abrió el campo de análisis sobre este conjunto de

procesos, en los que encontramos particularidades significativas durante la etapa analizada. Aún con todas las adversidades que la etapa histórica plantea en términos de pensar las alternativas al capitalismo, creemos que en los casos analizados hay presentes “pistas”, búsquedas de cambio social, que hoy se resumen en la orientación popular comunitaria de resolver la reproducción de la vida, al tiempo que se resiste a la hostilidad que los efectos de la crisis civilizatoria hace recaer sobre ellas. En ese sentido, creemos que existen elementos suficientes para encontrar en estas experiencias la presencia de “horizontes comunitario-populares”, en el sentido que nos plantea Gutierrez Aguilar, como medio y proyecto de replantear las relaciones sociales.

5.4. Interrogantes para seguir profundizando

Más allá de las conclusiones abordadas, queremos dejar abierto algunos interrogantes que orienten reflexiones futuras.

Por un lado, se abre una cuestión acerca de cómo es posible conectar el crecimiento de las experiencias de lo que aquí llamamos el “emergente 2001” y que derivaron en la consolidación de un nuevo sector de trabajadores de la economía popular, con un proceso que emerge en los años recientes como reverso de aquel, que en la actualidad se traduce en el avance de las ultraderechas que se fortalecen tanto en la región como en otros continentes. En ese sentido, nos preguntamos en qué medida pueden influir estos procesos recientes en los recorridos que analizamos y cuál es la relación entre este recorte “organizado” de las economías populares y el mundo más diverso de trabajadores, que padeciendo también el empeoramiento de sus condiciones de vida, se definen o bien por estrategias que realzan el individualismo, la cultura de la meritocracia y un rechazo a todo intento de solución colectiva, o bien devienen en procesos de “implosión social”, con ausencia total de horizontes (Barttolotta y Gago, 2023).

Sería interesante seguir profundizando el análisis de las prácticas y sus representaciones, así como también los modos en que se traducen los discursos denigratorios respecto de los trabajadores de la economía popular. Poder indagar acerca de los efectos que producen en la subjetividad y en qué medida ponen en cuestión las lógicas colectivas que se puedan desarrollar.

Desde ese punto de vista será útil identificar cómo incide la “lógica de la contraprestación” de los subsidios, en la consolidación o no de una identidad en tanto trabajadores de nuevo tipo.

Otro aspecto a profundizar en próximos estudios, es la relación entre estas experiencias de prácticas agrícolas urbanas con la emergencia de nuevos procesos de “vuelta al campo”, que también se empiezan a ensayar en el ámbito de las economías populares organizadas. Hasta qué punto estas experiencias son disparadoras de experimentos de ese tipo y qué resultado tienen, como formas de avanzar en la restitución de riqueza social en otros ámbitos.

También encontramos oportuno promover estudios que permitan profundizar lecturas históricas respecto del desarrollo de prácticas y experiencias económicas de las economías populares, que amplíen lo esbozado aquí. Existe una vacancia en ese aspecto, ya que abundan estudios micro a partir de estudios de caso, pero no una lectura histórica de la evolución de las experiencias a lo largo del tiempo.

Por último, y en ese punto, creemos oportuno profundizar los debates conceptuales en torno a las otras economías, en clave de seguir reconociendo la riqueza de las distintas miradas que se encuentran presentes, así como clarificar sus desacuerdos. Entendemos que es un modo de promover el mutuo reconocimiento entre quienes se identifican como parte de la “economía popular”, de otros que se autoperciben como “economía social”, o bien “economía social y solidaria”, “economía feminista”, “economías populares”, “economía de ojos trabajadores”, “economía comunitaria”, entre otras posibilidades, y que de algún modo permita ampliar y fortalecer el campo.⁵⁶

Si bien la confluencia de voluntades no es producto de buenos debates, sino de acuerdos políticos o procesos muchas veces contingentes y no específicamente planificados, creemos que entender mejor aquellos elementos que distancian posiciones, pueden contribuir en un diálogo que colabore en robustecer alianzas. Tal como señalamos, consideramos que las distintas perspectivas analizadas abordan el fenómeno desde una *epistemología* con acentos distintos, por

⁵⁶ Una interesante aproximación en este sentido es el trabajo de Moreira Slepoy, J. (2020).

lo tanto es difícil ordenar un discurso dialógico que resulte preciso y pertinente.

Siendo un fenómeno y un campo en construcción -y recuperando lo ya señalado por uno de los entrevistados-, son experiencias en desarrollo que pueden implicar distintos sentidos al mismo tiempo, y que requerirán de múltiples intercambios y debates para su posibilidad de síntesis.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Abal Medina, P. (2016). *Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas*. Revista Nueva Sociedad (264), julio-agosto. <https://nuso.org/articulo/los-trabajadores-y-sus-organizaciones-durante-los-gobiernos-kirchneristas/>
- Aglietta, M. (2000). *La globalización financiera. Finanzas, inversión y crecimiento*, 59, 1-14. <https://www.sinpermiso.info/textos/la-globalizacion-financiera>
- Arosamena, G. (2012). *Agricultura Urbana. Espacios de cultivo para una ciudad sostenible*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Arqueros, M. X. y Gallardo Araya, N. L. “La Agricultura Urbana ¿una práctica utópica en las ciudades globales?”. (2014) En Arqueros M. X., Gallardo Araya N. L. y Souza Casadinho J. (coordinadores) *Huertas urbanas agroecológicas: espacios de acción y reflexión*. <https://www.feduba.org.ar/2020/04/29/huertas-urbanas-agroecologicas-espacios-de-accion-y-reflexion/>
- Arzaluz Solano, S. (2005). *La utilización del estudio de caso en el análisis local. Región y sociedad*, 17(32), 107-144. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252005000100004&lng=es&tlng=es
- Barttolotta, L. y Gago, I. (24 de abril de 2023). *Eso que suena es la sociedad implosionando*. Revista Anfibia, <https://www.revistaanfibia.com/eso-que-suena-es-la-sociedad-implosionando/>
- Bartra, A. (1979). *La explotación del trabajo campesino por el capital*. México DF: Macehual.
- Bascuas, M.; Roco Sanfilippo, J.; Piris, S.; Cabrera, M.; Ortega, N. y Pérez, Z. (enero de 2019). *Construir, cuidar, habitar: prácticas feministas en organizaciones de la economía solidaria*. Papeles de Economía Solidaria Nro. 6. <https://www.economiasolidaria.org/recursos/reas-euskadi-biblioteca-papeles-ess-06-construir-cuidar-habitar-practicas-feministas-en/>
- Basualdo, E. (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera (1976-2001)*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Beckmann, E.; Chaqui, S.; Musso, J. Rodríguez (2019). *Ampliando la potencialidad política del concepto de economía popular. Reflexiones en torno a sus definiciones y horizontes emancipatorios*. http://observatorioess.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/EJE-1-Organizacion-de-trabajos-3_64-81.pdf
- Bruno, D., Coelho, R. y Palumbo, M. M. (2017). *Innovación organizacional e institucionalización conflictiva de las organizaciones de la economía popular. El caso de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)*. Argumentos N° 19,

- octubre 2017, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani.
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/75139>
- Caffentzis, G. y Federici, S. (2019). “Comunes contra y más allá del capitalismo”. En VVAA, *Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida*. Madrid: Traficantes de sueños. 45-58.
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS-UTIL_Apantle_web.pdf
- Campana, J. y Rossi Lashaya, A. (2020). *Economía Popular y Feminismo: articulaciones y nuevas demandas emergentes*. Revista Otra Economía, 13 (23), pp. 246-263, enero-junio.
<https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14888>
- Caracciollo, M; Dumrauf, S.; Gonzalez, E.; Moricz, M. y Real, A. (2012). *Modalidades alternativas de comercialización en la agricultura familiar: entre el supermercado y la soberanía alimentaria*. VI Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales "Economía Social y Solidaria: Experiencias, Saberes y Prácticas", 26 de octubre de 2012, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Castel, R. (2002). *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Buenos Aires: Paidós.
- Chena, P. (2017). “La economía popular y sus relaciones fundantes”. En Emilio Pérsico et al. (eds.) *Economía popular. Los desafíos del trabajo sin patrón*. 141-59. Buenos Aires: Colihue.
- Chena, P. (2020). *Economía popular: un modo de producción que puja por desarrollarse*. Revista Realidad Económica (351). 9-32. Buenos Aires: IADE.
- Chesnais, F. (2003). *La teoría del régimen de acumulación financiarizado: contenido, alcance e interrogantes*. Revista de Economía Crítica, 1, 37-72.
- Chiroque Solano, H. y Mutuberría Lazarini, V. (2011). *Perspectivas y aportes desde la Economía Comunitaria como alternativa para el desarrollo de “otra economía” en Latinoamérica*. Revista del CCC 4(11), Ene-Abr.
<https://www.centrocultural.coop/revista/11/perspectivas-y-aportes-desde-la-economia-comunitaria-como-alternativa-para-el-desarrollo>
- Clausewitz, C. [1832] (2005). *De la guerra*. La Esfera de los Libros, Madrid.
- Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). (2019). Informe Nro. 24. Situación represiva a nivel nacional.
<http://www.correpi.org/2019/archivo-2019-cambiemos-nos-deja-una-muerte-cada-19-horas>
- Coraggio, J. L. (2004). *De la emergencia a la estrategia. Más allá del alivio a la pobreza*. Buenos Aires: Editorial Espacio

- Coraggio, J. L. (2010). "Pensar desde la perspectiva de la economía social". En Cittadini, R. et al. (comps.). *Economía social y agricultura familiar. Hacia nuevos paradigmas de intervención*. 29-106. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Coraggio, J. L. (2020). *Economía Social y Economía Popular: conceptos básicos. Contribución de Consejeros*. Serie Documentos. INAES. Buenos Aires.
- Coraggio, J. L. y Loritz, E. (2023). *Economía popular y economía social. Entre la emergencia y la estrategia*. Buenos Aires: Ciccus
- Daghendart, B. (2016). *La agricultura urbana: un fenómeno global*. Revista Nueva Sociedad (262), marzo-abril.
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/9.TC_Degenhart_262.pdf
- Federici, S. (2022). *Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes*. Ed. Tinta Limón.
- Federici, S. (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Federici, S. (2010). *El Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Fernández Álvarez, M. I. (2016). *Experiencias de precariedad, creación de derechos y producción colectiva de bienestar(es) desde la economía popular*. Revista Ensamblés, año 3, Edición doble n.4 y 5, 72-89.
<http://www.revistaensambles.com.ar/ojs-2.4.1/index.php/ensambles/article/view/76>
- Fernández Álvarez, M. I. (2019). *Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular*. Ciudadanías. Universidad de Tres de Febrero. Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas; Ciudadanías; (4) 119-118.
<http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/506>
- Fernandez Alvarez, M. I. y Rebon, J. (2022). *Autogestión movilizada. Empresas recuperadas y economía popular en Argentina*. Buenos Aires: CLACSO
- Fernandez Wagner, R. (2018). *Buenos Aires, la construcción de la injusticia espacial*. Revista Cuestión Urbana 2(4), diciembre 2018, 37-50.
<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/article/view/5202/4335>
- Ferrari Mango, C. (2020). *Del "desmantelamiento" a la "reconstrucción" desde la política social: el Potenciar Trabajo*. Revista Movimiento, (24), 97-101,
<http://www.revistamovimiento.com/politicas/del-desmantelamiento-a-la-reconstrucc>
- Foucault, M. (1992). *Genealogía del racismo*. Buenos Aires, Altamira.
- Foucault, M. (2008). *Historia de la sexualidad I: la voluntad del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Fraser, N. (2020). *Los talleres ocultos del capital. Un mapa para la izquierda*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Gago, V. (2014). *La Razón Neoliberal: economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
- Gago, V. y Mezzadra, S. (2015). *Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización*. Nueva Sociedad (255)
<https://nuso.org/articulo/para-una-critica-de-las-operaciones-extractivas-del-capital-patron-de-acumulacion-y-luchas-sociales-en-el-tiempo-de-la-financiarizacion/>
- Gago, V. (2016). *Diez hipótesis sobre las economías populares*. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades, Nombres (Córdoba). 30 (12), 179-188.
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/NOMBRES/article/view/21240>
- Gago, V. (2017). *Intelectuales, experiencia e investigación militante: Avatares de un vínculo tenso*. Fundación Foro Nueva Sociedad; Nueva Sociedad (268). 65-76
<https://nuso.org/articulo/intelectuales-experiencia-e-investigacion-militante/>
- Gago, V., Cielo, C. y Gachet, F. (2018). *Economía popular: entre la informalidad y la reproducción ampliada*. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. (62), 11-20.
- Gago, V. [Facultad Libre] (17 de mayo 2018a). *Lo común en disputa. Clase 1*. [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=VwQDtD6JvNI>
- Gago, V. [Facultad Libre] (17 de mayo 2018b). *Lo común en disputa. Clase 2*. [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9WkCoKJ6Li4>
- Gago, V. (2019). *La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Gallardo Araya, N. L. (2012). *La agricultura en la ciudad de Buenos Aires*. VII Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2012, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1916/ev.1916.pdf
- Gallardo Araya, N. L. (2015). *El espacio vivido y la experiencia presente: las prácticas agrícolas en la ciudad*. Revista Prácticas de Oficio (16), Diciembre 2015, IDES-UNGS, Buenos Aires.
<https://studylib.es/doc/8761010/el-espacio-vivido-y-la-experiencia-presente--las-pr%C3%A1cticas>
- Gallardo Araya, N. L. (2016), *Huertas urbanas en contexto. La cuestión ambiental en la Ciudad de Buenos Aires*. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de General Sarmiento].
<https://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/320>
- Gallardo Araya, N. L. (2014) “Agricultura Urbana y Agroecología... hacia una definición de Agroecología Urbana”. En Arqueros M. X., Gallardo Araya N. L. y Souza Casadinho J. (coordinadores) *Huertas urbanas agroecológicas: espacios de acción y reflexión*.

<https://www.feduba.org.ar/2020/04/29/huertas-urbanas-agroecologicas-espacios-de-accion-y-reflexion/>

- García, L. (9 de octubre de 2017). *Las cooperativas implementadas por el Estado para generar puestos de trabajo en Argentina. Sus características y su contexto actual*. Revista URBARED, Universidad Nacional de Quilmes. <http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/publicaciones-por-ano/281-las-cooperativas-implementadas-por-el-estado-para-generar-puestos-de-trabajo-en-argentina-sus-caracteristicas-y-su-contexto-actual>
- García, M. M. (2022). *La CTEP-UTEP y la irrupción de los trabajadores de la economía popular como sujetos de derecho. Análisis de los procesos de subjetivación en el Polo Arenaza*. [Tesis de Maestría. Universidad Nacional de General Sarmiento].
- Gorz, A. (1997). *Metamorfosis del trabajo*. Madrid: Editorial Sistema.
- Grabois, J. y Pérsico, E. (2015). *Trabajo y organización en la economía popular*. Buenos Aires: CTEP-Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular
- Gutierrez Aguilar, R. (2019). “Común, ¿hacia dónde? Metáforas para imaginar la vida colectiva más allá de la amalgama patriarcado-capitalismo y dominio colonial”. En VVAA, *Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida*. Madrid: Traficantes de sueños. 79-93. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS-UTIL_Apantle_web.pdf
- Gutierrez Aguilar, R. y Salazar Lohman, H. (2019). “Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el presente”. En VVAA, *Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida*. Madrid: Traficantes de sueños. 21-44. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS-UTIL_Apantle_web.pdf
- Gutiérrez Aguilar, R. (2017). *Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estadocéntricas*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Gutierrez Aguilar, R. [Nociones Comunes] (1 de diciembre 2021). *Producir lo común. Hacia una política no estado-céntrica*. [Archivo de video]. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=4faMJkj_H2I
- Gutman, P. y Gutman, G. (1986). *Agricultura Urbana y periurbana en el Gran Buenos Aires. Alcances y perspectivas*. CEUR
- Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Editorial AKAL.
- Hermi Zaar, M. (2011). *Agricultura urbana algunas reflexiones sobre su origen e importancia actual*. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 16(944). 15 de octubre de 2011. <https://www.ub.edu/geocrit/b3w-944.htm>
- Herrera, F. F. y Painena, O. D. (2022), *Agroecologías insurgentes en Venezuela. Territorios, luchas y pedagogías en revolución*. Documento del MINCYT, República Bolivariana de Venezuela.

<https://www.mincyt.gob.ve/wp-content/uploads/2022/04/Agroecologias-insurgentes-en-Venezuela.pdf>

- Hopp, M. V. (2016). *Potencialidades y límites del programa Argentina Trabaja en dos barrios populares del conurbano bonaerense*. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, (27), 7–35. <https://doi.org/10.14409/da.v16i27.6162>
- Hopp, M. V. (2018). *De la promoción del trabajo cooperativo al Salario Social Complementario: Transformaciones en la transferencia de ingresos por trabajo en la Argentina*. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Ciudadanías; (2) 5-2018; 113-142. <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/535>
- Lazzarato, M. (2013). *La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal*. Madrid: Amorrortu.
- Lazzarato, M. y Alliez, É. (2021). *Guerras y capital. Una contrahistoria*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Longa, F. (2019). *Historia del Movimiento Evita. La organización social que entró al estado sin abandonar la calle*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- INTA (2012a). *Agricultura Urbana y Periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Creación de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- INTA (2012b). *La huerta orgánica*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- INTA. (2019). *Desarrollo de Sistemas Agropecuarios Urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Plataforma de Innovación Territorial (PIT)*. Documento interno.
- Liendo, M. G., Martínez, A. M., Pellegrini, J. L. (2000). *Huertas urbanas como prácticas de economía solidaria en el sur de la provincia de Santa Fe*. 8vo. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo de la ASET, Buenos Aires. <https://aset.org.ar/congresos-anteriores/8/pdf/13135.pdf>
- Maldovan Bonelli, J. (2014). *De la autonomía a la asociatividad: la organización del trabajo cartonero “en calle” en cooperativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*. Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Número 6. FCE-UBA. <http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/CESOT/article/view/643>
- Maldovan Bonelli, J. (2018). *Economía Popular. Debate conceptual de un campo en construcción*. Universidad Metropolitana del para la Educación y el Trabajo (UMET). Trabajo y Economía Popular. Cudernillo N°1 https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/2018_LIBRO_PEPTIS-cuadernillo-1_
- Maldovan Bonelli, J.; Fernandez Moujan, L; Ynoub, E.; Moler, E. G.; (2017). *Los descamisados del siglo XXI: De la emergencia del sujeto trabajador de la economía popular a la organización gremial de la CTEP (2011-2017)*. Universidad Nacional de Avellaneda; Cartografías del Sur, (6) 41-64 <https://doi.org/10.35428/cds.vi6.87>

- Mançano Fernandes, B. (2008). “La ocupación como una forma de acceso a la tierra en Brasil: una contribución teórica y metodológica”. En Sam Moyo y Paris Yeros [coord.] *Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina*. Buenos Aires: CLACSO. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/moyo/15Fernandes.pdf>
- Marx, K. y Engels, F. [1848] (2017). *Manifiesto comunista*. Buenos Aires: Siglo XXI
- Marx, K. [1867] (2000). *El capital. Crítica de la Economía Política*. Tomo I. México D.F.: Fondo de Cultura Económica
- Mazzeo, M. y Stratta, F. (2021). *¿Qué es la economía popular? Experiencias, voces y debates*. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
- Merlinsky, M. G. (2008). *Agregando valor a los estudios de caso: reflexiones desde la trastienda de la investigación*. I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, La Plata, Argentina. En Memoria Académica: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9529/ev.9529.pdf
- Mochón, F. y Becker, V. (2007). *Economía. Elementos de micro y macroeconomía*. Buenos Aires: Mac Grow Hill.
- Morán, N. (2015). *Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana*. Editorial Libros en Acción, Madrid. https://raicesyasfalto.files.wordpress.com/2017/09/libro_raices_en_el_asfalto-2ed.pdf
- Moreira Slepoy, J. (2020). “Los mundos de la otra economía y la relevancia de las identidades políticas”. En Moreira Slepoy, J. y Serra, H. R. (coords.) *La construcción política de las otras economías en la Argentina posbienestarista*. Editorial Los Ríos.
- Mougeot, L. J. (1999). *Agricultura Urbana: definición, presencia, potencialidades y riesgos*. En DSE/ZEL (Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional / Oficina Central para la Alimentación y la Agricultura), *Ciudades en Crecimiento Cultivando Alimentos*. <https://docplayer.es/17553184-Agricultura-urbana-definicion-presencia-potencialidades-y-riesgos-luc-j-a-mougeot-1-introduccion.html>
- Muñoz, M. A. y Villar, L. I. (2017). *Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en la CGT). Entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 2011-2017)*. *Crítica y Resistencias* (5), 22-52. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13324/pr.13324.pdf
- Natalucci, A. L. y Mate, E. P. (2020). *Estrategias de institucionalización de los trabajadores de la economía popular y sus organizaciones: Revisitando la Ley de Emergencia Social (Argentina, 2016)*. Universidad Nacional de Avellaneda; *Cartografías del Sur*; 12; 12-2020; 168-188. <https://doi.org/10.35428/cds.vi12.209>
- Palumbo, M. M. (2017). *Dinámicas de construcción de subjetividades políticas y epistémicas en dispositivos pedagógicos de formación política. Un estudio en movimientos populares*

- multisectoriales del Área Metropolitana de Buenos Aires (2011-2015)*. [Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires] <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/6058>
- Polanyi, K. ([1944] 2007). *La gran transformación. Crítica del liberalismo económico*. Fondo de Cultura Económica.
- Portes, A.; Castells, M.; Benton, L.(1989) *The informal economy*. Baltimore: Johns Hopkins University.
- Quiroga Díaz, N. y Gago, M. V. (2014). *Los comunes en femenino: Cuerpo y poder ante la expropiación de las economías para la vida*. Revista Economía y Sociedad, Universidad Nacional de Costa Rica; Economía y sociedad, 19 (45); 1-19 <http://dx.doi.org/10.15359/eyes.19-45.1>
- Ragin, Ch. y Becker, H. (1992). *What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*. Nueva York, Cambridge University Press.
- Rach, D. (2022). *Genealogías políticas en la construcción sindical de la economía popular: la CTEP y la UTEP*. De Prácticas y Discursos, Cuadernos de Ciencias. Universidad Nacional del Nordeste, 11 (18) <https://doi.org/10.30972/dpd.11186331>
- Roig, A. (2017). *Financiarización y derechos de los trabajadores*. En Emilio Pérsico et al. (eds.) *Economía popular. Los desafíos del trabajo sin patrón*. Buenos Aires: Colihue.
- Roig, A. (20 de diciembre de 2020). [ecofutura]. *Conceptos fundamentales de la Economía Popular*. [Archivo de video]. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=qp08ijFp_LE
- Schmitt, N. (2019). *Políticas de Seguridad, “Nuevas Amenazas” y Demagogia Punitiva. Cambiemos y la construcción del nuevo “enemigo interno”*. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Sack, R. (1986). *Human territoriality: its theory and history*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Segato, R. (2013). *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Señorans, D. (2018). *El derecho a la vida digna. Formas de militancia en la economía popular en el Área Metropolitana de Buenos Aires*. [Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires]. <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/9978>
- Soler Montiel, M.M. y Rivera Ferre, M.G. (2010). “Agricultura urbana, sostenibilidad y soberanía alimentaria: Hacia una propuesta de indicadores desde la agroecología”. En *Sociología y sociedad en España: hace treinta años, dentro de treinta años*. X Congreso Español de Sociología, Pamplona. <https://hdl.handle.net/11441/88300>
- Sousa Santos, B. (2000). *Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia*. Bilbao: Editorial Desclee.

- Sousa Santos, B., y Rodríguez, C. (2011). *Para ampliar el Canon de la producción*. Revista Otra Economía, 1(1),8-13.
<https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/1053>
- Sousa Santos, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*. Buenos Aires: Clacso.
- Stake, Robert. E. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Ediciones Morata
- Svampa, M. y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- Svampa, Maristella (2016), “Lenguajes de valoración, territorialidad y bienes comunes en la lucha contra el extractivismo en América Latina”, en Coraggio (org.) *Economía social y solidaria en movimiento*, UNGS/IAEN/CLACSO/D&R, Los Polvorines/Quito
- Svampa, M. (2020). *El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Tagliafico, P. J. Schamber y Adriana García. (2015). *Organización del trabajo y surgimiento de formas asociativas entre los recolectores de residuos reciclables: el caso de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste en la Ciudad*. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
<https://cdsa.academica.org/000-061/535>
- Tokatlian, J. G. (Julio de 2018). *El gobierno argentino y la Doctrina de Inseguridad Nacional*. Nueva Sociedad.
<https://nuso.org/articulo/el-gobierno-argentino-y-la-doctrina-de-inseguridad-nacional/>
- Tokman, V. E. 1992. *Beyond regulation. The informal sector in Latin America*. Nueva York: Boulder, Lynne Rienner
- Vázquez Gonzalo (2017). *Antecedentes de la noción de economía popular: La perspectiva coraggiana*. En Revista Cartografías del Sur, N° 6, Diciembre de 2017. Universidad Nacional de Avellaneda.
- Wallerstein, I. (1998). *Utopística, o las opciones históricas del siglo XXI*. México: Siglo XXI.
- Wallerstein, I. (2010). “Latinoamérica y los movimientos sociales antisistémicos”. En VVAA, *Pensando el mundo desde Bolivia, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia*, La Paz, 2010, 319-326.
https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/pensando_elmundo.pdf
- Yin, Robert K. (1994). *Case Study Research. Design and Methods*. Second Editions. Thousand, Oaks: SAGE.

Zanotti, G. G., Cassini, L. y Schorr, M. (Julio de 2019). *El poder económico del gobierno de Cambiemos*. Revista del Plan Fénix, FCE-UBA, 7(79), 82-89.
<https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/el-poder-economico-bajo-el-gobierno-de-cambiemos/>

7. FUENTES

Agencia Farco, (30/11/15). *Cedieron un terreno al Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros*.
<http://agencia.farco.org.ar/noticias/cedieron-un-terreno-para-que-se-desarrolle-el-paseo-d-e-la-economia-popular-martin-oso-cisneros/>

Agencia de Noticias Tierra Viva (17 de Mayo de 2021). *Recuperadores urbanos: creadores de trabajo y conciencia ambiental*.
<https://agenciatierraviva.com.ar/recuperadores-urbanos-creadores-de-trabajo-y-conciencia-ambiental>

Diario Perfil (27/5/23). *La transformación de un baldío de recicladores urbanos a un espacio verde, público y temático*.
<https://www.perfil.com/noticias/sociedad/la-transformacion-de-un-baldio-de-recicladores-urbanos-a-un-espacio-verde-publico-y-tematico.phtml>

Francisco, (24 de mayo de 2015). *Carta Encíclica Laudato Si'. Sobre el cuidado de la Casa Común*. Iglesia Católica.

Francisco (9 de julio de 2015). *Discurso en el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares*. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
<https://systemicalternatives.org/2015/07/10/papa-francisco-participacion-en-el-ii-encuentro-mundial-de-los-movimientos-populares/>

Marcha. (1/4/2015). *Pescadores autogestivos escapan de las redes corporativas*.
<https://marcha.org.ar/pescadores-autogestivos-escapan-de-las-redes-corporativas/>

Página 12. (22/12/19). *Nació la Utep, el gremio de los trabajadores de la economía popular*.
<https://www.pagina12.com.ar/237866-nacio-la-utep-el-gremio-de-los-trabajadores-de-la-economia-p>

Página 12. (08/06/20). *IFE: este lunes comienza el segundo pago*.
<https://www.pagina12.com.ar/270935-ife-este-lunes-comienza-el-segundo-pago>

Portal Qué Pasa Web (13/11/17). *Se presentó la CTEP en Zona Norte*.
<https://www.quepasaweb.com.ar/jornada-ctep-arenaza-boulogne/>

Real Academia Española (2022). *Diccionario de la Lengua Española Digital*.
<https://dle.rae.es/resistencia>